

**TRANSFORMACIONES SOCIALES Y ACCIONES COLECTIVAS
AL FINALIZAR EL SIGLO XX: BALANCES Y PERSPECTIVAS**

**Reestructuración económica y realineamientos
políticos en México**

Juan Molinar Horcasitas

cb524754

338.98/C7197/1992

Coloquio ...
Transformaciones ...

Seminario organizado por el Centro de Estudios Sociológicos de
El Colegio de México, del 11 al 13 de noviembre de 1992

REESTRUCTURACION ECONOMICA Y REALINEAMIENTOS POLITICOS EN MEXICO

Por Juan Molinar Horcasitas

[Primer borrador. No citar]

Los argumentos desarrollados en esta ponencia se basan dos supuestos teóricos que confrontan uno de los elementos básicos del análisis ortodoxo del sistema político mexicano. En este trabajo asumo en primer lugar que el presidencialismo mexicano ha sido estructuralmente débil en el proceso de toma de decisiones, y en segundo lugar que su debilidad se debe a que su base de sustentación es un partido político, el PRI, que forma una coalición insostenible en circunstancias de aguda escasez de recursos que fuercen a la toma de decisiones en arenas redistributivas.

La debilidad de la presidencia como agencia central en el proceso de toma de decisiones, y la fuerza que por constraente tiene el PRI como coalición de grupos políticos, es lo que explica el comportamiento errático e indeciso de las administraciones presidenciales de Luis Echeverría y José López Portillo, por un lado, y las escisiones en el PRI y los realineamientos políticos que provocaron las reformas decisivas y radicales de las administraciones de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas.

En pocas palabras, mientras los presidentes fueron rehenes de su coalición política, el partido se mantuvo unido; cuando los presidentes decidieron optar por una parte de su coalición en detrimento de la otra,

el partido se dividió. El partido oficial se mantuvo relativamente unido durante las administraciones de Echeverría y López Portillo, porque ambos presidentes desistieron de tomar decisiones de política económica gravemente divisivas para su partido, como la reforma fiscal, la liberalización de la economía, la privatización del sector paraestatal, o la reforma al artículo 27. En este sentido, el populismo de ambos no consistió en una actuación impulsiva y sin límites, sino en el intento de satisfacer al mismo tiempo a todas las fuerzas políticas que integraban la coalición priísta. En cambio, la escisión partidista que tuvo lugar en 1988, y todo el proceso de realineamiento político que continúa en marcha se debió a que los presidentes de la Madrid, pero sobre todo Salinas, decidieron emprender dichas reformas.

Me hago cargo del carácter problemático de estos dos supuestos. De hecho acepto sin reservas que en el estado actual de mi investigación no son otra cosa que propuestas trabajo. Sin embargo, me parece que esta puede ser una línea fructífera de análisis. Además, no se trata de una línea de análisis totalmente original, ya que fue esbozada cuando menos desde los trabajos de Robert Scott (1959) y Raymond Vernon (1966). Algunas de esas ideas han sido retomadas en trabajos más recientes, como el de Dale Story (1986). Dicho esto, paso al tema.

Decir que la década de los ochenta fue un periodo agitado de cambios en la historia mundial sería un eufemismo. Quizá sería más correcto decir que ese decenio fue en realidad el último del Siglo XX. Durante este breve tiempo no sólo presenciamos el fin de la guerra fría, sino incluso la desaparición de la Unión Soviética, utopía e infierno de nuestro siglo. Vamos, ni siquiera México, fiel seguidor de aquello que

Gabriel Zaid llamó alguna vez el "modelo tibetano", pudo abstraerse de la corriente de transformaciones económicas y políticas que sacudieron al mundo entero y también se embarcó de lleno en un proceso de transformación económica y política de gran magnitud. De hecho, es posible decir que la última década ha atestiguado una redefinición de varios de los elementos fundamentales en la configuración de la economía y la política mexicanas.

En este artículo pasaremos breve revista a este proceso general, analizándolo en tres grandes niveles: primero, estableceremos el marco que da unidad a los procesos de reestructuración económica y de realineamiento político. Después describiremos el acelerado proceso de realineamientos ideológicos y estratégicos que aún se desarrollan en el subsistema de partidos. Y, por último, nos referiremos a las modificaciones observadas en el comportamiento del electorado, que experimentó al menos un proceso de desalieneación, sino es que de realineamiento.

REESTRUCTURACION ECONOMICA Y REALINEAMIENTO POLITICO

El proceso de realineamiento partidario que estalló visiblemente en México durante la sucesión presidencial de 1988, y cuyo elemento más notable fue la escisión del Partido Revolucionario Institucional (PRI) encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, tiene sus antecedentes directos en la crisis del modelo de desarrollo mexicano iniciada en los años setenta, y su marco específico en la estructura política del presidencialismo mexicano.

Desde el inicio de la década de 1970 el modelo de desarrollo mexicano empezó a dar claros síntomas de agotamiento. Los más notorios

signos de esta crisis eran el estado de postración de la agricultura mexicana, la incapacidad del sector industrial para generar los empleos necesarios para absorber las necesidades de empleo que producían tanto el crecimiento demográfico como los flujos migratorios hacia las ciudades, pero sobre todo, la clara evidencia de que el cada vez más profundo desequilibrio externo de la economía tenía raíces estructurales.

Los signos eran tan notorios que las advertencias sobre el desastre ya no sólo provenían de observadores externos a los círculos gubernamentales (Vernon, 1966), sino que empezaron a emitirse incluso desde dentro de los círculos de economistas cercanos al gobierno¹. Como era de esperarse, los críticos disentían ampliamente en sus propuestas alternativas. Algunos sugerían políticas antiinflacionarias enérgicas y la modificación del modelo de desarrollo para hacerlo más competitivo en el exterior (Solís, 1985 [1970]; Villarreal, 1976; Ortiz Mena, 1980;), mientras que otros sugerían profundizar en la persecución de estrategias basadas en el mercado interno, la demanda popular y la intervención estatal directa en la producción (Ibarra, 1970, Martínez de Navarrete, 1970).

El tiempo, lejos de contribuir a cerrar la brecha entre estos dos proyectos opuestos, aceleraba su polarización al ritmo en que se deterioraban los indicadores del comportamiento de la economía durante la administración de Luis Echeverría. En cualquier caso, lo cierto es que ninguno de los polos sugería alternativas de bajo costo

¹ Muy sintomático es el volumen *Nuestro proteccionismo industrial. Análisis crítico*, que editó el IEPES en 1969, de cara a la campaña presidencial de 1970.

político. Las medicinas que los dos polos recetaban eran igualmente amargas y política o económicamente costosas, aunque los sectores sociales y los aliados políticos que en apariencia cargarían con los costos variaban en cada caso: devaluación, estabilización del gasto, liberalización comercial, reforma fiscal, ampliación del sector paraestatal, reversión del sesgo antiagrícola del modelo, etc.

Quizá por ello es que las decisiones de política económica del gobierno de Luis Echeverría resultaron controvertidas y aparentemente radicales, aunque en realidad fueron limitadas y del todo insuficientes (Villarreal, 1976: pp. 192-204). [Existen varios ejemplos de las limitaciones que enfrentó Echeverría en sus intentos de introducir reformas de fondo: la reforma fiscal, fue detenida, la transformación de la CTM pronto se detuvo, los cambios en la política comercial no sólo fueron limitados sino que de inmediato se revirtieron. Desarrollar]. Ante la polarización de las alternativas que enfrentaba, y ante los altos costos políticos que las reformas implicaban, el comportamiento del gobierno se ajustó a la advertencia que años antes había lanzado Raymond Vernon (1976: p. 206): "el presidente de México, frente a una variedad de alternativas para reanudar el ascenso, puede decidir no escoger alguna de ellas; o con la misma probabilidad, en un esfuerzo por disuadir a su caballo de que corra en todas direcciones al mismo tiempo, puede seguir un camino errático y variable, sin ninguna dirección." Sólo al final su administración, ya con Presidente electo, pudo el gobierno de Echeverría tomar la decisión de devaluar. Algo tarde, pues para entonces la deuda pública externa era ya de 20,000 millones de dólares, cuatro veces mayor que al inicio del sexenio.

La siguiente administración encontró en el petróleo el generador de los recursos aparentemente suficientes para compensar el desequilibrio externo de la economía mexicana sin introducir ninguna de las reformas estructurales que se se habían venido señalando, de modo que bajo el manto de las divisas petroleras se acumularon crecientes déficits fiscales y comerciales. Las causas estructurales de estos déficits se mantuvieron intocadas, aunque el gobierno había anunciado que tomaría medidas al respecto. López Portillo, por ejemplo, desistió de su ingreso al Acuerdo Generalizado de Aranceles y Comercio (GATT) incluso después de haber signado el Protocolo de Adhesión ante los costos políticos que representaba (Story, 1986). Igualmente, López Portillo desistió, al igual que Echeverría y antes que él Díaz Ordaz, de introducir una reforma fiscal a fondo. La explicación de estas indecisiones se ha cargado por lo general a la cuenta del petróleo. Consecuentemente, cuando el precio del petróleo se hundió, el boom de la economía mexicana estalló en una crisis de proporciones inéditas. Para entonces, no sólo la economía, sino también el sistema político estaban en crisis (Newell y Rubio, 1984: 223-25).

Todas y cada una de esas reformas tenían implicaciones políticas profundas, que afectarían las condiciones que garantizaron "la estabilidad" de las décadas previas. Tanto los equilibrios políticos internos del partido, como las formas específicas de regulación estatal que esos equilibrios demandaban, serían fuertemente alterados si se tomaba cualquiera de las críticas de política económica que los polos opuestos de la coalición englobada en el partido oficial demandaban [Desarrollar a partir de Newel y Rubio, 1984, y Story, 1986]. Tomando

prestada la expresión de Cordera y Tello (1981), el partido se mantuvo unido durante los turbulentos años de la crisis y el boom porque la disputa por la nación se mantuvo en empate. Cuando el empate se rompió, con la nominación de Carlos Salinas como candidato del PRI a la Presidencia de la República, la unidad de la coalición posrevolucionaria también se rompió.

El ingreso de México al GATT, la política de deuda externa del gobierno de de la Madrid, y sus políticas fiscales y monetarias fueron, en este sentido, el rompimiento temporal del empate. La designación de Carlos Salinas, y del equipo que se venía imponiendo en la conducción económica desde la salida de Silva Herzog, es decir, Miguel Mancera, Pedro Aspe, Ernesto Zedillo, José Córdova, significaba la prolongación de ese desequilibrio hacia el siguiente sexenio, y quizá con ello, la ruptura del empate que conservaba unida a la coalición posrevolucionaria [Desarrollar el análisis de la élite política posrevolucionaria en la línea de Miguel Centeno, 1991].

El discurso que Carlos Salinas pronunció en Garza García, Nuevo León, hogar del más importante y mejor organizado grupo empresarial del país, fue el sello final de esta ruptura. Ahí, Salinas dijo que:

"En los próximos años, varios serán los motores del crecimiento sostenido: la inversión privada, las exportaciones no petroleras, la inversión pública en infraestructura, y la expansión del mercado interno" (Garza García, 19 de mayo de 1988).

Este ordenamiento de "motores" no era casual, como el resto del discurso dejó bien claro. El primer motor sería, sin duda, la inversión

privada, así, a secas, lo cual implicaba el tratamiento igualitario de la inversión extranjera, que sería buscada intensamente.

El segundo motor serían las exportaciones no petroleras, con lo cual no sólo se ratificaba la primacía privada sobre la economía, sino la reversión del proteccionismo industrial, cerrando tajantemente el periodo de vigencia del modelo de industrialización que México siguió desde 1940., así como la primacía de los componentes externos de la demanda sobre los internos en la dinamización de la economía.

El tercer motor sería la inversión pública. Pero ello no era buena nueva para los impulsores del modelo que Tello y Cordera definió como nacional, porque tal inversión sería restringida a la dotación de infraestructura, y no al papel supletorio, estratégico y regulador que los nacionalistas le otorgaban.

En último lugar, precisamente en último término, Salinas mencionó la expansión del mercado interno. Sobra decir que si los tres otros motores efectivamente funcionaban, el mercado interno tenía necesariamente que expandirse. Demasiado "trickle down conomics" para el gusto de los sectores de centro izquierda de la coalición posrevolucionaria.

REALINEAMIENTOS PARTIDARIOS

Cambio económico y cambio político, en este aspecto, se retroalimentan en una relación de causalidad endógena: las crisis económicas alientan la revisión de las estrategias y producen reacomodos en los grupos políticos, estos reacomodos producen cambios en la política económica, éstos cambios de política a su vez tienen algún efecto sobre el

desempeño económico, y éste desempeño afecta el equilibrio entre los grupos políticos que se apoyan en diversas coaliciones y que impulsan políticas alternativas, cerrando así el círculo. [Comparar aquí algunos de los análisis importantes sobre este ciclo (desempeño económico)-(política económica)-(grupos político burocráticos)-(coaliciones de apoyo). En especial, seguir la línea de desarrollo que va de Raymond Vernon a John Shehanan, pasando por Nora Hamilton Dale Story, Denise Dresser, etc.].

Esta es la dinámica de cambio que resume las dos últimas décadas de economía y política mexicanas. Durante ese periodo se sucedieron aceleradamente varias crisis, auges petroleros, recesiones, y reestructuraciones, para, quizá finalmente, dar lugar al abandono de un modelo de desarrollo y su reemplazo por otro, diametralmente opuesto. Este periodo contrasta notoriamente con las tres décadas de desarrollo estabilizador.² Las dos décadas que han corrido desde 1970 se han caracterizado por la inestabilidad económica, por el enorme contraste entre las medidas económicas establecidas de unos años a otros, por el desarrollo de una turbulenta política partidaria electoral, y por la renovación casi total de los cuadros gubernamentales (Miguel Centeno, 1991). Por eso es que ahí podemos seguir el rastro de las bases del sistema presidencialista (Philip, 1992).

Las transformaciones del modelo de desarrollo que anteriormente se reseñaron, y el programa económico de la de Carlos Salinas de Gortari expuesto desde su discurso de campaña de Garza García, Nuevo León, en

² Sobre el periodo de desarrollo estabilizador consultar el todavía vigente texto de Antonio Ortiz Mena (1970).

mayo de 1988, marcaron el fin de un modelo de desarrollo y abrieron el inicio de otro.

Es importante señalar que el discurso de Salinas era simplemente impronunciable unos pocos años antes en un acto de campaña presidencial priísta. El hecho de que el líder de una camarilla política priísta con semejante discurso programático hubiera podido ser nombrado candidato refleja por sí mismo el profundo proceso de reacomodo en la élites gubernamentales que había ocurrido durante las dos últimas gestiones presidenciales, y refleja también el completo realineamiento de los partidos mexicanos que tuvo lugar durante esos años. En este sentido, la llegada al poder del grupo salinista, desequilibrando la composición de la élite política mexicana de manera radical (Centeno, 1991) es el punto culminante de el realineamiento político toavía en marcha.

Este realineamiento explica parcialmente la compleja dinámica que han asumido todos los procesos políticos en México, y en particular, los problemas internos que todos los partidos, especialmente PRI, PAN y PRD resienten. A este respecto, cualquier observador de la política mexicana en años recientes tiene que haber notado cómo en todos los frentes partidarios e ideológicos se han dado conflictos internos en los cuales algunas facciones han acusado a otras de haber abandonado los ideales o los programas "legítimos" de la organización (partido, sindicato, organismo empresarial). Así, como si jugaran a las sillas musicales, mientras unos panistas acusan a otros de haber tranzado con el PRI, algunos priístas acusan a otros de haberse "empanizado", en la izquierda se dice que se abandonó el socialismo por el populismo, en los órganos empresariales se habla de dirigentes "agobiernados", etc. Bajo

la superficie aparentemente trivial, y ciertamente mordaz, de estas expresiones del lenguaje político coloquial y periodístico, hay un sustrato muy significativo y certero: Casi todos los partidos han variado la ubicación que tradicionalmente tuvieron en el plano ideológico partidario de México.

En otra ocasión (Molinar, 1991) he señalado que los alineamientos ideológico-partidarios en México están ordenados a partir de dos dimensiones, ejes o "clivajes" políticos: el eje ideológico y programático que va desde la izquierda hasta la derecha; y el eje estratégico-táctico que va desde las posiciones prosistema hasta las antisistema, pasando por los diversos reformismos.

En el caso específico de México, el eje ideológico no sólo se ha ordenado por las contraposiciones más o menos universales entre socialismo y capitalismo, o entre igualitarismo y liberalismo, sino también por la posición específica que cada partido ha guardado históricamente con respecto a ciertos preceptos claves de la parte doctrinaria de la Constitución mexicana, como son los artículos 3, 25, 26, 27, 28, 123 y 130.

Las posiciones dominantes de la derecha mexicana, o al menos de la derecha "moderna" pueden ser caracterizadas a partir de diversas combinaciones de estos elementos:

- Reclaman una menor intervención estatal en el proceso económico y la consecuente primacía de la iniciativa privada en esa esfera.

- Proponen una serie de políticas económicas de corte neoliberal, enfatizando la disciplina fiscal y el mantenimiento de equilibrios fiscales.

- En sus decisiones de política económica son más sensibles a la inflación que al desempleo o a la depresión de la demanda agregada.

- Impulsan una intensa inserción de la economía nacional en el mercado internacional para dar mayor competitividad y eficiencia a la economía nacional.

- Asignan a las exportaciones el papel de agente dinámico de la economía.

- Estimulan la inversión extranjera, estableciendo marcos liberales respecto a sus montos y respecto a los sectores en que es bienvenida.

- Defienden la necesidad de una creciente desregulación de la vida económica para dar mayor libertad y margen de acción a los agentes económicos privados.

- En el terreno laboral, de hecho o de derecho, permiten la "flexibilización" de las relaciones capital-trabajo para otorgar al capital más discrecionalidad en el proceso de organización y aplicación de la fuerza laboral.

- En el terreno rural defienden políticas agrarias productivistas, protectoras de las formas privadas de propiedad y posesión de la tierra y poco estimuladoras de las formas comunales o ejidales.

En contraste, las posiciones de las izquierdas se han centrado, tradicionalmente, por defender los siguientes elementos:

- Exigen al estado que asuma un papel central en la promoción del desarrollo, con la consecuente limitación del papel de la iniciativa privada al cumplimiento de metas sociales que rebasan el horizonte estrecho de la ganancia del capital.

- Demandan la aplicación de políticas económicas de corte neokeynesiano, sin rechazar de entrada el uso de políticas fiscales deficitarias que otorgan a la inversión pública roles determinantes en el ritmo y el sentido del crecimiento económico.

- Defienden políticas proteccionistas como la base de una estrategia industrializadora.

- Enfatizan el papel del mercado interno y de los componentes populares de la demanda en el dinamismo de la economía.

- Condicionan la inversión extranjera directa a casos especiales y siempre en asociación con capitales nacionales públicos o privados.

- Sostienen la necesidad de mantener elevados los niveles mínimos de regulación de la actividad económica para evitar deseconomías externas a sectores sociales que de otro modo estarían desprotegidos.

- Defienden una política laboral que coloca la seguridad en el empleo por sobre las consideraciones del capital relacionadas con los cambios coyunturales de los mercados.

- Privilegian una política agraria sustentada en la extensión de la frontera agrícola y en el estímulo a las formas comunales y ejidales de propiedad y posesión de la tierra.

Algunos de estos elementos tienen una base de regulación constitucional, lo cual restringe relativamente el margen de discrecionalidad de los gobiernos en turno. Los artículos 25, 26 y 28, por ejemplo, definen los marcos de acción y regulación económica del estado y las áreas de la economía que están reservadas al propio estado o a los nacionales, mientras que los artículos 27 y 123 enmarcan las políticas agraria y laboral. Sin embargo, no debe olvidarse que la hegemonía de un partido que históricamente ha controlado las supermayorías necesarias para reformar la Constitución permite a los gobiernos en turno relajar los límites que ésta impone. Dicho control es la base de la llamada "flexibilidad" de la Constitución mexicana, cuyos artículos han sido modificados más de 250 veces desde que fue promulgada. [referirse al estudio de la SPP sobre el tema, destacando en particular el número de veces que han sido reformados los artículos 27, 28, 73, 89, 123]

Otros elementos, en cambio, no están constitucionalmente enmarcados, otorgando mayor margen de acción al gobierno en turno.

Por su parte, el eje estratégico-táctico de la política prorégimen o antirégimen está fundamentalmente orientado por la contraposición autoritarismo-democracia, por los debates sobre la vigencia del estado de derecho en el país y sobre cuestiones vinculadas a derechos humanos y, en general, a las garantías individuales y a la parte propiamente orgánica de la Constitución, principalmente en lo referente al sufragio y su respeto, a la división de Poderes, al federalismo, al municipalismo y a la forma de integración del gobierno representativo.

Las posiciones pró-sistema defienden, en la coyuntura actual, la funcionalidad y vigencia del sistema presidencialista, el vigor y funcionamiento de los esquemas corporativos de representación política, el papel central del gobierno en la organización y conducción de los procesos comiciales, la bondad del estado de cosas imperante en los medios masivos de comunicación y en su relación con el estado, la legalidad y la pertinencia moral, política e histórica de las relaciones que guardan entre sí el PRI y el gobierno, etc...

Las posiciones anti-sistema sostienen, por el contrario, la necesidad de redefinir las relaciones entre los Poderes Federales, reduciendo de diversas maneras las facultades constitucionales y metaconstitucionales del Poder Ejecutivo Federal, critican el carácter antidemocrático de las formas de representación corporativa vigentes, sobre todo en lo tocante a su asociación con las formas cívicas de representación, postulan la urgencia de modificar el régimen de medios masivos de comunicación, tanto en sus partes estatales como en las concesionadas y las privadas, enfatizan la ilegalidad y la perversidad de la fusión estado-partido que sostiene al PRI en su posición hegemónica, etc.

Alineamientos políticos y funcionamiento democrático

Para que un sistema de partidos funcione sin tensiones constantes que lo pongan en peligro es necesario que la competencia partidaria sea dominada por partidos que, independientemente de su posición a la izquierda o la derecha en el eje ideológico, tengan en común la postulación de estrategias reformistas, gradualistas, totalmente inscritas en los marcos legales y constitucionales del quehacer

político. Es decir, que se estructure un sistema de gobierno constitucional-oposición leal.

Esta larga definición de las características asignadas al plano hipotético del subsistema partidario mexicano, hace posible revisar la vieja y la nueva escenografía política de México.

El plano partidario mexicano, entre 1977 y 1982 presentaba condiciones de relativa estabilidad, precisamente porque la mayor parte de los partidos se concentraban en las áreas de oposición leal del plano partidario mexicano.

El plano partidario que heredó de la Madrid estaba configurado a partir de las reformas electorales de 1977. Una de las ventajas de la reforma política de 1977 consistió en reducir la virulencia de la oposición extrapartidaria antisistema, que en el flanco izquierdo había producido durante los años setenta una escalada de violencia política urbana y rural que alcanzó en ciertos momentos niveles de gravedad. Las incorporaciones de varios partidos de las izquierdas a la vida legal y a la esfera parlamentaria permitió que para el inicio del sexenio de Miguel de la Madrid existiera un subsistema de partidos que podría ser limitado por la precariedad organizativa y electoral de la oposición, y que tampoco parecía gravemente amenazado por la intensidad de las prácticas antisistema de sus oposiciones.

De hecho, entre la "izquierda reformista" del PRI y varios partidos de la oposición existía una fuerte sobreposición. Los partidos de esa área del plano ideológico político de México postulaban, tanto en lo estratégico-táctico como en lo ideológico-programático, plataformas similares que han sido englobadas en diversas ocasiones como las

propuestas "progresistas" (González Casanova), o el "proyecto nacional" (Cordera, Tello), o el nacionalismo revolucionario. Quienes mejor expresaban la existencia teórica y práctica de este terreno natural de confluencia de la izquierda priista y la oposición de izquierda nacionalista y reformista, hasta antes de 1988, fueron los ideólogos del PST y el PPS.

Debe notarse que este "frente de los progresistas", además de crear un referente básico en la discusión política-ideológica de México, y un sostén de la legitimación del sistema electoral, también jugaba un papel práctico de utilidad considerable para el régimen, particularmente por su papel de apoyo en órganos como la Comisión Federal Electoral, donde fue por un tiempo indispensable para construir las mayorías con que el PRI y el gobierno anulaban al PAN y a las izquierdas independientes (PRT, PSUM, PMT). En este caso puede observarse una situación contrastante entre las derechas y las izquierdas.

Mientras en el terreno de las izquierdas las áreas de sobreposición ideológica y estratégica eran más o menos importantes, estando compuestas por dos ejes, el del PSUM que "pivoteaba" tanto al PRT como al PMT, y el del PRI, que pivoteaba a los partidos paraestatales, en la derecha la sobreposición partidaria era prácticamente nula hasta antes de 1988.

Respecto a la derecha también sería conveniente enfatizar que el despliegue que existía hasta 1982 sobre el plano partidario ocultaba un fenómeno que en demasiadas ocasiones se pasa por alto: la relativamente amplia extensión del PAN a lo largo del eje ideológico desde posiciones centristas hasta posiciones muy a la derecha, así como una relativa extensión a lo largo del eje estratégico, incluyendo corrientes decididamente "leales" y corrientes muy contestatarias, más cercanas a posiciones antisistema (de las que "critican las reglas", no de las que las rechazan).

El plano partidario estructurado después de 1977 fue severamente alterado por las decisiones políticas y económicas de Miguel de la Madrid. Estas llevaron a un complejo reacomodo de ese plano partidario, hasta que produjeron una situación en la cual las tácticas antisistema predominan tanto a la izquierda como a la derecha. El predominio de las corrientes partidarias que impulsaban posiciones estratégicas reformistas pero prosistema, sin embargo, fue gastado aceleradamente en un sexenio, al grado de que para 1987-1988 prácticamente se habían agotado, por la certeza de que las reglas del sistema no incluían la alternancia ni como posibilidad. Al menos, se llegó a una situación en la cual las corrientes políticas que impulsaban estrategias de oposición leal, dentro del sistema, o eran muy precarias o eran combatidas con ferocidad en el interior de sus propias organizaciones.

Por un lado, las decisiones políticas que el gobierno de la Miguel de la Madrid tomó en relación con el ascenso electoral panista provocaron que fragmentos importantes de este partido se radicalizaran a lo largo de la dimensión estratégica, colocando al partido en posiciones cada vez más antisistema. Por el otro lado, las decisiones económicas de ese gobierno, produjeron, sobre el eje ideológico programático, la escisión de la corriente centro izquierda del PRI, que terminó por fusionarse con sectores importantes de la izquierda opositora, hasta formar el PRD.

Hasta antes de 1988 se daba una situación inversa a la que se ha producido bajo el gobierno de Salinas. Mientras que los espacios de la izquierda reformista se caracterizaban por su intensa sobreposición partidaria (entre sectores del PSUM, del PMT, del PST, del PPS y del PRI, sobre todo con sus corrientes democratizadora y crítica), en los espacios de la derecha prácticamente no se da esa concurrencia, pues entre las principales corrientes de la derecha opositora (el PAN, notoriamente) y la derecha priísta media una gran distancia sobre el eje estratégico-táctico prosistema-antisistema. Esa distancia no lograba borrar la idudable cercanía que existe en el eje ideológico entre algunos sectores del PAN y del PRI. Esa cercanía fue definida en la jerga política en boga a principios de los 80 como el fenómeno del "priísmo empanizado", y ahora ha sido descrita a la inversa como el "panismo salinizado".

Aunque este reacomodo ha sido alterado por el gobierno de Salinas, no se ha reestablecido la configuración prosistema estable del periodo 1977-1982, pues aunque algunos sectores del PAN retomaron algunas estrategias de colaboración, nunca desistieron de la posibilidad de recurrir a las estrategias antisistema, y además resienten la presión de un grupo que busca jalar el partido en esa dirección. Los acontecimientos recientes en el PAN, por cierto, demuestran que el posicionamiento de las diversas fracciones panistas a lo largo del eje estratégico es muy variable, y lo determina no sólo la conducción política del gobierno, sino también la dirección política que asuma el propio PAN.

Por otra parte, las líneas de acción política de la izquierda será sin duda revisadas a partir de las decisiones que el propio PRI tome respecto a su candidato presidencial. Si la elección del PRI vuelve a ratificar la línea de alejamiento que actualmente se tiene respecto al ala centro izquierda del partido, las posibilidades de una nueva ronda de escisiones aumentarán, y los problemas de reequilibramiento del plano partidario mexicano se acentuarán.

¿REALINEAMIENTO O DESALINEAMIENTO ELECTORAL?

En abono de la tesis del realineamiento partidario, conviene anotar que éste fue sucedido por un proceso de magnitudes similares entre el electorado. Aunque se ha debatido mucho sobre el contraste de resultados electorales de 1988 con los de 1991, los análisis más detallados del comportamiento electoral en ambas elecciones coinciden en señalar que cuando menos una buena parte del reacomodo electoral percibido en 1988 se conservó en 1991.

De hecho, en opinión de algunos analistas, como Jorge Domínguez y James McCann (1992, p. 1), "entre 1988 y 1991 los alineamientos electorales se mantuvieron más estables que los alineamientos partidarios".

El hallazgo más importante de estos dos autores es que también en el nivel individual del elector las decisiones de votación se organizan a partir de dos niveles, el estratégico y el ideológico. En este nivel, el eje estratégico no sólo es importante en la configuración del espacio partidario, sino también en el proceso de decisión individual de los electores. Domínguez y McCann presentan evidencia convincente en ese sentido: "las únicas variables que presentan relaciones estadísticamente significativas en la explicación del voto de todos los partidos opositores tanto en 1988 como en 1991 son aquéllas referidas al régimen político, a los partidos como instituciones, y a la presidencia" (Domínguez, McCann, 1992: 11).

Más aún, es importante anotar que estos autores argumentan convincentemente que los electores mexicano votan estratégicamente. "A lo largo de varias elecciones, existe un clivaje político central entre el PRI y todos los partidos opositores. La cuestión del futuro del partido gobernante es la decisión central que encaran los electores. Primero que todo, el elector se pregunta: ¿estoy a favor o en contra del PRI y del Presidente? Las elecciones nacionales mexicanas son plebiscitos sobre la continuidad del régimen" (Domínguez, McCann, 1992: 12).

SEMINARIO

**TRANSFORMACIONES SOCIALES Y ACCIONES COLECTIVAS
AL FINALIZAR EL SIGLO XX: BALANCES Y PERSPECTIVAS**

**Socialism and Social Democracy
Adam Przeworsky**

**Seminario organizado por el Centro de Estudios Sociológicos de
El Colegio de México, del 11 al 13 de noviembre de 1992.**

SOCIALISM AND SOCIAL DEMOCRACY

by Adam Przeworski

Socialists of all stripes criticize capitalism--a combination of private ownership of productive resources with their decentralized allocation by markets--claiming that this system cannot simultaneously achieve rationality in allocating scarce resources to alternative uses and justice in distributing material welfare. Yet the specific diagnoses and the proposed remedies have been sufficiently distinct to have generated at least three alternative socialist projects: communitarian, marxist and social democratic. Communitarian socialism emerged in the 1830s and withered as a serious alternative when socialist ideology became fused with marxist theory and the working-class movement around 1890. The Second International split in the aftermath of World War I over the issue of democracy but marxist socialism continued uncontested in the economic realm until the middle 1930s, when the Swedish Social Democrats first formulated their strategy. Between World War II and 1989, command socialism and social democracy offered alternative and highly antagonistic projects. With the fall of command socialism in Eastern Europe and the demise of the social democratic model in Scandinavia, socialists can only ask "What is left?"

Since this question organizes my essay, the approach I adopt is not historical. Indeed, to set the framework of analysis, I begin in the first section by recouching socialist critiques of capitalism in a deliberately anachronistic language of contemporary economic theory. In the second section I briefly review the blueprints, and the weaknesses, of command socialism, social democracy and market socialism. The concluding part gropes for an answer.

Socialist Critiques of Capitalism

Let me first restate the fundamental views of Marx and Engels and their followers concerning capitalism. The main conclusion of their analysis, which

became the guiding theory of the Second International, was that capitalism was at the same time irrational and unjust. It was irrational because it necessarily inhibited the development of productive resources and regularly caused a waste of the already produced assets. And it was unjust because it distributed material welfare as a function of the initial wealth rather than contributions or needs.

Viewed in retrospect, socialist critiques of capitalism frequently appear quaint, often incoherent and at times bizarre. They bear the imprint of the nineteenth century: the very notion that any decentralized social system can function in an orderly way still baffles the imagination of many socialist critics of capitalism. And they are frightfully ignorant: they dispose of arguments for capitalism with a wave of a hand. Yet paradoxically, as all variants of the really-existing socialisms have plunged into disrepute, some central arguments for the irrationality of capitalism are regaining their theoretical force.

To formulate socialist critiques in a modern way, we need to reconstruct the capitalist blueprint. The model is simple: individuals know that they need, they have endowments, they exchange and engage in production whenever they want. Moreover, in equilibrium all markets clear. Hence, the prices at which individuals exchange reflect their preferences and relative scarcities; these prices inform individuals about all the opportunities they forsake. As the result, resources are allocated in such a way that all gains from trade are exhausted, no one can be better off without someone else being worse off, and the resulting distribution of welfare would not be altered under a unanimity rule.

Reasonable socialist critiques of this model all converge on the assertion that capitalism generates "waste." Yet they evoke several alternative

reasons: (1) the "anarchy" of capitalist production, (2) the "contradiction" between individual and collective rationality, and (3) the "contradiction" between forces of production and relations of production. Moreover, the waste involved in each of these explanations is different: anarchy causes waste of existing endowments and even of commodities already produced, while the waste caused by the two remaining contradictions is of opportunities. My view is that the first of these criticisms is valid but we do not know whether it is remediable under any economic system, that the second critique fails to draw some important distinctions and is misdirected once these are made, while the third one is valid and fundamental.

The anarchy critique concerns (1) the efficiency of the competitive equilibrium and (2) the feasibility of costless adjustment to a state where the expectations under which individual agents make their decisions are simultaneously fulfilled. Both are complicated issues.

First, in the light of recent developments of neo-classical theory, markets cannot be expected to generate efficient allocation of resources. Even under perfect competition, labor and capital are underutilized and final goods markets do not clear in equilibrium because employers, lenders and consumers must pay rents to assure that, respectively, employees, borrowers and sellers will deliver goods and services of contracted quality. Capitalism is thus inefficient even in a competitive equilibrium.

Second, even if the competitive equilibrium were efficient, as the capitalist blueprint maintained, a costless adjustment to this equilibrium may be unfeasible either because decentralized economies are never in equilibrium or because the adjustment is gradual. Marx himself seems to have wobbled about the first point and he firmly adhered to the second. On the first point, he asserted that capitalist markets do sometimes clear but only by accident. And

gleefully observe that capitalism cannot exist without state intervention. But in fact it dulls the critique: capitalism is not any less, or more, capable than socialism of handling all the situations in which social rates of return diverge from private ones.

Having cleared the underbrush, we arrived at the claim that capitalism leads to a systematic underutilization of the productive potential. My version of this argument asserts that capitalism is irrational because it cannot access some technically feasible distributions of welfare even if these are normatively and politically desirable. We may have technological and organizational means to feed everyone on earth, we may want to feed everyone, and yet we may be still be unable to do it under capitalism. Here is the argument.

Imagine an economy in which there are two agents, capitalists and workers. If the output does not depend on rates of return to the endowments controlled by these agents, then under a given state of technology all distributions of welfare that sum up to this level of output are accessible. But under capitalism output does depend on the rates of return to endowments. If capitalists receive the entire return from capital and workers the entire return from labor, then resources will be efficiently allocated and the distribution of income will reflect marginal productivity of the two factors. But if either capitalists or workers receive less than the entire return, that is, if the distribution of income diverges from the competitive market, they will withdraw capital or labor and resources will be underutilized.

Under capitalism, endowments--capital and labor power--are privately owned, and the agents who decide whether and how to utilize them are self-interested. Private property implies that owners have the right to withdraw their endowments from productive uses if they do not expect to receive an adequate rate of return. Hence, when the final distribution of welfare

diverges from the allocation that would be generated by competitive markets, resources will be underutilized, and capitalism will lead to an inefficient, that is, collectively irrational allocation.

Suppose that instead of wasting already produced food we would distribute it to the poor. Then the price of food would fall, farmers would be getting a lower rate of return, and they would produce less. Moreover, some people who produce food for themselves would find it more profitable to do something else and get free food. Or suppose that we pay farmers to produce, support farm prices out of taxes, and distribute food to the poor. But then the rate of return would fall throughout the economy and the output of other commodities would decline. In fact, we do some of both, out of compassion or other motivations. But under capitalism we do it at the cost of reducing output below its potential level.

Hence, capitalism is irrational in the sense that under this system we cannot use the full productive potential without rewarding those who control the productive endowments. Technically feasible distributions of welfare are inaccessible under the capitalist system. If a society decides that the allocation of resources or the distribution of income should obey criteria other than maximization of profit, resources will be underutilized or underdeveloped.

"Command" Socialism

In the light of analysis by Marx, Engels and their followers within the Second International, the irrationality and injustice of capitalism are intrinsic to the combination of private ownership and market allocation. Capitalism cannot be reformed. In turn, these deleterious effects of capitalism, as well as many others, ranging from war through prejudice to prostitution, would be automatically eliminated by abolishing private property. Hence, when

marxism, socialism and the labor movement became briefly fused in Europe between 1891 and 1914, the economic program of socialist parties consisted of one demand: to nationalize the means of production, so that all resources at society's disposal could be rationally administered to satisfy human needs.

At the same time, it is important to remember that until 1919 marxists did not develop any blueprints for implementing this system. Only in the aftermath of World War I, as the triumph^e of the Soviet Revolution and the massive insurgency of workers in several European countries confronted the socialist movement with the real possibility of realizing their ideas, did several detailed proposals for administering socialist economies develop.

The central claim of the "command" model was that the dynamic potential could be fully developed only if resources were centrally allocated to satisfy human needs. This model was based on several explicit assumptions: as co-owners of the means of production, the "socialist men" would truthfully reveal their needs and their productive potential and would exert effort independently of reward while planners would behave as perfect agents of the society, simply solving problems of optimal allocation.

To analyze what went wrong, we need first restate the socialist blueprint. Households have needs. Firms have the capacity to produce objects that satisfy needs. The planner learns about the needs of households and the production capacities of firms and calculates how to allocate resources among firms and how to distribute the output among households in order to satisfy needs to the extent possible given the resources. The result is rational administration of things to satisfy needs.

The critiques of this model of socialism fall into three categories: (1) Even if the planner had truthful information, the sheer complexity of the problem would make it impossible to handle. (2) If individuals are self-

interested, without a market mechanism the planner cannot learn about the true needs of households and the true capacities of firms. (3) There are no incentives and no monitoring mechanisms that would force the planner to promote general welfare.

Even if the planner's problem can be resolved in principle, the task facing planners is enormous. Soviet economists envisaged a few years ago that under the reformed price system, between 1500 and 2000 prices of basic products would be fixed by the Gosplan, another 20,000 to 30,000 prices would be administered by specialized agencies, and the remaining prices would be determined by contracts between suppliers and users. It is difficult to imagine how so many prices could be "gotten right," even with the use of computers.

Even if the planner is able to solve the calculation problem, the case for the feasibility of socialism hinges on the assumption that once economic agents--households, firms and planners--become co-proprietors of productive wealth, they act spontaneously in ways that support collective welfare. Specifically, households truthfully reveal to the planner their needs and firms their productive capacities, while planners act as perfect agents of the public.

None of these assumptions have worked under really-existing socialism. This may not be a decisive argument, for it is easy to claim that the non-democratic nature of economic decision making in the socialist countries subverted the very notion of social ownership. But it is obvious that this notion ignores "free rider" problems (i.e., individuals trying to avoid paying their share of the cost of providing public goods).

If individuals continue to be self-interested even when they co-own the productive wealth, households overreport their needs. True, the planner need not rely on revealed preferences to decide what to produce and how to distri-

bute. In a poor country, the urgency of some needs is apparent to any observer. The planner can rely on some theory of needs to decide that minimal calorie consumption should be assured to everyone first, followed by shelter, medical attention, education, etc. This was the original intuition behind physical planning. These methods will not work, however, once needs become more differentiated. And if the planner relies on revealed preferences, households have an incentive to misrepresent their needs.

Likewise, firms have powerful incentives to hide some of their productive capacities, and individuals may shirk in production. At least thus far arguments for the feasibility of socialism must rest on the assumption that socialization of the means of production causes individuals to adopt socialist preferences, and this assumption is unrealistic. Since collective ownership does create free rider problems, the hope that it would alter preferences is tenuous. Hence, command socialism is unfeasible.

When planners are misinformed and self-interested and the immediate producers shirk, the output may be inferior to capitalism at any distribution of welfare. Under socialism, we may be unable to feed everyone because we cannot produce enough.

Social Democracy

The fundamental premise of social democracy is that nationalization of the means of production is not necessary to overcome either the irrationality or the injustice of capitalism. Governments that want to eradicate poverty while minimizing losses of efficiency are not helpless in capitalist economies. They can counteract economic fluctuations, they can steer investment, they can facilitate labor mobility, they can deliver welfare services and maintain incomes. The degree of irrationality of capitalism is not given: governments elected with a mandate to assure material security of everyone do

have instruments with which to pursue their mission. They can implement "functional socialism," even if ownership of productive resources remains private.

Since this understanding emerged only gradually, as a reflection on successful practice rather than implementation of prior blueprints, it may be useful to trace its origins. Ever since the 1890s, socialists had thought their irreversible electoral progress would culminate one day in a parliamentary majority that would allow them to take office and legislate their societies into socialism. They were completely unprepared for what ensued. In several countries, parties bearing social democratic, labor, or socialist labels were invited to form governments by default, without winning the majority that would have been necessary to pursue the program of nationalization, because the bourgeois parties were too divided to continue their traditional coalitions. Indeed, the first elected socialist government in the world was formed by the Swedish Social Democrats in 1920 just as they suffered their first ever electoral reversal.

Once in office, socialists found themselves in the embarrassing situation of not being able to pursue the only program they had--nationalization--and not having any other program that would distinguish them from their bourgeois opponents. They could and did pursue ad hoc measures designed to improve conditions for their electoral constituency: the development of public housing, the institution of unemployment relief, the introduction of minimum wages, income and inheritance taxes, and old-age pensions. But such measures did not differ from the tradition of conservative reforms associated with Bismarck, Disraeli or Giolitti. Socialists behaved like all other parties: with some distributional bias toward their own constituency but full of respect for the golden principles of the balanced budget, deflation, gold standard, etc. They formed commissions to study the feasibility of nationalization and stopped

there.

By the 1930s, the problem was that resources lay fallow: engines stood idle while people were out of work. At no time was the irrationality of capitalism more blatant. As families starved, food--already produced food--was destroyed. Coffee was burned, pigs were buried, machines rusted. And according to the economic orthodoxy of the time, this state of affairs was simply natural; the only recourse was to cut the costs of production, which meant wages. Some relief measures to assist the unemployed were obviously urgent, but such measures were not considered advisable from the economic point of view. In Great Britain, the Labour government actually proposed to reduce unemployment compensation: this was the condition for being bailed out by the IMF of the time, where the "M" stood for the Morgan Bank. But in Sweden the Social Democratic Party, having won the elections of 1932, broke the shell of orthodox monetary policy. As unemployment climbed sharply with the onset of the Great Depression, they stumbled upon an idea that was truly new: instead of assisting the unemployed, the Swedish Social Democrats employed them.

As this new policy appeared to have generated a spectacular success, it became theoretized. Socialist parties had acquired a reason to be in office under capitalism. There was something to be done: the economy was not moving according to natural laws, the economic crises could be attenuated, the waste of resources and the material deprivation alleviated if the government pursued anticyclical policies. Full employment became a realistic goal that could be pursued at all times. Moreover, since the economy would be stimulated by distributing incomes to people who consume most of it, the distributional bias of the Left found a rationalization in a technical economic theory.

It was Keynes who could reconcile private ownership of the means of production with democratic management of the economy. Whether or not the Swedish

Social Democrats were following Keynes' recipes when they launched their policies, this has become the credo of social democracy. The practical question that social democrats have tried to solve ever since is how to simultaneously regulate investment and income. An appropriate government policy, combining a particular tax system with a social policy, would generate a level of welfare equal to the one attainable had workers jointly owned the capital stock.

The closest this general posture came to an explicit blueprint was the so-called Rehn-Meidner Plan, which was developed in Sweden between 1951 and 1958. In this model, the unions were to keep their private wages at the competitive level, given by the increase of productivity and the rate of inflation in export-receiving countries, and to reduce wage differentials, in part to put pressure on less efficient firms. In turn, the role of the government was to maintain full employment, devalue the currency whenever wage drift pushed wages above the competitive level, facilitate labor mobility by an active labor market policy, and supply social policies on a universalistic basis. The tax system, which combined a high rate of taxation on consumption and selective incentives for investment, was the main policy instrument.

There is no question that this model has been successful in practice. Statistical analyses of developed capitalist countries show repeatedly that lower income inequality, more extensive welfare services, a more favorable trade-off between employment and inflation, a more favorable trade-off between wages and investment, and a more favorable trade-off between growth and social policies are to be found in those countries that combine strong unions with social democratic control over the government. To put it simply, the only countries in the world where almost no one is poor after taxes and transfers are the countries that have pursued social democratic policies.

Yet there are several indications that the social democratic model is no

longer viable. At the institutional level, it is apparent that the two cornerstones of the social democratic strategy--centralized bargaining and a continued tenure in office of social democratic parties--have crumbled. Formal centralized bargaining disintegrated in Sweden and is maintained only by the insistence of governments in Norway, while the electoral support for social democratic parties declined drastically, forcing them out of office. At the economic level, it is apparent that the performance of the social democratic countries deteriorated in relative terms during the 1980s.

While it is not easy to separate cause and effect, several deficiencies endogenous to the social democratic model are cited to explain this demise: (1) High degree of regulation and discretionary interventions by governments distorted the price system and weakened incentives to save and to work. In particular, governments tended to maintain full employment by unproductive employment in the public sector. (2) Universalistic welfare programs led to excess of demand over supply and thus to the rationing of access by administrative rules. (3) High marginal tax rates led to capital flight. (4) Wage drift, which was unresponsive to economic conditions, undermined the centralized bargains.

Exogenous factors may also elucidate the demise of social democracy: (1) The changing composition of class structure, especially the numerical decline of manual labor, undermined both the traditional electoral base of socialist parties and their ability to recruit voters among other sectors of society. (2) Increasing international competition undermined the initial rationale for centralized bargaining and forced governments to align their tax policy with those of competitors.

Yet, while explanations of the collapse abound, thus far the retreat from the traditional social democratic policies has been limited. It is most visi-

ble in the abandonment of the full employment policy, the adoption of the "flat" tax model, and in fiscal and monetary policy. Thus far at least, it has not extended to welfare or labor market policy.

Market Socialism

The combination of full employment, a reasonable level of investment and material security is possible only when encompassing centralized unions cooperate with socialist governments that enjoy a long tenure in office. When these political conditions are absent, the efforts of particular groups of workers to raise wages result in unemployment and inequality, while governments have no incentives to assure material security for everyone.

The case for "market socialism"--a system in which workers own their firms but resources are allocated by markets--is a political, not an economic one. That is, we still do not know if (1) forms of property have consequences for firm performance and (2) the observed distribution of forms of property, in particular the paucity of employee-owned cooperatives, is due to their performance. In spite of the popularity of the idea of market socialism, we still do not have a theory of the firm that would justify this preference.

Therefore, the putative advantages of market socialism rest on distributional considerations, which have in the past provided and in many countries continue to furnish an important impulse toward socialism of some sort. One way to see the distributional cost of capitalism to wage-earners, suggested a long time ago by Paul Samuelson, is to look at the proportion of net income consumed by owners of capital. The net output in any capitalist economy can be partitioned into consumption of wage-earners, investment, and consumption of capitalists. The last part is forever lost to wage-earners; it is the cost they pay for the private ownership of productive wealth. This cost varies enormously among capitalist countries. In 1985 for every dollar of value added

in manufacturing, the consumption of capitalists ranged from about 10 cents in Austria and Norway to well under 40 cents in the United Kingdom and the United States to about 60 cents in Brazil and 70 in Argentina. Hence, in purely distributional terms, Austrian and Norwegian wage-earner have little to gain from nationalization or socialization. Since nationalization has some inevitable costs, they are best off relying on their market power and electoral influence. British and US workers have more to gain by squeezing profits or owning productive wealth directly; they end up striking more. In turn, the distributional effect of nationalization in Argentina and Brazil would be enormous. If income differentials between the top and the bottom quintile would be limited at the factor of five in socialist Brazil, the income of the poorest 20 percent would increase tenfold. Hence, in Argentina and Brazil nationalization is attractive to wage-earners for purely distributional reasons.

Yet the paradox is that those working-class movements that may have the political muscle to bring about some form of socialism by legislation have no incentives to do so, while those movements that have much to gain by transferring productive wealth into the public realm have no power to do it. Hence socialism as the program of public ownership of productive wealth is the political project only of those movements that cannot bring it about.

In the end, market socialism does appear attractive on distributional grounds. Even if we cannot exactly anticipate its effects on employment, investment and labor productivity, a combination of cooperatives with markets would be superior to capitalism in equalizing income distribution. If we think of market socialism as a system in which there is a labor-cum-capital market, that is, if being a shareholder in a coop constitutes simultaneously a right and the obligation to work in it and these rights-obligations can be traded, then in equilibrium the rate of return to total endowments will be uniform

throughout the economy. The distribution of income associated with this equilibrium will be more egalitarian than under capitalism since employees receive the entire net income of the firm.

However, the claim that market socialism would be a system of industrial democracy, in the sense that the process of production would be democratic, seems unfounded. If worker-owned firms compete and if one way of organizing production maximizes profits, then they will be forced to choose this organization. In turn, if more than one organization of production maximizes profits, then capitalists would be indifferent between them, and if workers prefer one, capitalists would adopt it. Hence, workers coops would have nothing to change.

Moreover, since under market socialism the utilization of resources would depend on rates of return, this system would suffer from the social inaccessibility of technically feasible allocations of welfare, the same irrationality that characterizes capitalism. Hence, market socialism would be still at odds with democracy. The principle that everyone has equal economic rights is not sufficient for democracy either in production or in the economy as a whole.

What is Left?

The capitalist economy, in which owners of wealth and of the capacity to work make decentralized decisions about allocation of their endowments, regularly generates a number of effects that are experienced as profound deprivations by large segments of society. The combination of market with private ownership limits the collective sovereignty, does not assure the material security of anyone who does not own wealth and generates drastic inequalities, including the inequality of opportunity. This has been the traditional socialist critique of capitalism. The perennial question of various strands of socialism has been what, if anything, can be done about it. And, as this review

shows, none of the answers survived intact the test of time.

What is then left? By posing the question in this manner, I want to inquire whether any socialist ideals continue to (1) conform to the traditional normative commitments of socialism, (2) remain economically feasible, and (3) appeal to movements or parties that would be capable of realizing them.

Imposing these three constraints on the potential answers evokes a sense of a paradox. If a Martian were asked to pick the most efficient and humane economic systems on earth, it would certainly not choose the countries with unfettered markets. The United States is a stagnant economy in which real wages have been constant for more than a decade and the real income of the bottom 40 percent of the population declined. It is an inhumane society in which 11.5 percent of the population, some 32 million people, including 20 percent of all children, live in absolute poverty. It is a political system with the lowest voting rates among democracies and the highest per capita prison population in the world. Yet the message about the virtues of market economy it emanates finds receptive echoes all around the world. This is even more perplexing when we observe that the world-wide turn toward a reliance on markets and away from state intervention during the 1980s has been accompanied by an equally widespread economic stagnation and increasing inequalities among and within nations.

Moreover, the faith in the virtues of unfettered markets is being increasingly undermined by the recent developments of the very neo-classical economic theory that used to provide the theoretical foundations for the belief that markets allocate resources efficiently. As long as the belief in the efficiency of market allocation was credible, justifications of socialism were limited either to those cases where the private and the social rates of return diverged or to claims that market allocation, while efficient, leads to other

normatively undesirable outcomes. Today, the observation that a complete set of markets is unfeasible and information is inevitably imperfect places political institutions at the very core of any debate about economic systems. Yet again, despite these theoretical developments, market ideology is enjoying today an unprecedented and almost uncontested hegemony.

Despite the current flux of economic theory and the puzzling divergence between economic realities and economic ideologies, this is not the moment to speculate about the future of socialism. Critiques of an exclusive reliance on markets cannot be used as a vindication of the traditional socialist models analyzed above. With all their faults, markets are the only mechanism we know today for eliciting private information and for providing private incentives. Command socialism is dead. Moreover, while social democracy was an unquestionable historical success, the conditions that made it feasible have been undermined by its own dynamic and by changes in the world economy. Hence, no return to the models of the past is feasible. Let me thus limit this conclusion to normative considerations that render continuing relevance to socialism.

The fundamental motivation of socialism is the ideal of collective sovereignty. People, that is individuals acting on the bases of their current preferences, are collectively sovereign if the alternatives open to them as a collectivity are constrained only by conditions independent of their collective capacities and by individual rights. Specifically, people are sovereign only if there exist some procedures through which they can alter the existing institutions, including the state and property, and they can allocate available resources to all feasible uses.

But why juxtapose individuals and society? is not the choice by the "society" the same as the choice by the competing individuals? The warrant for claiming that capitalism is irrational stems from the fact that individuals

are simultaneously market agents and citizens. The allocation of resources they prefer as citizens does not in general coincide with that at which they arrive via the market. Capitalism is a system in which scarce resources are owned privately. Yet under capitalism property is institutionally distinct from authority. As a result, there are two mechanisms by which resources can be allocated to uses and distributed among households: the market and the state. The market is a mechanism in which individuals cast votes for allocations with the resources they own and these resources are always distributed unequally; the state is a system which allocates resources it does not own, with rights distributed differently from the market. Hence the two mechanisms lead to the same outcome only by a fluke.

Democracy in the political realm exacerbates this divergence by equalizing the right to influence the allocation of resources. Indeed, distributions of consumption caused by the market and those collectively preferred by citizens must differ since democracy offers those who are poor, oppressed or otherwise miserable as a consequence of the initial distribution of endowments an opportunity to find redress via the state.

Hence, if "the people" are sovereign, they may prefer an allocation and distribution of resources that differs from the market outcome. It is this preference that cannot be reached when endowments are allocated in a decentralized way. Even when individuals express as citizens their collective preference for a particular allocation and when all the material conditions are present to implement this preference, the democratically chosen allocation is unreachable under capitalism. Society, by which I always mean all individuals through a democratic process, can decide collectively that needs different from those maximized by the market should be the goal of development. It is this insistence that the allocation of resources and the distribution of

incomes should fall under collective control that renders continuing relevance to socialism.

Nonetheless, the notion of "the" socialism, socialism as the end of history, is untenable. The democratic process in which all individuals are equally empowered in the collective decision making is necessarily open-ended and its verdicts are continually reversible. It cannot be based on any assumptions about human nature and it cannot be expected to lead to predetermined outcomes. The outcome of political conflicts--and conflict is what all politics is about--may be to direct societal resources to maximize free time, maximize employment, seek beauty, or maximize consumption. Moreover, continuing disagreements about the manners in which any of these goals can be implemented, including the organization of states and markets, are inevitable and desirable.

Given that we live in an age of doubt not only about the decentralized but also collective mechanisms of decision making, neither the design of markets nor of democratic institutions is obvious. Yet at the level of practical politics, this quest for collective sovereignty has two immediate consequences, both concerning the status of citizenship. One is the traditional emphasis on the equality of access to the democratic process, access that entails real empowerment of individuals to participate in public affairs in an enlightened manner. This is both a call for political institutions that open a space for deliberation and for educational institutions that do not limit the knowledge of public affairs to those who enjoy a privileged position in the economic structure. The second is the insistence that a full membership in a political community entails social citizenship: security and opportunity for all. These two practical principles continue to distinguish socialism.

BIBLIOGRAPHY

- Bardhan, Pranab and John Roemer. Market Socialism: A Case for Rejuvenation. East-South System Transformations Working Paper #9. University of Chicago, 1991.
- Barry, Brian. Democracy, Power and Justice: Essays in Political Theory. Oxford: Oxford University Press, 1989.
- Burawoy, Michael. The Politics of Production: Factory Regimes under Capitalism and Socialism. London: Verso, 1985.
- Cohen, G.A. Karl Marx's Theory of History: A Defense. Princeton: Princeton University Press, 1978.
- Dobb, Maurice. Welfare Economics and the Economics of Socialism. Cambridge: Cambridge University Press, 1969.
- Elster, Jon and Karl Ove Moene, eds. Alternatives to Capitalism. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- Marx, Karl. Capital (3 vols.). New York: International Publishers, 1967.
- Murrell, Peter. "Can Neoclassical Economics Underpin the Reform of Centrally Planned Economies?" Journal of Economic Perspectives 5: 59-76 (1991).
- Nove, Alec. The Economics of Feasible Socialism. London: Allen and Unwin, 1983.
- Przeworski, Adam. Capitalism and Social Democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

SEMINARIO

**TRANSFORMACIONES SOCIALES Y ACCIONES COLECTIVAS
AL FINALIZAR EL SIGLO XX: BALANCES Y PERSPECTIVAS**

**Los movimientos sociales 'viejos' y 'nuevos'
Las movilizaciones estudiantiles y populares
en una perspectiva comparativa**

Viviane Brachet-Márquez

Seminario organizado por el Centro de Estudios Sociológicos de
El Colegio de México, del 11 al 13 de noviembre de 1992

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 'VIEJOS' Y 'NUEVOS'
LAS MOVILIZACIONES ESTUDIANTILES Y POPULARES
EN UNA PERSPECTIVA COMPARATIVA

Viviane Brachet- Marquez

El Colegio de México
New School of Social Research

Ponencia preparada para el Coloquio "Transformaciones Sociales y Acciones Colectivas en América Latina en el Contexto Internacional de los 90". El Colegio de México, México DF, 10-13 de noviembre, 1992.

I. Introducción

En la historia posrevolucionaria de México, las movilizaciones populares, a menos de que el ejecutivo las haya lanzado --como, por ejemplo, en 1938 con la nacionalización del petróleo-- han sido reprimidas y sus cuadros organizativos destruidos. Por lo tanto, estos levantamientos se han generalmente juzgado fracasados, y las reformas que les han seguido sin relación con ellos o meras cooptaciones de una base desmovilizada.¹

Quisiera cuestionar este diagnóstico a la luz del debate sobre la distinción entre los movimientos sociales "viejos" y los "nuevos", tomando para ilustrar los argumentos dos casos de movilizaciones en la historia reciente de México: el movimiento estudiantil de 1968 y el movimiento popular de 1988 que culminó en la campaña para la elegir a Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia de la República. Ambos movimientos (o como veremos, series de movimientos) pueden considerarse, desde una óptica convencional, como casos de demandas de democratización "fracasadas" y "reprimidas", seguidos por amplias reformas cooptativas "desde arriba".

El argumento del trabajo se centra en el cuestionamiento de dos de los postulados centrales al análisis de los movimientos sociales 'viejos' y 'nuevos' respectivamente, a la luz de estos casos: **primero** que el cambio político sea un proceso de todo o nada, significando que el éxito de un movimiento (viejo) deba juzgarse por su capacidad de lograr cabalmente su propósito --en este caso, la plena democratización de México-- ; y **segundo** que los (nuevos) movimientos sociales no busquen cambiar las instancias políticas, sino constituirse en espacios alternativos a ellas ubicados fuera de los ámbitos institucionales.

Una tarea necesaria para allanar el terreno es examinar brevemente la dicotomía entre movimientos 'viejos' y los 'nuevos' y situar los casos seleccionados en este debate. Aunque esta distinción haya sido inicialmente de gran utilidad analítica para definir claramente una visión sobre los movimientos sociales que difería de la funcionalista (Smelser, 1962), de la marxista (Miliband, 1985) y de la posmarxista (Castells, 1976), esta

¹ Autores que comparten esta visión son, por ejemplo, Kaufman, 1975; Stavenhagen 1976; Gonzalez Casanova 1970; Stevens 1974; Grindle 1977; Stepan, 1978. Para un recorrido crítico de esta visión "desde arriba", véase Brachet - Marquez 1992 y 1993 (cap 3).

distinción resulta ahora más estorbosa que fructífera para llevar acabo la tarea propuesta para este trabajo. Por lo tanto, trataré de demostrar que tanto el movimiento estudiantil del 68 como el cardenista de 88 pueden verse a la vez como 'viejos' y 'nuevos'.

La distinción entre movimientos 'viejos' y 'nuevos' estriba en la pretensión de que los primeros sean "políticos", mientras que los segundos son "culturales". Para Touraine, por ejemplo, los movimientos sociales nuevos rebasan lo político, porque son la expresión de la transición de la era industrial a la posindustrial (Touraine 1981). Siguiendo la misma veta, Chantale Mouffe (1984) argumenta que la vida social en las sociedades de capitalismo avanzado se ha vuelto comodificada y la cultura masificada. En esta óptica, los movimientos representan formas de resistencia a estos fenómenos globales que no siguen líneas clasistas. Evers (1985) va todavía más lejos en una visión psicológica y culturalista de los nuevos movimientos sociales, afirmando la cuasi total ausencia de principios integradores en su acción colectiva. Esta se caracteriza, según este autor como 'embriónica', 'discontinua', y 'plagada de contradicciones'. Por lo tanto, los movimientos son meros "fragmentos de subjetividad penetrando la consciencia y la práctica de los individuos y las organizaciones" (Evers, 1985: 44). A la vez, estos fragmentos abren nuevos espacios de creatividad que se encuentran "detrás" de la esfera social institucionalizada.²

Otros exponentes de la tesis de los movimientos nuevos no afirman tan tajantemente la ausencia de lo político en las nuevas acciones colectivas. Para Melucci, por ejemplo, existe la posibilidad de que estos movimientos, al cuestionar los principios de producción y distribución en la sociedad capitalista, se conviertan en movimientos de clase (Melucci, 1981: 179). Sin embargo, su acción, para tener éxito, deberá alejarse del ámbito político (Melucci, 1981:191). También siguiendo esta versión intermedia de los movimientos nuevos, Laclau and Mouffe (1985) rompen con el esquema racionalista de concebir a los actores como portadores de identidades e intereses en relación directa con categorías estructuralmente definidas (principalmente pero no exclusivamente 'clase'). Abogan por una noción a la vez

² El texto en el original en inglés dice: "It represents something like the unorganized 'back-side' of the social sphere whose front side of well-established mutual systemic reinforcements is occupied by the dominant society." (Evers, 1985:44-45)

"descentralizada y de-totalizada" de la acción colectiva. Sin embargo, esto no lleva Laclau a afirmar la ausencia de demandas de carácter instrumental o político en las reivindicaciones colectivas. Afirma que tales demandas no son proxis para demandas de clase, sino una pluralidad de reivindicaciones concretas correspondiendo a una pluralidad de espacios políticos (Laclau, 1985: 41).

Estos planteamientos se inscriben dentro del marco general de la redefinición del socialismo como praxis democratizante (Barros, 1986; Chilcote 1988). En América Latina en particular, la decepción sobre el potencial revolucionario de las movilizaciones populares, mismas que en el pasado provocaron las dictaduras militares, ha impulsado los científicos sociales hacia una re-evaluación de la democracia como vía alternativa de toma de poder por las masas populares (Chilcote, 1988; Lechner, 1986; Vasconi, 1988; Brown 1988; Munck 1988). Pero mientras esta vía es, para unos, sólo un medio para el fin revolucionario, para otros es una vía alternativa por sí misma.

El esfuerzo que llevaron acabo los exponentes de la visión nueva sobre los movimientos sociales para desligarse de los esquemas marxistas y posmarxistas rígidos sobre el cambio social³ a menudo los hicieron soslayar el aspecto integrador y organizador de la acción colectiva, y por lo tanto, la dimensión de efectividad social (Scott, 1991). Matizando esta tendencia, Offe y Wiesenthal (1985) afirman, por ejemplo, que la experiencia de involucramiento en la acción colectiva es formadora de una identidad colectiva que se transforma en voluntad colectiva a través de procesos de conscientización y praxis cotidiana. Sin embargo, para Offe, las formas organizativas de tales acciones quedan cualitativamente diferenciadas de las partidarias demasiado alejadas de sus bases. Por lo contrario, Scott (1991) afirma que es imposible hacer una distinción analítica entre un movimiento, un grupo de presión y un partido (Scott, 1991: 132-33), basado en el hecho que todos tratan, de alguna manera, de obtener decisiones estatales a su favor. Quizas el intento de síntesis entre los movimientos viejos y nuevos más interesante es el propuesto por Kowarick (1985) que combina una noción fluida de las formas de acción y de organización de estos

³ Los marxistas siendo representados, por ejemplo, por Mueller y Miliband, los posmarxistas de corte althuseriano por Castells en su primera época (1976).

movimientos con una visión a la vez histórica y política, sin por ello ser totalizadora. Kowarick esta de acuerdo con Laclau, por ejemplo, con desestructurar a los movimientos urbanos: estos representan, para este autor, caminos discontinuos orientados hacia una gran pluralidad de metas limitadas (auto-construcción, tenencia de la tierra, agua potable, drenaje, etc.), sin metas precisas de cambio histórico. Normalmente, tales manifestaciones son discontinuas, llenas de desviaciones, y caracterizadas por constantes recomposiciones y divisiones de alianzas que se construyen y se deshacen a través de las luchas cotidianas en los barrios y en las fábricas de las grandes urbes de América Latina. Estas luchas no pueden analizarse con una visión finalista en función de su papel en un escenario pre-establecido por el investigador. En tal escenario, el Estado aparece siempre como un "agente perverso de un drama social" y el movimiento como un actor en búsqueda de un lugar institucional, pero siempre amenazado de cooptación y represión (Kowarick, 1985: 83). Esta visión flúida de los actores y las situaciones, sin embargo, no impide para el autor la posibilidad de convergencias históricas únicas en las cuales los movimientos dispersos y multimórficos se funden, por un corto tiempo y bajo circunstancias excepcionales, en una sola masa organizada, como fue el caso, por ejemplo, de la revolución nicaraguense (Kowarick, 1985: 82). Argumentaré, más adelante, que esto fue también el caso del cardenismo en 1988, y que la represión contra los estudiantes en 68 fue una medida para prevenir tal fenómeno.

En resumen, podemos decir que de esta breve discusión resalta que los movimientos sociales "nuevos" se salen de los esquemas antiguos en el sentido de que ya no se consideran como fuerzas para una transformación política global, sino para cambios limitados. No obstante, esto no les resta su carácter político, como algunos exponentes de los movimientos nuevos lo pretenderían. Aun los grupos que más claramente se apartan de la esfera política --como el movimiento feminista o los "gays"-- pueden considerarse como profundamente políticos en otro sentido: reclaman, para sus integrantes derechos cívicos (a la no discriminación social y económica, a la protección contra la violencia, etc) o sea, el derecho a ser incluidos en la sociedad como sujetos diferentes pero con igual acceso a la protección del Estado. El feminismo, además, nos hace descubrir nuevos espacios políticos: concibe al patriarcado como un mecanismo político de opresión de las mujeres y reclama que se le reconozca como tal. En otras palabras, estos grupos llevan acabo luchas políticas

dentro del ámbito institucional y reclaman que se les reconozca como parte de este ámbito redefinido por sus reivindicaciones (Scott, 1991: 150). Esto puede significar que estos reclamos y los procesos encaminados hacia satisfacerlos u oponerse a ellos pueden provocar cambios profundos en la sociedad. La instrumentación forzada del derecho al voto para los negros del sur de Estados Unidos en los años 60, por ejemplo, cambió profundamente el mapa político de ese país, provocando un giro hacia la derecha que aseguró 12 años de dominación política conservadora. En América Latina, las luchas obreras por el respeto de los muy limitados derechos sindicales (vgr: el derecho de facto a sindicalizarse o el respeto de los contratos de trabajo) provocaron fuertes reacciones por parte de los capitalistas, particularmente en el cono Sur donde desataron intervenciones militares.⁴

II. Los Movimientos del 68 y del 88

Las dificultades que enfrentamos, para definir al movimiento estudiantil o al cardenismo como movimientos 'nuevos' o 'viejos' siguen, a grandes rasgos, esta líneas divisoras. Por parte de los marxistas y posmarxistas, estos movimientos estarían admitidos en las gloriosas filas de los sujetos históricos revolucionarios sólo en la medida de que puedan sustituirse o unirse a la clase obrera en su preexistente misión de transformación radical. Marcuse (1970), por ejemplo, hubiera afirmado que, a pesar de ser menos económicamente explotados, los estudiantes del 68 resintieron más agudamente que las otras categoría sociales mexicanas las contradicciones del "desarrollo estabilizador" que formaba la base de la estrategia de acumulación del Estado entre 1958 y 1970. En su periodo althusseriano, Castells (1976), por otro lado, hubiera considerado a las movilizaciones urbanas que precedieron a la formación de la coalición electoral cardenista como el aspecto reproductivo de la lucha obrera. En este contexto, la ciudad de México habría desempeñado, en el ámbito del consumo, el mismo papel que la empresa en el de la producción (Castells, 1976: 148). Por lo tanto, el esfuerzo de las coordinadoras de los años 80 en obtener una mayor cantidad de recursos colectivos para los pobres de la ciudad se hubiera asemejado a las luchas obreras en contra de la explotación, mismas que, al agudizarse, supuestamente

⁴ Esto fue el caso, por ejemplo, de los levantamientos obreros de Argentina en los años 20 que provocaron la "década infame" de gobiernos militares.

se transformarían en revolucionarias. Sin embargo, los sujetos de estos movimientos no se hubieran considerado como agentes en el sentido weberiano de la palabra, sino meramente como portadores de estructuras y leyes clasistas. Por lo tanto, la ciudad de México no se habría definido como un nuevo espacio o una nueva dimensión de lo político (como la familia lo sería para las feministas, por ejemplo), sino como un mero punto de articulación de la lucha de clases dentro del cual se averiguan leyes generales (1976:152).

La visión del movimiento estudiantil del 68 y del cardenismo del 88 como movimientos nuevos respondería a características distintas. Serían vistos como nuevos, primero, en la medida se haya observado en sus prácticas cotidianas y sus fórmulas de organización un rechazo de las formas dominantes de organización política mexicana: al ser, por ejemplo, igualitarias en medio de una sociedad profundamente jerarquizada y optar por la expresión abierta de sus demandas sociales en vez de la establecida verticalidad garantizada por el mecanismo clientelar.⁵ Bajo esta óptica, la importancia de estos levantamientos ya no estribaría en determinar a qué intereses representaron, ni que procesos de cambios profundos estuvieron llevando acabo. Siguiendo a Foweraker, por ejemplo, estos movimientos se verían como generadores de cambio político, pero sin poner en peligro la hegemonía del partido único (Foweraker, 1990) y sin marginarse completamente del ámbito institucional. Este juego es probablemente más racionalista de lo que admitirían Laclau y Mouffe (1984), pero quedaría dentro del ámbito de luchas parciales y limitadas de Laclau (1985) y Kowarick (1985). Finalmente, tanto Laclau como Kowarick orientarían nuestra mirada hacia una pluralidad de actores y grupos funcionando simultáneamente en los espacios políticos restringidos de los periodos 1964-68 y 1882-88 respectivamente.

A continuación dibujaré a grandes rasgos los sucesos que resumen las trayectorias histórica de estos dos movimientos, para posteriormente plantear la pregunta de sus efectos en términos de 1) las aspiraciones de sus participantes, y 2) la transformación del sistema político mexicano.

⁵ Esto no es una afirmación, sino una suposición hipotética. Adler Hellman, por ejemplo, cuestiona que los nuevos movimientos en México se hayan desligado del clientelismo (Adler Hellman, 1993). Laclau y Mouffe (1985) afirman que es un error pensar que los nuevos movimientos son necesariamente progresistas.

1. El movimiento estudiantil

El levantamiento estudiantil mexicano de fines del año 68 se desarrolló en un contexto mundial de reivindicaciones estudiantiles generalizadas. Sin embargo, esta temporalidad es lo único que parece haber tenido en común con los movimientos norteamericano y francés respectivamente. Si estamos deseosos de percibir el contexto objetivo de estas tres olas geográficamente separadas de protestas estudiantiles, todo indica que tuvieron poco que ver unos con los otros: los norteamericanos protestaban contra una guerra inútil e injusta que mataba más a los negros que a los blancos y a los pobres que a los ricos.⁶ Los estudiantes franceses protestaban contra un sistema educativo a la vez feudal e impersonal que, a la excepción de las "Grandes Ecoles" reservadas a las élites, los llevaban a callejones sin salida. Los estudiantes mexicanos, en cambio, tenían a la vista la contradicción entre un discurso estatal legitimizador que consagraba los valores revolucionarios de justicia social y la realidad de un modelo de acumulación que no había podido abatir la pobreza. La década de los 60 había empezado con el triunfo de la revolución cubana y un giro hacia la izquierda del régimen posrevolucionario con el gobiernos de Lopez Mateos.⁷ Pero terminaba con la llegada en masa de la pobreza rural hacia las ciudades. Los préstamos internacionales que, en el breve periodo de la Alianza para el Progreso, se habían canalizado hacia la educación y los programas sociales, se estaban dedicando a grandes inversiones intensivas de capital.

Vale la pena recordar dos series de sucesos que precedieron a los disturbios estudiantiles, y caracterizan el sexenio del presidente Diaz Ordaz (1964-70): el intento fracasado de democratizar el partido oficial (Skidmore y Smith, 1984; Bataillon, 1968) y la represión de los médicos internos (Stevens, 1974). Los reformistas del partido fueron

⁶ Esto se debió a que una mayor proporción de blancos estudiaban en la universidad, razón por la cual eran exentos del servicio militar hasta haber completado sus estudios. El movimiento de derechos cívicos dirigido por Martin Luther King se centró en este hecho para movilizar a los jóvenes negros. Como consecuencia, fue amenazado por la CIA y terminó asesinado en circunstancias que nunca fueron aclaradas.

⁷ "Mi gobierno es, dentro de la constitución, de extrema (izquierda)", Discurso pronunciado por el presidente Lopez Mateos en Gaymas el 1/7/1960.

embalsados y los médicos inabundantemente remunerados por el sólo hecho de protestar contra la arbitraria decisión de no pagarles el aguinaldo que reciben todos los trabajadores asalariados de México.⁸

Mientras que la protesta de los internos fue un conflicto proto-sindical estrictamente interno a este grupo,⁹ y por lo tanto, poco apto para movilizar a otros grupos, el conflicto estudiantil pronto adquirió dimensiones políticas más amplias. Empezó en 1966 con una protesta en contra de la imposición de un examen de entrada como condición de admisión a la Universidad Nacional Autónoma de la ciudad de México (UNAM). La universidad en México representa una vía de movilidad hacia una vida mejor para una gran parte de la población. Pero, como ha dicho, sino que tenía una composición muy heterogénea, incluyendo a las clases bajas y obreras. La mayoría veía a los exámenes de entrada como un medio para excluir a estos grupos.

Después de varias semanas de disturbios en la UNAM durante los cuales los ~~estudiantes se reunieron en las calles y se quemaron los edificios de la universidad~~ Ignacio Chavez, el rector reformador. Fue sustituido por Barro Sierra, quien inmediatamente retiró la propuesta de reforma universitaria (Molina Pineiro, 1988; Bataillon, 1968). Sin embargo, los sucesos en la UNAM no quedaron sin ecos en el resto del país. Se transmitieron a las universidades provincianas, pero sin que estas corrieran con la misma suerte que la UNAM. En octubre de 1966, el ejército fue mandado a reprimir las manifestaciones estudiantiles en la Universidad de Guanajuato, y apresó a todos los "agitadores". El año siguiente, continuaron levantamientos en otras universidades en Tabasco, Morelos y Puebla. Todos fueron violentamente reprimidos.

El año de 1968 empezó con una marcha de protesta de Guanajuato a Morelia (capital de Michoacán), organizada por los estudiantes de Guanajuato que exigían la libertad

⁸ Centenarios fueron apresados, y posteriormente expulsados del país. Hasta la fecha, estos no han recuperado el derecho a ejercer en México.

⁹ Los médicos de los hospitales públicos en México no están sindicalizados, y a fortiori no tiene derecho de huelga. Por lo tanto, cualquier paro es ilegal por definición.

de los estudiantes apresados desde 1966. La marcha de Guanajuato a Morelia fue violentamente interrumpida y dispersada por el ejército. El movimiento de la capital empezó a principios de 1968 con peleas entre escuelas preparatorias en las cuales intervino la policía, dejando un sinúmero de heridos y arrestados. Lejos de apaciguar el ambiente, estas demostraciones de fuerza enfurecieron a los estudiantes. Como respuesta, organizaron el 26 de julio, una manifestación para protestar contra de la violencia policiaca y conmemorar el aniversario de la revolución cubana. La represión final, que terminó con la matanza de Tlatelolco, se dió cuando marchas de campesinos y trabajadores empezaron a juntarse con los estudiantes (Cockroft, 1983: 241).

Si examinamos estos sucesos a la luz de la discusión anterior, resaltan importantes lecciones para entender este movimiento. Primero, más que de un movimiento coherente, se trató de un proceso a la vez intermitente y aglutinador que fue integrando a cada vez más grupos sociales --ya no solamente estudiantes, sino tambien taxistas, vendedores ambulantes, campesinos y obreros-- conforme como iba aumentando la represión policiaca. Esto demuestra que es inutil estudiar a este movimiento como si fuera un proyecto unido con metas definidas. Los actores reaccionaban a la situación inmediata, interpretada por parte de los estudiantes como arbitrariedad gubernamental e imposición desde arriba sin participación ciudadana en una sociedad bloqueada por las profundas desigualdades de un proceso de desarrollo inequitativo. Estas protestas, sin embargo, no se hacían a nombre de valores ajenos a la cultura y las instituciones mexicanas (como pretendían las autoridades), sino precisamente en nombre de ellas. Se denunciaba "a los viejos esquemas obsoletos de su "revolución mexicana".. de contenido opuesto a lo que expresan y destinados a mantener y perfeccionar la enajenación de la consciencia colectiva de México....[y se llamaba a] una sociedad nueva, libre y justa, en la cual se p ueda pensar, trabajar, crear, sin humillaciones, sobresaltos, angustias y mediatizaciones de toda especie" (Revueltas, 1978: 51). Se apelaba a los principios de justicia social inscritos en la constitución de la nación, comparando los logros insuficientes de la revolución mexicana con los entonces dorados de la cubana.

Es imposible deslincar con precisión cuales fueron las demandas estudiantiles. Algunos autores (Loaeza 1989) han querido verlos como precursores del reclamo democrático; otros como portavoces de las clases subalternas empauperizadas; otros tantos

como difusores de los principios de la revolución cubana. En realidad, fueron todo aquello, pero nunca en forma precisa.¹⁰ Pero su fuerza no residía en la introducción de ideas o valores nuevos, sino en la denuncia de las autoridades en nombre de los valores y símbolos nacionales con los que estas se legitimizaban. En otras palabras, su potencial movilizador residía en su capacidad de hacer descubrir a los grupos excluidos de desarrollo que el emperador carecía de ropa.

Podría alegarse que los estudiantes, como grupo, no eran vitales para el gobierno, en la medida que no formaban parte de la maquinaria electoral partidaria que sostenía el absolutismo presidencial. Sin embargo, su levantamiento amenazaba a la estabilidad política por dos razones: primero, porque podían (y de hecho lo hicieron) "contaminar" a sectores de las clases medias que sí formaban parte del aparato corporativo (la CNOP), quienes los habían apoyado en su conflicto con la UNAM. En segundo lugar, existía el riesgo de que fueran a movilizar a grupos obreros y campesinos disidentes que habían resistido a todos los intentos anteriores de incorporación.¹¹ En resumen, al cuestionar la legitimidad de la autoridad gubernamental, el movimiento estudiantil podía desatar una crisis de confianza en un sistema que empezaba a mostrar señales de erosión.

Una indicación de que el gobierno percibía una amenaza de movilización potencial de los obreros puede verse en las maniobras políticas que se llevaron a cabo para ofrecer a los obreros, sin antecedente aparente, el programa de vivienda obrera que dormía desde 1917 entre las páginas de la constitución. Aparentemente, este sector no se había movido. Fidel Velázquez, cabeza de la toda poderosa CTM se había limitado a denunciar a los "estudiantes desorientados explotados por los agentes de la subversión de la izquierda y de la derecha para sembrar el descontento y crear un ambiente de caos en el país" (Boletín de la CTM, 3/9/68). Pero no se podía contar del todo con la CTM para controlar a la clase obrera. Varias veces había sido amenazada con ser masivamente abandonada, y sólo

¹⁰ Contestando la acusación de que el movimiento estudiantil no tenía "bandera", José Neri escribió: "¿Cómo una institución que no tiene bandera?" (Periferia 1978: 52).

¹¹ Véase, por ejemplo el capítulo 4 de Marquez Brachet, 1993.

quedaba de pie por los beneficios que se distribuían exclusivamente a sus integrantes. En efecto las brigadas estudiantiles se comunicaban con varios grupos obreros (principalmente los ferrocarrileros, petroleros y electricistas), campesinos y empleados (Adler Hellman, 1973: 178). Para prevenir cualquier tentación de unirse a las protestas estudiantiles por parte de las bases, el presidente cambió el Artículo 111 de la Constitución para que se hiciera realidad la promesa de vivienda obrera. Todas las empresas de más de 100 empleados se verían obligadas en un plazo no mayor de 3 años de proveer vivienda a sus trabajadores. Mientras tanto, tenían que ofrecerles dinero para renta. Esto era un gesto significativo que enfureció a la COPARMEX, representante de los intereses patronales (Aldrete Haas, 1991). Si esto no fuera suficiente, la CTM pidió, y consiguió sin ninguna dificultad, un aumento salarial en el momento culminante de la protesta estudiantil.

En resumen, lo que ponía en peligro el levantamiento estudiantil era nada menos que el principio vertical del corporativismo autoritario mexicano. Esta amenaza residía en la posible aglutinación horizontal del descontento de varios grupos heterogéneos en un solo movimiento unitario capaz de cuestionar los principios de la organización política mexicana. El peligro era, naturalmente, que las demandas de liberalización política expresadas por los estudiantes llegaran a ser compartidas por un grupo mayoritario.

Es conocido el giro hacia una "apertura política" y políticas reformistas que dió el Estado a partir de 1970. La mayoría de los analistas lo han atribuido a la necesidad de restablecer la legitimidad del régimen dañada por los sucesos de Tlatelolco. En la elección presidencial de 1970, sólo el 66% de los votantes había participado, y de estos, 20% había votado en contra del candidato del PRI, y 25% había entregado votos nulos. De facto, el presidente había sido elegido por el 37% de la población empadronada (Spalding, 1981: 146). A pesar de que el primer año de la presidencia de Luis Echeverría coincidió con una recesión en los Estados Unidos (Whitehead, 1980), el gobierno abandonó muy pronto la ortodoxia monetarista y se lanzó en un vasto programa de reforma social y de apertura política, mismo que iba a despertar a la disidencia obrera endormecida desde fines de los años 50.

La pregunta que nos planteamos es la siguiente : ¿tuvo algún efecto el movimiento estudiantil? Y si lo tuvo, ¿cual fue su naturaleza? Si entendemos a este movimiento en el

sentido más estrecho de un actor unitario orientado hacia metas precisas (la "revolución") y en confrontación con el Estado, no nos queda más que concluir que fracasó. Los estudiantes nunca tuvieron la menor posibilidad de ganar contra los granaderos ni tampoco de derrocar al PRI. También llegaríamos a la misma conclusión si consideráramos que la misión de los estudiantes era movilizar a la clase obrera, la única supuestamente capaz de provocar el cambio político. No obstante, si nos alejamos de estos esquemas rígidos, es innegable que el movimiento estudiantil dejó en la historia de México una huella indeleble. Lo hizo a través de hacer visible las fisuras y las corrientes subterráneas de desconformidad en una población que había acumulado la experiencia histórica suficiente para condenar a un sistema excluyente de las mayorías. Provocó, por este mismo hecho, una reacción reformista por parte del Estado, que aun incompleta y muy limitada, transformó parcialmente las reglas del juego político en México, preparando las reformas electorales de fines de los años 70.

2. El movimiento urbano del 88

El movimiento urbano que culminó en 1988 con el reto electoral al partido oficial es todavía más discontinuo y multifacético que el movimiento estudiantil. Su telón de fondo es la crisis económica anunciada desde principios de los setentas, pero postergada, y finalmente precipitada por la repentina baja en los precios internacionales del petróleo, producto que sostenía el imposible peso de la deuda pública acumulada durante más de dos décadas. Cuando los banqueros internacionales decidieron suspender sus préstamos en agosto de 1981, México tenía un servicio de la deuda equivalente a 47.5% de sus exportaciones (Urquidí, 1989). Su crecimiento económico bajó de 8% en 1981 a -0.5% en 1982. En diciembre de 1982, el gobierno del presidente Miguel de la Madrid Hurtado puso en vigor el Programa Inmediato de REordenamiento Económico (PIRE), un programa de estabilización de 3 años bajo la vigilancia del Fondo Monetario Internacional.

El descontento popular ante la alza desenfrenada de los precios y el desempleo creciente empezó a manifestarse desde 1983. Hacia mediados del año, la CTM y la CT, después de haber inicialmente aprobado las medidas de austeridad, amenazaron con lanzar una huelga general. La respuesta gubernamental fue la marginación de estos organismos a favor de otros (la CROM y la CROC) más dóciles. Las bases obreras se habían quedado

paralizadas.

No fue así con las urbanas. Desde fines de los años setentas, habían nacido las "coordinadoras", a raíz de los esfuerzos del gobierno anterior por crear juntas de vecinos controladas por el PRI dentro de su programa de "reforma política". En Mayo de 1980, nació la CONAMUP (Coordinadora Nacional de Iso Movimientos Urbanos Populares), como organismo de integración de los centenarios de pequeños movimientos localizados que se habían distanciado del gobierno. La tendencia democrática entre los maestros de escuela, por su parte, habían creado en diciembre de 1979 a la CNTE, o Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado a raíz de las movilizaciones de los maestros de Chiapas consecuentes a la descentralización de la educación (Street, 1986, 1992). En el campo, se había creado la CNPA o Coordinadora Nacional del Plan de Ayalá.

Si consultamos a los textos oficiales de estos organismos para descubrir cuales eran sus objetivos, nos enfrentamos con definiciones demasiado amplias o desmesuradamente utópicas. La CONAMUP, por ejemplo, ostentaba los objetivos siguientes:

- "Crear una organización amplia y única del sector independiente
- Impulsar la creación de un Frente Nacional, en el que participen todos los sectores del pueblo explotado y oprimido de México, y
- Luchar por la destrucción de la sociedad capitalista por medio de la transformación revolucionaria hasta la toma del poder político y la creación de una sociedad sin clases". (Ramírez Sáinz, 1986:38)

Esto no impidió, sin embargo, que esta organización y otras coordinadoras emprendieran acciones concretas que provocaron movilizaciones masivas. La CNTE, por ejemplo, organizó el FNDSCAC, o Frente Nacional de la Defensa de los Salarios y contra la Carestía (Carr, 1986). La CONAMUP, en cambio, concentraba sus esfuerzos en los problemas más urgentes de los habitantes de las colonias urbanas proletarias: vivienda, agua, drenaje, electricidad, impuesto predial, etc.

En octubre de 1983, las coordinadoras se juntaron para organizar un gigantesco "paro

cívico" en el cual participaron unos 2.5 millones de personas. En 1984, la CTM volvió a amenazar con una huelga general si no había un aumento de salarios. Los emplazamientos a huelga se multiplicaban. Esta vez, el gobierno no fue tan brusco. Concedió el aumento salarial y llegó hasta a anunciar el próximo fin de la austeridad. En junio, se organizó un segundo paro cívico, el cual reunió a medio millón de personas, cifra que sin embargo superaba a la reunión más grande lograda por el movimiento estudiantil que había sido aproximadamente de 300,000 personas.

Los analistas de las coordinadoras declaran que estas dejaron de ser capaces de movilizar a sus fuerzas después de 1984, debido a conflictos internos, a la represión gubernamental de militantes individuales, y a la interferencia de los partidos de izquierda que se sintieron marginados (Middlebrook, 1989: 205). Sin embargo, tal diagnóstico procede de una visión demasiado estrecha sobre las movilizaciones colectivas de estos años. No se trata de seguir paso a paso a un solo actor organizado para averiguar que logró, sino de registrar el flujo y reflujo de estas movilizaciones, bajo diferentes nombres y diferentes banderas. Después de los grandes paros cívicos, el sismo de 1985 se convirtió en el polo de movilización de los grupos urbanos:

Esos días finales de septiembre fueron de efervescencia de iniciativas colectivas y de creación de un nuevo entramado social que hacía emerger a los damnificados como agentes políticos en el plano del conflicto social y la disputa política por la reconstrucción de la ciudad....Progresivamente se fueron construyendo las indentidades colectivas como vecinos y ciudadanos afectados que se convertían en sujetos políticos de un movimiento urbano que surgía de una coyuntura de desastre y emergencia pero que, desde sus primeras denuncias y demandas, manifestaba un cuestionamiento de la forma con la ciudad ha sido construida y utilizada, del autoritarismo y burocratización de los aparatos del Estado, de la impunidad de la especulación inmobiliaria y la segregación social en el espacio urbano (Massolo, 1986:197)

La Coordinadora Unica de Damnificados (CUD) pronto integró los esfuerzos de los representantes de las diversas colonias afectadas por obtener servicios, y sobre todo la expropiación de los terrenos dañados. A partir de octubre de ese año, el presidente empezó el "diálogo" con los representantes de estos movimientos, junto con representantes de la SEDUE y de los delegados políticos del DF. El 11 de octubre, el presidente decretaba la expropiación de varios predios en las colonias dañadas, conforme a las demandas que habían ido gestando las asociaciones de colonos (Massolo, 1986: 201). Poco después el gobierno creaba Renovación Habitacional Popular, un organismo descentralizado encargado de las negociaciones con los colonos (Azuela, 1987).

El lento proceso de reconstrucción posterior al sismo siguió en un contexto económico cada vez peor. Al final de 1985, la recesión seguía, debido al colapso de la estrategia de precios del OPEC (Banco Mundial, 1986). El año siguiente no aportó mejoras. El precio del petróleo seguía bajando y la inflación subiendo. Entre 1982 y 1985, el PNB per cápita descendió de 15% (Hernandez Laos, 1993); las inversiones públicas bajaron en un 50% y las privadas en un 15%, con un aumento ligero del 3.3% entre 1986 y 1988 (Hernandez Laos, 1989, 1993). En 1986, se volvió a recortar el presupuesto público, pero esto no se logró compensar la pérdida del 57% en ingresos sobre el petróleo (Cornelius, 1986). Los subsidios alimentarios fueron recortados en un 80%: el precio de la tortilla subió en 140%, pero el azúcar siguió siendo subsidiado por un tiempo más.¹² El precio interno de la gasolina dobló y el boleto de metro pasó de 1 a 20 pesos. La inflación alcanzó tres

¹² Para más detalles sobre la política de salud y alimentación durante los años 80, véase Brachet-Marquez y Sheradden, 1992.

dígitos. No es hasta fines de 1987 que se vislumbró la posibilidad de una recuperación económica con el entonces denominado Pacto de Solidaridad (transformado más adelante en Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico o PECE) a través del cual el gobierno obtuvo la colaboración de la iniciativa privada para congelar los precios.

Es dentro de este ambiente de descomposición económica y social que se desató la pugna dentro del PRI entre una tendencia democrática y los defensores del estatus quo. La disputa concluyó con la expulsión en 1987 de los reformadores, entre ellos Cuaúhtemoc Cárdenas, el hijo del legendario presidente Lázaro Cárdenas. De esta escisión nació el Frente Democrático Nacional (FDN), organismo bajo el cual Cárdenas empezó su campaña. Después de un comienzo poco glorioso, empezaron a suceder varios "milagros" (Monsivais, 1990): en la lagunera con los campesinos que habían recibido sus tierras de su padre, en Baja California Norte, en Morelos, Oaxaca, el Estado de México, Hidalgo (Monsivais, 1990). Finalmente, triunfó en la ciudad de México donde el Zócalo no se había llenado de opositores al PRI desde 1968. El gobierno empezó a imprimir carteles advirtiendo que Cuaúhtemoc Cárdenas no era lo mismo que Lázaro del mismo apellido. Esta receta era quizás eficaz para el campesinado, pero no para los ciudadanos. El nuevo cardenismo había logrado aglutinar a una coalición que aunque no coincidía con los movimientos urbanos de los años anteriores, jamás podría haberse levantado sin ellos: estudiantes, intelectuales, trabajadores y empleados, los marginados urbanos, los profesionistas. Lo que no tenía la nueva coalición era el control de los medios de masa, el monopolio sobre los símbolos nacionales (vgr: los colores de la bandera siendo asociados con el PRI), el dinero de los causantes y, por último, control sobre el proceso electoral.

Los sucesos posteriores a la elección de 1988 son lo suficientemente conocidos para no ahondar en ellos. Después de una participación electoral altísima por parte de los ciudadanos, las magníficas instalaciones de cómputo de los votos cayeron, o como dijo un diputado del PAN, "callaron" (de Molinar, 1990). Los resultados finalmente publicados fueron tan distorcionados que resultaba imposible descubrir quien había ganado.¹³ La actitud intransigente del Colegio Electoral que recibió las quejas sobre irregularidades dejó poca esperanza de que las dudas se fueran a aclarar. El Candidato Salinas de Gortari fue declarado ganador.

después de proclamar su inconformidad, los candidatos de la oposición finalmente callaron.

La desagregación del frente cardenista se llevó acabo en varios pasos bien coordinados. Primero una nueva serie de leyes electorales (aprobada por la mayoría en el Congreso) declararon ilegal la formación de coaliciones de partidos que había permitido la constitución del FDN y excluyeron la posibilidad de que alguna otra coalición de este tipo volviera a formarse. El nuevo cardenismo, para sobrevivir, debía convencer a todos los integrantes de la coalición que desaparecieran como partidos para formar uno sólo, una condición con la que era casi imposible cumplir. El nuevo partido también tendría que seguir atrayendo la lealtad de las masas populares de las ciudades, aunque estas habían repetidamente expresado su desencanto con los partidos políticos (Street, 1991). La estrategia más efectiva para desarmar a la oposición fue, sin embargo, la creación en 1989 del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) que se orientó hacia los marginados

¹³ Molinar, 1990 opina que Salinas hubiera ganado sin fraude, pero con un margen más estrecho.

en general, pero sobre todo los urbanos. Las metas de PRONASOL eran combatir la pobreza, y encontrar alternativas para mejorar su situación (Consejo Consultivo de PRONASOL, 1990). Se preveían tres estrategias para lograr estos propósitos: 1) los servicios de educación, salud, alimentación, vivienda y servicios urbanos a los pobres, 2) programas de desarrollo agropecuario y el apoyo directo a la agricultura campesina y las microempresas; y 3) el desarrollo regional (Consejo Consultivo, 1990: 141; Gonzalez Tiburcio, 1991). PRONASOL es a la vez algo nuevo y un vino viejo en nuevas botellas. Concentra y coordina servicios que antiguamente eran administrados por una variedad de organismos públicos : Secretaría de salud, Educación, COPLAMAR, SAHOP, SARRH, etc. Pero PRONASOL es algo más que un paquete publicitario. La gran innovación a la que debe su actual éxito es la noción de participación popular, la cual incluye la co-responsabilidad financiera de los beneficiarios.

El Partido de la Revolución Democrática se fundó en 1989 y cumplió en la elección de 1991. Pero esta reveló la recuperación del partido oficial. A partir de 1989, las coordinadoras entraron en una fase de descomposición y fragmentación . Los maestros, por su parte, recibieron en 1989 y en 1991 los únicos aumentos otorgados por el gobierno a los asalariados. El líder "vitalicio" Jonjitud Barrios que había sido incapaz de impedir el nacimiento de la tendencia democrática, fue removido del poder. Una vez más, las disidencias se habían neutralizado; pero también habían sido parcialmente satisfechas. La conclusión a la que lleguemos podría ser pesimista si permaneciéramos dentro de los esquemas convencionales de evaluación de metas pre-establecidas. No sobrevivieron ni el proyecto popular autónomo de las coordinadoras, ni el partido democrático social a una

escala suficiente para transformar el sistema. Sin embargo, podría decirse que la transformación si se dió bajo el impulso del reto que representó la conyuntura de 1988: PRONASOL es la mejor prueba de ello, así como la mezcla insólita de una política gubernamental entre un proyecto económico neoliberal con un proyecto social redistributivo.

III. Conclusiones

Después de este breve recorrido en dos episodios memorables en la trayectoria política de México, quisiera regresar a las preguntas que motivaron este trabajo. La primera es si los movimientos que nos ocupan son "viejos", "nuevos" o ambas cosas. Esta primera pregunta requiere de un razonamiento contrafáctico: ¿qué hubiera sucedido si hubieran tenido éxito? En los dos casos, la respuesta es: un cambio radical. México se hubiera transformado en un régimen pluripartidario competitivo partir de fuerzas originadas en la sociedad, que son las únicas que pueden provocar tal cambio.¹⁴ El potencial de movilización horizontal de estos movimientos hacia esta meta fue, precisamente, lo que provocó la acción estatal defensiva. En este sentido, podemos considerar tanto al movimiento estudiantil como al popular como "viejos" en el sentido amplio de la palabra, esto es, sin asumir que funcionaron como proxis del movimiento obrero (que brilló por su ausencia en ambos casos).

¹⁴ La democratización desde arriba puede matizar el autoritarismo, pero no deja de ser una mera modernización de este autoritarismo. Existe entre el pluralismo democrático y el principio del partido único un hiatus absoluto: en una democracia, un partido debe poder perder. En el sistema de partido oficial, este no puede perder. Para una más amplia discusión de este problema, véase Brachet-Marquez, 1992:108-116.

Si los movimientos sociales fueran tan sólo maquinarias para lograr objetivos, serían organizaciones jerarquizadas con tecnologías¹⁵ estandarizadas y percepciones colectivas más o menos unitarias de las prácticas de dichas organizaciones. Estas características se acercan de los llamados "partidos de vanguardia" pero no de las manifestaciones populares que son espontaneidad, inconformidad, y juxtaposición desordenada de aspiraciones, objetivos, comportamientos y acciones sin vínculos claros entre sí.¹⁶ Tanto los estudiantes como las coordinadoras persiguieron algunas metas concretas --la liberación de los presos, la disolución de los granaderos, el reconocimiento de sus órganos por el gobierno en el caso de los estudiantes; los servicios urbanos, los problemas de tenencia de la tierra, la carestía para los movimientos de colonos. Pero también buscaban realizar, a través de sus actividades, otras formas de vida más auténticas y más igualitarias. Los estudiantes, en particular, rechazaban las formas institucionalizadas de la actividad política dentro del ámbito mexicano, pretendiendo desenmascarar las mentiras oficiales para sustituirles una realidad transparente (Revueltas, 1978). Todo esto los aleja de los movimientos "viejos" y los asemeja a los "nuevos". Sin embargo, relegar estos aspectos psico-culturales a lo "cultural" es hacer una separación artificial entre la acción instrumental y la expresiva: los jóvenes del 68 y los participantes en las grandes movilizaciones de los 80s tenían los pies sólidamente arraigados en lo político; por lo tanto, lejos de ser ajeno a lo político, sus acciones configuraban un conjunto de contrapropuestas al estatus quo político. El énfasis del análisis

¹⁵ Se entiende aquí en el sentido amplio de la palabra de como se lleva acabo una tarea.

¹⁶ Por ejemplo la juxtaposición de la forma de vida de los "flower children" y la lucha contra la guerra de Vietnam entre los jóvenes norteamericanos de los años 60.

de los movimientos "viejos" sobre los fines instrumentales y últimos que estos movimientos persiguen, a fin de cuenta, no es más que un recorte artificial de la realidad. El análisis "cultural" de los nuevos movimientos no sería más que la otra cara de la misma moneda.

Los supuestos metodológicos estrechos asociados con el enfoque de los movimientos viejos, al romperse, nos deja entrever no sólo la multiplicidad de fines y de resultados (unos deseados, otros no), sino también la multiplicidad y la inestabilidad de los actores en el tiempo y el espacio. Por lo tanto, lo que debe ocupar nuestra atención no son las trayectorias de colectividades particulares, sino la proliferación y el entretrejo de los múltiples actores cambiantes. Esta multiplicidad no puede conformar un sólo movimiento masivo más que de manera contingente, como argumenta Kowarick (1985). El movimiento que sostuvo a Cárdenas en 1988 no fue algo que llegaba "desde atrás": fue una aglutinación casi instantánea que nadie podía prever porque no existían antecedentes reconocibles como tales.¹⁷

Por último, si abandonamos la idea de los movimientos sociales como maquinarias de revoluciones proletarias (o democráticas), también podemos aligerar algo la carga de fracaso que pesa sobre ellos. Tanto el movimiento estudiantil como el de 88 trajeron cambios, sin lugar a duda: primero, cambios sustantivos --las reformas sociales que les siguieron-- y segundo transformaciones en las reglas del juego político, que a pesar de ser muy limitadas, abrieron espacios nuevos que posteriormente no pudieron cerrarse. Esto significó la desaparición de estos actores (via represión o cooptación), más no su fracaso.

¹⁷ Esto nos hace reflexionar también sobre las movilizaciones obreras de los años 30 que sostuvieron a Lázaro Cárdenas y que siempre se han analizado como si fueran perfectamente planeadas.

Esta desaparición no impidió (o no impide en el caso del cardenismo) el surgimiento de otros actores o los mismos con otras banderas y otras demandas. En la historia posrevolucionaria de México, los movimientos insurgentes forzaron el Estado a reformar el sistema, aunque en la mayoría de los casos sus militantes no pudieron beneficiarse de ellos, porque fueron sacrificados. Los gobiernos lo persiguieron con las armas al alcance del Estado: la censura, la legalidad y la coerción organizada. Sin embargo, los movimientos sociales tienen otras armas: las conquistas de los grupos que los precedieron, --mismas que, al institucionalizarse limitan la censura y la represión-- y su facultad de recomposición y de renovación fuera de la esfera institucional: al fin, su carácter de movimientos nuevos.

Bibliography

Adler Hellman Judith A., 1983 (2nd Ed.). Mexico in Crisis. New York and London: Holmes and Meier.

Adler Hellman Judith A., 1992. "The Study of New Social Movements in Latin America and the Question of Autonomy," in The Making of Social Movements in Latin America. Identity, Strategy and Democracy, ed., Arturo Escobar and Sonia Alvarez. Boulder Co.: Westview Press.

Azuela Antonio, 1987. "Derecho y política en el programa de Renovación Habitacional Popular," Estudios Demográficos y Urbanos vol 2(1):53-73.

Banco Mundial, 1986. Poverty in Latin America. The Impact of Depression. Washington DC: The World Bank.

Barros Robert, 1986. "The Left and Democracy: Recent Debates in Latin America", Telos 68(Verano):49-68.

Bataillon Claude, 1968. "Le Mexique du Président Díaz Ordaz," Notes et Etudes Documentaires 3520 (September):

Brachet- Marquez Viviane, 1992. "Explaining Socio-political Change in Latin America: The Case of Mexico", Latin American Research Review, 27 (3):91-122.

Brachet-Marquez, Viviane 1993. The Dynamics of Domination. State, Class and Social Reform in Mexico, 1910-1990. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Brachet-Márquez Viviane and Margaret Sherraden, 1991. "Fiscal Austerity, the Welfare State and Political Change: The Case of Health and Food Policies in Mexico," Paper presented at the Congress of the Latin American Studies Association, Washington DC: April.

Brown Douglas, 1988. "Sandinismo and the Problem of Democratic Hegemony", Latin American Perspectives 17(2): 39-61.

Carr Barry, 1986. "Introduction" in The Mexican Left, the Popular Movements and the Politics of Austerity 1982-1985, ed., Barry Carr, Monograph Series No 18. La Jolla : Center of US-Mexico Studies. University Of California in San Diego.

Castells Manuel, 1976. "Theoretical Propositions for an Experimental Study of Urban Social Movements", en Urban Sociology:Critical Essays comp. C.G. Pickvance. London: Tavistock.

Chilcote Ronald H., 1988. "Postmarxism: The Retreat from Class in Latin America", Latin American Perspectives 17(2):3-27.

Cockroft James, 1983. Mexico: Class Formation, Capital Accumulation and the State. New York: Monthly Review.

Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad (1990). El combate a la pobreza: Lineamientos programáticos. Mexico DF: El Nacional.

Cornelius Wayne, 1986. The Political Economy of Mexico under de la Madrid: The Crisis Deepens, 1985-1986, Research Report Series No 43, La Jolla, Ca.: Center for US-Mexican Studies, University of California, San Diego.

Evers Tillman, 1985. "Identity: the Hidden Side of New SocilaMOvements in Latin America", en The New Movements and the State in Latin America, comp. David Slater. Dordrecht, Paises Bajos: CEDLA.

Foweraker Joe, 1990. "Popular Movements and Political Change in Mexico," en Popular Movements and Political Change in Mexico, comps., Joe Foweraker y Ann L. Craig. Boulder y Londres: Lynne Rienner Publishers.

Gonzalez Casanova Pablo, 1970. Democracy in Mexico. New York: Oxford University Press.

González Tiburcio, Enrique (1991). "PRONASOL: hacia la nueva síntesis." Cuadernos de

Nexos October, pp. X-XIII.

Grindle Merilee S., 1977a. Bureaucrats, Politicians and Peasants in Mexico. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

Hernandez Laos Enrique, 1993. Crecimiento Económico y Pobreza en México: Una Agenda para Investigación. Mexico DF: UNAM.

Hernandez Laos Enrique, 1989. "Efectos del Crecimiento Económico y la Distribución del Ingreso sobre la Pobreza Extrema en México (1960-1988)" Document prepared for the United Nations Development Program (UNDP), Xerox.

Hernandez Salvador, 1971. El PRI y el movimiento estudiantil de 1968. Mexico DF: El Caballito.

Kaufman Susan, 1973. "Decision Making in an Authoritarian Regime, Theoretical Implications from a Case Study," World Politics, 25(3):

Kaufman Susan, 1975. The Mexican Profit-Sharing Decision: Politics in an Authoritarian Regime. Princeton: Princeton University Press.

Kowarick Lucio, 1985. "The Pathways to Encounter: Reflections on the Social Struggle in Sao Paulo", en The New Movements and the State in Latin America, comp. David Slater. Dordrecht, Países Bajos: CEDLA.

Laclau Ernesto, 1985. "New Social Movements and the Plurality of the Social", en The New Movements and the State in Latin America, comp. David Slater. Dordrecht, Países Bajos: CEDLA.

Laclau Ernesto and Chantale Mouffe, 1984

Lechner Norbert, 1986. "De la Revolución a la Democracia", La Ciudad Futura 2.

Marcuse Herbert, 1970. Five Lectures: Psychoanalysis, Politics and Utopia. Londres: Allan Lane, The Pinguin Press.

Massolo Alejandra, 1986. "¡Que el Gobierno Entienda, lo Primero es la Vivienda!" Revista Mexicana de Sociología, 48(2): 195-238.

Melucci Alberto., 1981. "Ten Hypotheses for the Analysis of New Movements", en Contemporary Italian Sociology, comp. D. Pinto. Cambridge: Cambridge University Press.

Middlebrook Kevin, 1989. "The Sounds of Silence: Organised Labour's Response to Economic Crisis in Mexico," Journal of Latin American Studies, 21():

Miliband Ralph, 1985. "The New Revisionism in Britain", New Left Review, 150(Marzo-Abril):13-14.

Molinar Horcasitas Juan and J. Weldon, 1990. "Elecciones de 1988 en México: Crisis del Autoritarismo," Revista Mexicana de Sociología 52(4): 229-262.

Monsivais Carlos, 1990. "From '68 to Cardenismo: Toward a Chronicle of Social Movements", Journal of International Affairs, 43(2): 385-93.

Mouffe Chantale, 1984. "Toward a Theoretical Interpretation of 'New social Movements'", en Rethinking Marx, comps., S. Hanninen y L. Paldán, pp. 139-143. Berlin: Argument-Sonderband AS 109

Munck Ronaldo L., "Farewell to Socialism? A Comment on Recent Debates", Latin American Perspectives, 17(2): 113-21.

Offe Claus and Wiesensthal H., 1985. "Two Logics of Collective Action", en Disorganized Capitalism comp. Claus Offe. Cambridge: Polity Press.

Ramirez Sainz, 1986. "El proyecto de masas de la CONAMUP: balance provisional," Estudios Políticos

Revueltas José, 1978. México 68: Juventud y Revolución. Mexico DF: Era.

Scott Alan, 1991. Ideology and the New Social Movements New York: Unwin and Allan.

Skidmore Felicitas E. y Peter H. Smith, 1984. Modern Latin America. Cambridge: Cambridge University Press.

Smelser Neils, 1962. Theories of Collective Behavior. Londres: Routledge & Kegan Paul.

Stavenhagen Rodolfo, 1976. "Reflexiones sobre el proceso político", Nueva Política 1(2):15-22.

Stevens Evelyn, 1974. Protest and Response in Mexico. Cambridge, Mass, MIT Press.

Street Susan, 1992. Maestros en Movimiento. Transformaciones en la Burocracia Estatal. Colección Miguel Othón de Mendizábal. Mexico DF: SEP.

Street Susan, 1989. "The Role of Social Movements in the Analysis of Socio-political Change in Mexico," Paper presented at the Latin American Studies Association XV International Congress, September 21-23, 1989.

Touraine Alain, 1981. The Voice and the Eye: An Analysis of Social Movements. Cambridge: Cambridge University Press.

Stepan Alfred, 1978. The State and Society. Peru in a Comparative Perspective. Princeton: Princeton University Press

Vasconi Thomas A., 1988. "Democracy and Socialism in South America", Latin American Perspectives 17(2):25-38.

Whitehead Lawrence ,1987. "La Perspectiva Económica de México: Sus Implicaciones para las Relaciones entre el Estado y los Trabajadores," Foro Internacional,28(Oct-Dec):

SEMINARIO

TRANSFORMACIONES SOCIALES Y ACCIONES COLECTIVAS
AL FINALIZAR EL SIGLO XX: BALANCES Y PERSPECTIVAS

**Los partidos políticos en la recomposición de la
sociedad civil y del estado en México**

Jorge Alcocer

Seminario organizado por el Centro de Estudios Sociológicos de
El Colegio de México, del 11 al 13 de noviembre de 1992

LOS PARTIDOS POLITICOS EN LA RECOMPOSICION DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DEL ESTADO EN MEXICO

Jorge Alcocer V.*

- El autor es Coordinador General del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional, S.C. Ponencia presentada en el Seminario "Transformaciones sociales y acciones colectivas: América Latina en el contexto internacional de los noventa". COLMEX, 11,12 y 13 de noviembre de 1992.

Primera versión, sujeta a revisión. El autor agradecerá no citar ni reproducir este documento.

¿Cuales son los cambios mas importantes que es posible detectar en la sociedad y en el Estado en México y a partir de que fecha debemos hacer un corte temporal para ubicar historicamente esos cambios?.

Durante toda la década de los setentas el punto de referencia lo fue el movimiento estudiantil de 1968. Primero desde las filas opositoras o simplemente críticas, y luego en forma generalizada, 1968 fue ubicado como un "parteaguas" de la sociedad mexicana. El punto de quiebre del modelo autoritario adquirió año y día precisos: 2 de octubre de 1968.

sin embargo, el quiebre de 1968 lo que produjo no fue una sociedad más democrática, tampoco el respeto de los derechos humanos o la ampliación de las libertades cívicas. Produjo, por un lado, un nuevo estilo de gobierno por el cual se buscó cooptar, integrar, subordinar a los hombres y grupos críticos. La apertura echeverrista no fue un programa de reformas democráticas, sino una forma de cooptación de los críticos.

En la otra cara de la moneda, en la sociedad, y en particular en su capa social más radicalizada, lo que produjo fue desesperación, que a su vez se convirtió, en cientos de jóvenes, en convencimiento de que había llegado el momento de la "Revolución". El saldo fue terrible, durante casi cuatro años en México se vivió una auténtica "guerra secreta" entre las fuerzas de seguridad del Estado y grupos izquierdistas que tomaron el camino de la guerrilla urbana y rural. Decenas, quizá cientos de jóvenes, de campesinos, de pobladores de pequeñas comunidades, perdieron la vida o fueron privados ilegalmente de su libertad.

Como bien ha señalado Carlos Castillo Peraza, el gobierno echeverrista vivió la esquizofrenia de un tercermundismo que, con base en un principio por todos respetado, el derecho de asilo, otorgaba refugio y seguridad a los latinoamericanos perseguidos por sus ideas políticas, mientras en México morían o eran encarcelados cientos de ciudadanos movidos por las mismas ideas políticas.

Se fue hasta 1978, diez años después del 68, y concluida esa "guerra secreta", cuando el gobierno aceptó la necesidad de proceder a una reforma política que para todo fin concreto quedó reducida a una reforma electoral, mediante la cual fue legalizado el Partido Comunista Mexicano, y otros partidos (PDM, PST).

Es indudable que la reforma de 1978 reencauzó el rumbo de la confrontación política en México. Poco a poco, mediante la incorporación de los grupos de izquierda más radicales a los procesos electorales y su presencia en la Cámara de Diputados, la tentación rupturista fue quedando superada, aun cuando en

el discurso de muchos de esos grupos, empezando por el propio PCM, seguía siendo parte esencial de su ideología.

Visto a distancia, esa reforma abrió el camino para uno de los cambios más importantes que registra nuestra vida política: la revaloración de las elecciones como fórmula única para la solución de las diferencias políticas entre ciudadanos y grupos.

No es que en el lapso que media entre 1968 y 1978 no hayan existido otros cambios positivos en nuestra vida ciudadana. Los hubo, pero ellos tuvieron que ver mucho más con las iniciativas y acciones emprendidas desde la sociedad, que con un programa de reformas desde el gobierno. En todo caso, éste último amplió sus márgenes de tolerancia, no sin involuciones autoritarias notables, como lo demostró el asalto a la dirección de Excelsior en el año 1975.

De ese episodio surgirían un conjunto de publicaciones que reivindicaron, cada una en su perspectiva, el derecho a la crítica y la libertad de expresión. Proceso, Vuelta, Uno más Uno, fueron producto genuino de la exigencia de libertad para discutir, criticar.

Por esos mismos años resurge en el sindicalismo mexicano la demanda de libertad y democracia. Diversos conflictos se presentan en el centro y norte del país. El más importante, la movilización de los trabajadores electricistas dirigidos por Rafael Galvan, quienes agrupados en la Tendencia Democrática del UTERM protagonizaron una larga e infructuosa lucha por la recuperación de su organización gremial.

Frente a esos movimientos, el margen de tolerancia del gobierno fue mucho menor. Si la cooptación no funcionaba, entonces venía la represión, el desconocimiento de las direcciones sindicales emergentes, la colusión con los patrones. La apertura echeverrista se detuvo siempre a las puertas de las fábricas.

Entre 1978 y 1988 la vida política de México, analizada a través de la óptica electoral y de sus partidos, se mantuvo prácticamente congelada. La hegemonía priísta fue refrendada sin mayor dificultad en cada una de las elecciones federales previas a 1988 (1979, 1982, 1985) y en prácticamente la totalidad de las elecciones locales. Solo en 1983 fue posible constatar un cambio regional, Chihuahua y Durango, que se repetiría en la primera de esas entidades en 1986. Sin embargo, la fortaleza priísta parecía haberse adaptado con eficiencia al cambio y haber asimilado con prontitud la nueva "pluralidad" partidista.

Sin embargo, las cosas cambiaban. En 1975-76 el renovado populismo tercermundista de Echeverría tocó fondo y dió paso a la primera gran sacudida de la economía mexicana. La crisis quedó atrás en forma rápida gracias a la emergencia del petróleo y sus recursos. Entre 1979 y 1981 México vivió la fantasía del cuerno de la abundancia. El Gobierno de López Portillo dividió rápidamente los proyectos de reformas estructurales y fortaleció el modelo proteccionista e intervencionista que apenas unos años atrás parecía agotado. El costo no se hizo esperar.

Vale reiterarlo, a partir de 1983 la economía mexicana ha vivido la mayor transformación desde las reformas operadas en el sexenio cardenista. Esas

transformaciones afectaron dos de los pilares históricos de la dinámica económica:

La intervención del Estado en la economía, tanto la directa, como la de regulación y control. En lo primero, el cambio consistió en la desincorporación de cientos de empresas de propiedad estatal, las cuales han sido transferidas al sector privado, y en menor grado a gobiernos estatales u organizaciones locales. Lo segundo se ha producido, por la vía de la llamada desregulación o simplificación administrativa, mediante la cual

se han eliminado buena parte de los mecanismos de supervisión o regulación de las actividades económicas privadas.

La acelerada apertura al exterior que nuestra economía ha vivido a partir de la entrada de México al GATT en 1983 y la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Debe anotarse que estos cambios difícilmente pueden vincularse a las transformaciones políticas operadas a partir de 1989 en Europa del Este y la URSS, ocurridas cuando el programa económico neoliberal para México estaba plenamente definido. Ese programa se inscribe en los cambios operados en las naciones capitalistas de occidente a partir del arribo al gobierno de Gran Bretaña de la ex primera ministra Margaret Thatcher y de la presidencia de Ronald Regan en Estados Unidos.

La hegemonía del neoliberalismo o monetarismo significó un giro de 180 grados en las concepciones teóricas e ideológicas que sustentan las políticas

onómicas en occidente. La crisis del paradigma keynesiano y el fracaso de s políticas nekeynesianas en varios países europeos -el experimento frances e 1982-1983 sería un buen ejemplo- y en EEUU durante la presidencia de imes Carter, son el antecedente inmediato del cambio en el paradigma onómico.

neoliberalismo funda su acción en la preminencia del mercado como ignador de recursos y distribuidor de los beneficios. Bajo la consigna de "dejar las fuerzas del mercado" se produce la más amplia y profunda retirada del Estado de la vida económica.

México, las consecuencias económicas de la nueva política han sido analizadas por diversos autores. Para los fines del presente ensayo, lo que nos interesa destacar es el impacto social y político del cambio de estrategia y del programa de reformas.

Desde 1983 se ha producido en México un divorcio entre la ideología que históricamente sustentó la acción del Estado y las nuevas políticas y estrategias. Las nuevas políticas conllevaron al abandono acelerado del estatismo, el nacionalismo y el populismo que marcan al Estado mexicano desde Cárdenas. El rompimiento no fue solo con el cardenismo y sus instituciones, también hubo un rompimiento con el alemanismo en tanto que fundador de la política proteccionista que guió la industrialización mexicana desde fines de los 40. El modelo de acumulación "internista" (Paramio) que permitió el "milagro mexicano" y la época dorada del "desarrollo estabilizador", fue abandonado, para ser sustituido por un modelo en construcción en

El cual los influjos del mercado externo juegan un papel central para la definición de la dinámica interna.

El divorcio fue una de las causas centrales del cisma priísta de 1987; después de tres décadas de cohesión y unidad a toda prueba. La ruptura de Cuauhtémoc Cárdenas y su grupo con el PRI y con el sistema se sustentó en la disputa ideológica por la vigencia-abandono del cardenismo y de "los principios de la Revolución Mexicana".

El cisma dentro del PRI operó en contra de la posibilidad de adaptación ideológica y programática del partido gobernante a las nuevas realidades propuestas desde el gobierno. Se produjo de esa forma una separación cada vez mayor entre la doctrina que da sustento al priísmo y las acciones del gobierno priísta.

Analizar las causas y consecuencias de la crisis electoral de 1988 sería prolijo. Basta para nuestros fines con recordar que con esa elección termina en México el era del partido dominante, casi único, para dar paso a una creciente competitividad electoral que ha adquirido en los espacios locales su principal manifestación.

En la elección de 1988 cada partido sacó sus propias lecciones. El principal opositor, el FDN rápidamente sucumbió a las contradicciones entre sus miembros pero pudo dar lugar al surgimiento de un nuevo partido, el PRD, que heredando el registro electoral del PMS (registro conquistado en 1979 por el PCM) atrajo a las principales corrientes de la izquierda opositora: la de matriz socialista y la cardenista.

El nuevo partido se autodefinió de entrada como un partido de ciudadanos. Sin embargo, a lo largo de sus cuatro años de existencia ha sostenido una política de claro corte populista y antisistémico, en la cual se entrecruzan dos de las "culturas" políticas de mayor corte corporativista: la del priísmo sectorizado y la de la izquierda que vió a las organizaciones sociales y gremiales como "correas de transmisión del partido".

Para los dirigentes e ideólogos del PRD, el 6 de julio habría sido una especie de despertar del "pueblo cardenista", los ciudadanos de carne y hueso que en 1988 hicieron de su voto un instrumento de protesta y manifestación de anhelo de cambio, fueron reinterpretados por el perredismo en una versión-visión ideologizada que ha pretendido ver en el verano de 1988 de México y los movimientos civiles por la democracia en Europa del Este un fenómeno con las mismas raíces. La idea del derrumbe, la ingobernabilidad, la renuncia del presidente y la ilegitimidad por los siglos de los siglos, marcaron y condicionaron toda la política del nuevo partido.

PRD no pudo ser el moderno partido de izquierda democrática que algunos imaginaron. Al adoptar en nociva simbiosis las visiones derrumbistas de la izquierda y fundirlas con el populismo y el caudillismo de la tradición priísta, el resultado fue un partido testimonial, contestatario, esimismo en sus propias e realizables fantasías. Para el PRD los "ciudadanos" existen metamorfoseados en el "pueblo cardenista", o divididos entre los "verdaderos" ciudadanos, aquellos que son concientes, críticos, opositores, y desde luego votan por el PRD, y aquellos que son objeto del engaño, carne de las "tamaladas" que

uecan votos por alimentos básicos. O como en inaceptable calificativo los
efinió uno de los ideólogos del perredismo: "víctimas de la degradación moral
el pueblo". (Adolfo Aguilar Z.)

ara el priísmo, los cambios operados en la política y la estrategia de dos
cesivos gobiernos tienen un saldo: la orfandad ideológica y los
ontradictorios intentos de reforma interna.

espués del trauma de la elección de 1988, el priísmo centró su atención y
sfuerzo en el diseño de una estrategia de conquista del voto que partiera del
reconocimiento explícito de una realidad nueva: la inoperancia de los viejos
mecanismos de control corporativo del voto ciudadano. Más que un cambio
n el discurso, entre 1989 y 1991 el PRI adapta y transforma su estructura
terna. Lo principal fue la desaparición de la CNOP y su conversión en UNE
omo organización de ciudadanos y movimientos, a partir de la cual se ha
tentado poner en práctica una amplia y ambiciosa estrategia de relación
on múltiples organizaciones de la sociedad civil en las que se incluyen
ecologistas, defensores de los derechos humanos, discapacitados, artistas, etc.

oducto de la aceptación ciudadana del programa del gobierno salinista, de
n cambio notable en las expectativas de las clases medias, del PRONASOL,
into en sus resultados concretos como de su manejo ideológico, así como de
s fallas de sus principales opositores, el PRI pudo recuperarse en la elección
termedia de 1991 y volver a disponer de una cómoda mayoría en la Cámara
e Diputados, refrendando su predominio absoluto en la de Senadores.

La XIV Asamblea del PRI avanzó en la adaptación de los principios y programa

del partido oficial a las nuevas condiciones del país. Buena parte del énfasis estatista y populista de los anteriores documentos fue superado, además se aprobaron nuevos Estatutos mediante los cuales se pretendió democratizar la elección interna de dirigentes y la selección de candidatos. Hasta hoy la pretensión no ha pasado de la letra, pues en la práctica se han seguido imponiendo los mismos métodos de designación cupular, directamente influidos por el Presidente de la República.

Desde el aniversario 61 de su fundación, el PRI, por mandato presidencial, ha buscado encontrar en el llamado "liberalismo social" su nueva base ideológica. El proceso ha sido contradictorio, pues la vieja ideología de la Revolución Mexicana y su expresión priísta, el "nacionalismo revolucionario" está profundamente enraizado en las bases y cuadros dirigentes del priísmo. Hoy por hoy lo que vivimos es una combinación de la vieja ideología con el nuevo discurso, del cual, quizá, surja en renovado sincretismo, la nueva plataforma ideológica del PRI de fin de siglo.

Al igual que el PRD, el priísmo ha incorporado al ciudadano como eje de su nuevo discurso, solo que en el caso del partido oficial las contradicciones son todavía más agudas por la persistencia de la antigua estructura de sectores y la pervivencia de la afiliación colectiva. Esas estructuras se han mostrado más resistentes e impermeables al cambio de lo que se pensaba, de forma tal que la refundación del PRI ha debido concentrarse en forma casi exclusiva en la progresiva transformación de UNE en un conjunto de nuevas organizaciones y movimientos.

No es casual que contra la tradición priísta, el equipo dirigente de UNE,

encabezado por la Senadora Silvia Hernández, se haya mantenido en el cargo a pesar del relevo en la presidencia del CEN, y de ese grupo hayan surgido las más audaces y novedosas iniciativas de vinculación con la sociedad.

En el PRI se viene agudizando la contradicción entre dos lógicas que presentan discursos y estrategias no solo distintas sino en ocasiones opuestas. La lógica de los sectores, atada a la tradicional forma de hacer la política, sobre base del control directo de organizaciones gremiales y sociales, y la nueva lógica ciudadana, que ha encontrado en UNE y en sus dirigentes su bastión principal. La revisión de las principales declaraciones y documentos del nuevo PRI priísta, más allá de sus notorias incoherencias, muestra que para todo fin práctico la llamada refundación del PRI estaría sustentada en el ambicioso proyecto de cambio que ha venido llevando a cabo la dirigencia de UNE.

Por lo tanto, vemos, en suma, un primer resultado en el nivel político: la incorporación del "ciudadano", de la "lógica ciudadana" al discurso y diseño de estrategias de estos principales partidos políticos. Aún con las contradicciones e incoherencias antes señaladas, es evidente que nuestros partidos han entrado en una etapa en la que los antiguos referentes ideológicos y sus expresiones gramáticas irán perdiendo peso en favor de lo que podríamos llamar la "ciudadanización" de la política, esto es, la incorporación de los referentes ciudadanos como articuladores del discurso y la praxis.

os apuntes finales:

PAN ha sido el partido que con mayor facilidad y eficacia se ha adaptado a nuevas circunstancias. Su larga tradición de acción ciudadana y su presencia en las llamadas organizaciones intermedias (p.e. las uniones de padres de familia o de colonos) lo capacitó para el cambio. Desde luego, el PAN no ha estado exento de conflictos y tensiones internas, como lo muestra la reciente salida del núcleo principal del autodenominado "Foro Doctrinario". De tal forma, empieza a ser notoria la conflictiva que le genera a ese partido la llegada de empresarios que incursionan como candidatos bajo las siglas del PAN, pero que actúan bajo su propio esquema de intereses y relaciones. Existe aquí un potencial núcleo de conflictos entre las directrices de la agencia nacional y los intereses locales -personales- de esos empresarios ligados a panistas.

La sociedad mexicana están en proceso un conjunto de cambios significativos, producto precisamente del abandono de las políticas y las ideologías estatistas y populistas. La retirada del Estado tiene como contraparte la emergencia de nuevas fuerzas, actores y grupos sociales que reivindican un antagonismo y unos intereses distintos a los de la política en su sentido estatista y estatal.

La multiplicación geométrica de organizaciones de ecologistas, de defensa de derechos humanos, de discapacitados, de padres de familia, de colonos y jornaleros, de intelectuales y artistas, da cuenta de esa realidad. Esas organizaciones se niegan a entrar al circuito de la política partidaria, indican su autonomía y formas propias de organización y gestión. Adoptan

nte a los partidos, la política y los políticos la natural desconfianza y recelo quien no quiere ser utilizado ni instrumentalizado en disputas electorales, o negociaciones por espacios de "poder".

mismo tiempo, la preminencia otorgada a "lo privado" en el discurso y la ctica gubernamentales ha tenido como primer resultado el protagonismo otros actores y organizaciones antaño sujetos a la lógica corporativa. maras patronales, colegios profesionales, organizaciones de productores, san su propia experiencia de independencia y autonomía.

último, solo queda espacio para apuntar al nuevo actor político que es la asia Católica. Privada de derechos desde la Guerra de Reforma en el siglo sado, hoy, recuperada su personalidad jurídica, otorgado el derecho de o a sus ministros, y reestablecidas las relaciones con el Estado Vaticano, la asia Católica, su jerarquía, incursiona en forma abierta en política. Será, no quepa duda, factor significativo de poder e influencia en la nueva nformación de la sociedad y la política de México.

SEMINARIO

**TRANSFORMACIONES SOCIALES Y ACCIONES COLECTIVAS
AL FINALIZAR EL SIGLO XX: BALANCES Y PERSPECTIVAS**

**Modernización económica y sindicalismo en México
Francisco Zapata**

**Seminario organizado por el Centro de Estudios Sociológicos de
El Colegio de México, del 11 al 13 de noviembre de 1992**

**El Colegio de México
Centro de Estudios Sociológicos**

**Coloquio Transformaciones sociales y acciones colectivas:
América Latina en el contexto internacional de los noventa
México, 11-13 de noviembre de 1992**

RESUMEN

Modernización económica y sindicalismo en México

**Francisco Zapata
El Colegio de México**

A partir de una discusión de las implicaciones que podría tener una crisis del corporativismo en México, la que no se da por descontada, se trata de ver qué impacto podría tener ésta sobre la relación entre el sindicalismo y el Estado. Dicha relación experimenta hoy graves tensiones debido a la disminución de los salarios reales, la compresión de las prestaciones sociales, los cambios en las formas de remuneración del trabajo, las reformas al pacto corporativo, la represión del conflicto sindical y sobre todo debido al debilitamiento del sindicato como institución representativa y reguladora de los trabajadores y de la vida fabril. A partir de ese diagnóstico, se indagan las posibles alternativas que pudieran existir, dando por sentado que el corporativismo se ha podido adaptar al nuevo proyecto económico a pesar de las tensiones que se mencionan.

Afiliación institucional: El Colegio de México

Grado académico: Doctor en sociología, Universidad de Paris, 1970.

Area de interés principal: sociología del sindicalismo en América Latina.

Referencias bibliográficas: El conflicto sindical en América Latina, El Colegio de México, 1986; Trabajadores y sindicatos en América Latina, Col. Foro 2000, Secretaría de Educación Pública, 1990; Atacama, desierto de la discordia, El Colegio de México, 1992.

FAX (525) 645-0464--Camino al Ajusco 20, México, D.F. Apartado postal 20-671, 01000 México D.F.

MODERNIZACION ECONOMICA Y SINDICALISMO EN MEXICO¹

Francisco Zapata
El Colegio de México

En México, la discusión acerca del papel que puede asumir el sindicalismo en la implementación de un proyecto económico nuevo, pasa necesariamente por una consideración acerca del corporativismo. En efecto, en la medida que el sindicalismo es parte constitutiva del sistema corporativo, es imposible desconocer que su inserción en el proceso de transformaciones que están teniendo lugar en el país desde por lo menos un quinquenio (1987-1992) está condicionado por la participación que posee en la estructura política del país.

En otras palabras, el sindicalismo mexicano, al definirse como parte de esa estructura, no puede desempeñarse como un actor autónomo, definiendo alternativas o proyectos que se sitúen fuera del marco general fijado por el Estado del cual forma parte. Esta ha sido la característica central de la posición asumida por el sindicalismo en la última década tanto en relación a la política de ajuste puesta en práctica desde el estallido de la crisis de la deuda externa en 1982 hasta 1987 y desde el comienzo de la política de reestructuración económica que se inicia en ese momento y que aún no concluye. Es por ello que sería equivocado analizar la acción sindical en México como si fuera parte de una estrategia autónoma en la que expresa un proyecto situado fuera de las instancias estatales.

Tenemos entonces que asumir esa restricción como una especificidad que permea cualquier consideración sobre el tema de

la relación entre sindicalismo y modernización económica y más aún sobre la pregunta de si el movimiento obrero en México tiene o no un proyecto que pueda hacer frente a las medidas que el Estado ha emprendido para renovar las estructuras productivas del país. Es a partir de esta puesta en guardia inicial que podemos pasar a presentar algunas reflexiones sobre la forma en que el sindicalismo mexicano ha jugado sus cartas en este periodo álgido de la evolución económica de los últimos diez años, propósito de este trabajo.

I. ¿Continuidad o ruptura del corporativismo?

Para evaluar correctamente la relación entre el proyecto modernizador y la acción del sindicalismo organizado, partimos de la hipótesis de que los sindicatos, los empleadores y el Estado continúan interactuando dentro de la estructura corporativa que fue establecida en los años treinta, en particular durante el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940)². Por lo cual, la existencia del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE)³, cuya primera versión fue firmada en diciembre de 1987, no cambia sustantivamente el carácter de la relación que estos actores han tenido entre sí y especialmente con el Estado. Los sindicatos y las cámaras empresariales reconocen su subordinación al Estado y a la vez contribuyen a la implementación de los objetivos por él planteados.

Desde este punto de vista, el PECE no ha dado lugar a cambios importantes en las estructuras de interacción de estos actores. Quizás aquellas instituciones en que estos tres actores actúan

conjuntamente como la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM), el Instituto de Fomento de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o la misma Comisión Evaluadora del PECE revelan mejor la naturaleza de esas relaciones estáticas y el carácter retórico de muchas de las expresiones públicas ahí realizadas.

Un buen ejemplo de esta situación es la negociación acerca de la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) en la que, si bien se formulan muchos propósitos que cambiarían radicalmente la reglamentación de las relaciones laborales, no se llega aún (octubre de 1992) a resultados tangibles, esencialmente por la oposición manifestada abiertamente por la Confederación de Trabajadores de México (CTM) a reformar dicha ley⁴. No obstante, a pesar de dicha oposición, existen algunos dirigentes como Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana que han manifestado opiniones favorables a dicha reforma. En todo caso, la solución a este impasse dependerá de la respuesta más general que se dé a la reestructuración del corporativismo, en el cual la LFT juega un papel central.

Por otro lado, el Estado ha confirmado su apoyo político a las instituciones del aparato de seguridad social a pesar de que tal como se observa en las columnas 6 y 7 del cuadro 1, tanto en el ISSSTE como en el IMSS existe un proceso sostenido de estancamiento de la membresía de esas instituciones, sobre todo después de 1988. Según las estadísticas que desglosan a los asegurados del IMSS por

grandes divisiones de la actividad económica⁵, es sólo en el sector comercio en donde se han verificado incrementos a la población derechohabiente. Esto quiere decir que si bien crece el empleo en el sector informal y en la micro-empresa y que si bien se incorporan más mujeres al mercado de trabajo, esos trabajadores no acceden al sistema de seguridad social quedando desamparados en cuanto a su salud y a sus posibilidades de jubilación. Lo que quiere decir que la capacidad de presión sobre el sistema de distribución de beneficios sociales, llamense éstos vivienda, salud o seguridad social que tenía el sindicalismo mexicano y que aseguraba la posibilidad de intercambiarlos por paz social y moderación salarial está cuestionada radicalmente por las nuevas políticas.

En suma, se trata de crear las condiciones de un nuevo consenso en el que el "trade-off" del período 1940-1970 sea reformulado de tal manera que la eliminación de algunos beneficios que ya no se compadecen con la nueva estrategia económica, no vayan en contra de la lógica con la que se pueden otorgar otros que permitan asegurar que la modernización del aparato productivo. Esto indica que la intervención estatal en las relaciones industriales se está reestructurando para hacerse compatible con la estrategia global de modernización que está teniendo lugar en el país. Puede pensarse que los sindicatos y los empresarios han aceptado renovar sus formas tradicionales de interacción sin proceder a deestabilizar totalmente al sistema a través del ejercicio de medidas de fuerza, y así han sido capaces de mantener funcionando

las estructuras corporativas dentro de sus límites estructurales.

No obstante, es imposible desconocer que algo está pasando en el país, que el corporativismo vigente en México se ha transformado y opera hoy envuelto en la retórica de la concertación. ¿Cual es la implicación de esta transformación?; ¿Implica que hay cambios fundamentales en la lógica central del corporativismo, o solamente que el corporativismo está operando bajo presiones temporales derivadas de las dificultades en mantener operando el "trade-off" y de las restricciones planteadas hasta hace muy poco (1990) por el pago de los intereses de la deuda externa?. Para contestar estas interrogantes debemos mencionar que los problemas derivados de los resultados de las elecciones de 1988 y la aparición de una oposición mucho más vigorosa frente al Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como el debilitamiento del sindicalismo generan una situación particularmente crítica desde el punto de vista de la legitimidad del sistema que está experimentando desafíos internos y externos pero está utilizando todos los mecanismos de que dispone para hacerles frente.

Por consiguiente, la forma que ha tomado la concertación a través de los pactos puestos en marcha desde diciembre de 1987 no implica necesariamente que la estructura corporativa haya cambiado de contenido pero si que han habido cambios en las formas de operar de la misma. Al contrario, el movimiento obrero, las organizaciones empresariales y los representantes gubernamentales interactúan los unos con los otros más eficazmente que nunca porque ahora los desafíos están muy cercanos, presionándolos para resolver los

problemas del país. La inflación, el control salarial, el control de las tasas de interés, los controles de precio son negociados conjuntamente y desde hace ya casi cinco años (1987-1992) reflejan un acuerdo básico entre todos esos actores.

En términos generales, el dispositivo vigente en México muestra que cuando existe una estructura en la que los actores centrales de un sistema corporativo pueden interactuar en base a un consenso no ideológicamente motivado⁶ y que cuando este consenso resulta de una larga historia en la que estos actores han jugado un papel central, entonces la viabilidad de la concertación actual es mucho más alta que cuando esos elementos no están presentes.

Además, la concertación que está teniendo lugar en este contexto no es algo nuevo: estos "actores" han actuado otras "obras" en otras circunstancias, quizás en circunstancias más positivas que las presentes y están por lo tanto en condiciones de enfrentar los desafíos presentes con mucha más madurez que si no tuvieran esa historia compartida. Su capacidad para concurrir en soluciones que sean aceptables para cada uno de ellos tomados por separado se fortalece por la presencia de la estructura corporativa.

Es evidente entonces que la concertación actual es solo un nuevo nombre para el corporativismo que ha estado funcionando en México desde hace 1936. Pero, también es evidente que la existencia del modelo corporativo facilita la construcción del modelo de concertación puesto en marcha desde 1987.

II. Sindicalismo y modernización económica.

La acción sindical, inscrita en el marco descrito, ha tenido como denominador común la aceptación de las políticas que tuvo que poner en práctica el Estado para hacer frente en un primer momento a la crisis de los pagos de la deuda externa (1982-1987) y en un segundo momento (1988-1992) al proyecto de reestructuración de la economía mexicana. Los impactos que la política de ajuste, la apertura comercial, la privatización de las empresas estatales, la liberalización de las normas respecto de la inversión extranjera han tenido en la acción sindical y en la contratación colectiva han sido refuncionalizados y racionalizados como un mal necesario que redundará en beneficios para los trabajadores del país.

Así, la disminución dramática de los salarios reales⁷, tanto de los mínimos como de los contractuales, la compresión de las prestaciones sociales, el redimensionamiento de los contratos colectivos, de los tabuladores de pago y de los tipos de remuneración de las empresas coinciden en demostrar la buena voluntad del liderazgo sindical nacional en relación a las iniciativas gubernamentales de la última década. En lo único que parecieron no ceder fue en los niveles de empleo que, a juzgar por la evolución del número de asegurados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE) y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), experimentaron aumentos nominales durante la década en cuestión (veáse cuadro 1).

También, la ofensiva anti-sindical que ha tenido lugar a

partir del debilitamiento inducido por el deterioro salarial, y que se ha implementado a través de la estrategia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que (a) cerró los espacios de negociación y reprimió conflictos huelguísticos como los de la empresa Modelo, o de la Ford-Cuautitlán, (b) instruyó a las Juntas Federales y Locales de Conciliación y Arbitraje para impedir el logro de posiciones por parte de los sindicatos en las negociaciones colectivas⁸, han dado lugar a cambios en el marco institucional que se han manifestado a través de la disminución del peso de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, del nuevo papel de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, de las políticas de la Dirección Nacional del Registro de Asociaciones de la STPS, y del relegamiento de las centrales sindicales dentro del PRI.

Igualmente, la reducción del gasto social centrado en la reducción del gasto público, impactó seriamente los presupuestos del IMSS, la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el ISSSTE y otros organismos que adoptaron una estrategia de sobrevivencia institucional, lo cual limitó considerablemente su capacidad para enfrentar las necesidades básicas de una población en constante crecimiento (+3.3% de la población urbana entre 1981 y 1987) y a satisfacer las demandas educacionales, sanitarias y de grupos específicos de la población.

Finalmente, la transformación de los mercados de trabajo internos modificó las prácticas empresariales en materia de movilidad horizontal (permutas, traslados), movilidad vertical

Cuadro 1
 México. Indicadores de la situación económica y laboral.
 (1980-1990)

AÑO	Infl. dic-dic	Var.% PIB	Var.% PIB habit	Salar. Mínimo real	Salar. Medio Real	Var % ISSSTE Aseg.	Var % IMSS Aseg.
1980	29.8	8.3	4.9	-14.5	--	--	--
1981	28.7	7.9	5.5	- 6.3	--	6.7	11.0
1982	98.8	-0.6	-3.0	- 9.0	0.9	3.4	-1.1
1983	80.8	-4.2	-6.5	-17.4	-21.0	4.2	-0.2
1984	59.2	3.6	1.2	- 5.6	- 7.3	10.8	7.9
1985	63.7	2.6	0.2	-1.7	1.5	1.6	6.9
1986	105.7	-3.8	-5.9	-8.7	- 5.8	7.9	-2.2
1987	159.2	1.8	-0.5	-5.2	- 0.3	4.5	9.3
1988	51.7	1.4	-0.8	-11.9	0.6	0.1	1.6
1989	19.7	3.1	0.9	- 6.3	4.9	0.1	2.5
1990	29.9	3.9	1.6	-10.4	3.6	0.2	--

Fuente: Comisión Económica para América Latina, **Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe 1991**, Santiago, 1991. Carlos Salinas de Gortari, **Primer Informe de Gobierno 1989**, Anexo, Poder Ejecutivo Federal, 1989.

contratos colectivos de trabajo que implica la eliminación de cláusulas que bloqueen la innovación y la introducción esquemas de promoción en el trabajo a través del mérito, han provocado tensiones entre la base y los dirigentes sindicales en la siderurgia, la empresa telefónica, el transporte aéreo, el transporte urbano. Dichas tensiones, sumadas a la ofensiva anti-sindical del gobierno y a las demás medidas mencionadas anteriormente, han derivado en pérdidas de posiciones electorales del sector sindical del partido oficial y en una relativa deslegitimación del liderazgo oficial.

Es decir, el liderazgo sindical ha estado dispuesto a sacrificar empleos⁹ y a aceptar drásticas modificaciones a los contratos colectivos y reestructuraciones de las empresas sin tomar en consideración que ello ha redundado en pérdidas de los márgenes de negociación de los sindicatos. Existe también en algunas empresas del sector automotriz como la Ford Motor Company en donde la competencia extranjera ha forzado a la empresa a presionar a los trabajadores para que acepten deducciones salariales, y perder prestaciones sociales para poder mantener la posición competitiva de las empresas en el futuro¹⁰.

No obstante, el impacto más significativo se sitúa en el alineamiento radical del liderazgo sindical con la política gubernamental de control salarial y de compresión a las prestaciones sociales. Solo la pasividad observada por el Congreso del Trabajo en las negociaciones del PECE explica que la política de concertación haya experimentado el éxito que ha tenido desde

(ascensos, escalafón), recortes de personal, subcontratación de tareas, flexibilización del empleo, unilateralidad de la contratación, recuperación de puestos de confianza, disminución de niveles jerárquicos, cambios en los tabuladores salariales, etc...

Los aspectos anteriores delimitan un cuadro en el que lo sobresaliente es el cuestionamiento de la forma en que el marco institucional del sistema de relaciones laborales ha funcionado hasta la fecha y la aparente aceptación por parte del movimiento obrero del mismo. Varios procesos, sobrepuestos los unos a los otros y ligados a los aspectos señalados se han desarrollado en paralelo: por un lado, los problemas de reducción del gasto público y del gasto social cuestionan la capacidad del Estado para cumplir con su parte en el pacto político que ha presidido la alianza entre obreros, campesinos y clases medias desde la época de la revolución a la fecha; es cada vez más difícil encontrar financiamientos para cubrir los subsidios al precio de los alimentos básicos, al transporte público, a la educación y a la salud. Sin embargo, ese cuestionamiento del marco institucional no ha acarreado un distanciamiento radical de parte del actor sindical que, al contrario, se ha convertido en uno de los pilares de la instancia creada para concertar la transición en marcha, es decir el PECE.

Es a partir de este contexto que podemos interrogarnos acerca del papel que han jugado los sindicatos en esta fase de la implementación del proyecto modernizador.

III. ¿Tiene el sindicalismo un proyecto económico?

La modernización tecnológica, los despidos, la revisión de los

Cuadro 2

La actividad huelguística en México entre 1981 y 1990

Año	Nº	Huelguistas	Días perdidos por huelgas	Días perdidos por huelguista	Duración por huelga	Huelguistas por huelga
1981	1066	31.500	---	--	--	29
1982	1925	25.200	1.363.200	54	708	13
1983	216	45.900	775.100	16	3.588	212
1984	427	65.400	238.000	3	557	153
1985	159	57.400	333.600	6	2.098	361
1986	312	82.700	1.836.800	22	5.887	265
1987	174	201.700	2.677.100	13	15.385	1159
1988	132	117.800	2.097.500	17	15.890	892
1989	118	58.100	876.900	15	7.431	492
1990	149	49.300	1.746.900	35	11.724	330

Fuente: Oficina Internacional de Trabajo (OIT), **Anuario Internacional de Estadísticas del Trabajo**, Ginebra, 1987-1990.

Nota: Los promedios respectivos son los siguientes, incluyendo el período 1981-1990 en su totalidad: nº de huelgas (frecuencia): 467; huelguistas (volumen): 73.500; Días perdidos por huelgas (duración total): 1.327.233; días perdidos por huelguista: 20; días perdidos por huelga (duración); 7.029; nº de huelguistas por huelga (tamayño): 434.

1987 hasta el presente.

Los datos del cuadro 2, referidos a la actividad huelguística entre 1981 y 1990, muestran claramente cómo disminuye la frecuencia, el número de huelguistas y la duración de las huelgas. Después de haber seguido una trayectoria ascendente en la que el conflicto había tendido a mantenerse endémico, ella pasa a una fase de franca disminución. Es importante anotar también, a la luz de los datos de dicho cuadro, que el conflicto tendió a localizarse en los establecimientos más grandes, lo que resulta de la observación del número de huelguistas por huelga que tiende a aumentara pesar de que disminuye la frecuencia de las huelgas. Lo mismo se refleja en la duración que tiende a incrementarse y refleja la capacidad que tienen los sindicatos más grandes para llevar a cabo huelgas prolongadas.

Asimismo, la impasible actitud observada por dicho liderazgo con relación a las decisiones muy discutibles de la STPS (a las que aludimos antes) han llevado a la intemperie a muchos trabajadores, como fue por ejemplo el caso de la Ford-Cuautitlán en 1990-91 y de la Cervecería Modelo en 1989¹¹.

Puede suponerse que el control sindical sobre diversos aspectos de la vida de trabajo se encuentra en una encrucijada. En efecto, el deterioro que hemos señalado en dicho control no se refleja solo en la incapacidad para hacer frente a la disminución de los salarios reales o a la escasa diferencia que guardan éstos con respecto a los salarios contractuales (derivados de la negociación colectiva, véase cuadro 1) sino del debilitamiento de

lo que había sido su fortaleza, el acceso a las instancias estatales de decisión, y por otra parte, la capacidad que tenía de regular la vida del taller dentro de las fábricas, a partir de su control del mercado de trabajo interno y externo.

Hoy día, el aumento de los despidos, las nuevas modalidades de subcontratación de las tareas, la flexibilización de las condiciones de empleo, la imposición de niveles salariales basados en el incremento de la productividad, el uso indiscriminado de horas extraordinarias, el desgaste derivado de accidentes y de enfermedades ocupacionales que induce incrementos en la rotación en la fuerza de trabajo y, por último, la intervención abierta de las autoridades laborales en favor del proyecto reestructurador y la indefensión en que se encuentran los trabajadores dada la subordinación de sus organizaciones a dicho proyecto, revela el verdadero sentido que posee dicho proyecto para el sindicalismo en México.

Además, es importante reconocer que no ha habido intentos por favorecer la creación de instancias de concertación directa entre empresarios y obreros a través de una negociación colectiva que pudiera redundar en un fortalecimiento de la capacidad negociadora de sindicatos no adscritos a la línea oficial y al nivel de cada establecimiento productivo. Esto refuerza nuestro argumento de que a pesar de los cambios formales en la operación del corporativismo no existen cambios sustantivos que vayan en el sentido de la definición de un actor sindical autónomo, ni al nivel del establecimiento industrial¹² ni tampoco al nivel sectorial o

nacional.

Las dificultades que han tenido organizaciones como la Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios (FESEBES) o la Confederación Obrera Revolucionaria (COR) para enfrentarse a la pasividad con la que el sindicalismo oficial hacía frente a las iniciativas gubernamentales son claro ejemplo de ello¹³. A pesar de contar con el apoyo, al menos retórico de altas autoridades del Estado, la FESEBES no conseguía obtener personalidad jurídica¹⁴ y la COR debía arriar sus banderas en el conflicto que tuvo lugar en la planta Cuautitlán de la empresa Ford. Aquí, después de un prolongado enfrentamiento que la confrontó a la CTM por la titularidad del contrato colectivo de dicha planta, la COR tuvo que echar marcha atrás¹⁵. Esta situación no hacía sino confirmar lo ocurrido en los primeros años del sexenio del presidente De La Madrid en que también se había ensayado buscar una nueva base de sustentación, no centrada en la CTM sino en la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), para el sindicalismo oficialista,

Por lo que la concertación sigue localizada al más alto nivel y depende de la presencia del actor estatal, el cual tampoco está dispuesto a abandonar esa instancia. Si bien la retórica gubernamental tiende a hablar de la necesidad de llevar la concertación a niveles descentralizados o sectorializados o de renovar el pacto histórico entre Estado y trabajadores, es obvio que ella no ha llegado a las empresas ni a organizaciones situadas fuera del ámbito directo del control de la STPS.

Al contrario, en algunos casos, como es el de la industria maquiladora ubicada en la frontera norte de México, la ausencia de los trabajadores de las instancias de concertación es total, ya que los sindicatos controlados por la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) (en el caso de las maquiladoras de Tijuana) han establecido una política que consiste en aceptar las condiciones fijadas por las empresas y el gobierno a cambio de prerogativas al aparato sindical¹⁶, sin que los trabajadores se enteren de sus condiciones de contratación ni de la existencia de un sindicato en la empresa en la que trabajan. La ausencia absoluta de los trabajadores en la vida sindical y las prácticas sindicales mencionadas conducen a una situación inédita: el **sindicalismo sin trabajadores**, que pareciera ser el modelo específico que se quiere implantar en el nuevo modelo de desarrollo. Sin embargo, es claro que su generalización al resto de los sectores de la producción implicaría un rompimiento definitivo del pacto corporativo, lo cual parece no estar en la mente de los dirigentes políticos del PRI.

Otro ejemplo que comparte algunas de las características anteriores es el **sindicalismo blanco**, identificado con la realidad laboral de la ciudad de Monterrey en donde, desde hace varias décadas, han existido formas de representación de los trabajadores muy ligadas a las autoridades laborales de las empresas regiomontanas¹⁷. Este es el caso de empresas como Hojalata y Lámina (HYLSA), en donde la estrecha relación entre sindicato y empresa impide hablar de una representación autónoma de los trabajadores. No obstante, este tipo de sindicalismo está vinculado a estructuras

de cooptación mucho más refinadas que las del otro tipo. Dicha cooptación se desarrolla a través de mecanismos de vinculación personal a la vida de la empresa, como pueden ser premios, ascensos ligados a percepciones de adhesión diferenciada, colaboración y compromiso con respecto a la normativa interna de los establecimientos. Aquí también se produce una identidad entre trabajador y empresa que no pasa por una definición del sindicalismo como un actor independiente de la autoridad del empresario, el que asume dicha organización como parte de su propia responsabilidad.

Finalmente, el sindicalismo burocrático, centrado en la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), tampoco ha jugado un papel reactivo a las políticas gubernamentales¹⁸. Si bien la crisis no afectó al empleo público con la misma fuerza con la que impactó al empleo en el sector privado, y que ello fue precisamente la razón por la cual los trabajadores del Estado han podido sobrellevarla con más facilidad, los niveles salariales se comprimieron igual o peor, por lo que al menos habrían podido existir reacciones negativas ante esa situación. Sin embargo, la paz social ha imperado como en el resto de los sectores sindicalizados del país. Además, este sector fue único que experimentó un incremento de sus afiliados que pasaron de un millón a dos millones de sindicalizados entre 1975 y 1990, aumento que se explica fundamentalmente por la expansión del número de maestros pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que representa más del 40% de la afiliación de

la FSTSE. Por otro lado, el empleo de las empresas paraestatales experimentó un aumento de casi 50% entre 1977 y 1987, lo cual debe haber repercutido sobre la afiliación de los sindicatos nacionales de industria¹⁹. No obstante la evolución anterior, es posible pensar que como resultado de las políticas de privatización de las empresas estatales y de las medidas de racionalización del sector público que se intensificaron después de la toma de posesión del presidente Salinas en 1988, en años recientes la tendencia señalada haya tendido a revertirse.

IV. Concertación, sindicalismo y reforma política.

No obstante, la visión anterior debe ser matizada. Debemos tener presente que la política de la concertación social, en la que el sindicalismo oficial ha jugado un papel de garante, aún pasivo, ha tenido efectivamente éxito en frenar la inflación, estabilizar los precios de los servicios públicos, mantener controlado el tipo de cambio y crear expectativas favorables acerca de la situación económica futura del país. La incertidumbre que dominaba el clima económico a fines de 1987 y el impacto sobre la legitimidad política de las elecciones presidenciales de 1988 han sido reemplazados por un clima de relativa certeza en materia económica y de restauración en materia electoral.

La importancia del mecanismo del PECE, concebido como un instrumento de concertación social, y su aparente éxito lo convierte, en el contexto latinoamericano, en la única experiencia en que la estabilización económica ha seguido al esfuerzo de concertar a los principales actores corporativos. Una evaluación

comparativa de estos pactos para los casos de Argentina, Brasil y México demuestra que su éxito en México está directamente vinculado a la existencia de la estructura corporativa que preexistía a su implementación. En los dos otros países, en el período 1986-1991, varias formas de pacto han sido puestos en marcha pero todos han fracasado dada la ausencia en esos países de una coincidencia sustantiva entre los intereses del Estado, de los empresarios y de los trabajadores sindicalizados.

Además, hay que subrayar que en México no todo depende de la firma de los pactos, en presencia de todos los actores involucrados. Existe también el esfuerzo constante del Estado y del movimiento obrero por reiterar, frecuentemente y en forma retórica, el papel central de los trabajadores sindicalizados en la alianza política que sostiene al sistema, y su peso en la determinación de los límites dentro de los cuales debe desenvolverse la actividad reivindicativa en el país.

Un buen indicador de la capacidad que ha tenido el Estado para consolidar esta alianza ha sido la imposibilidad en que se ha visto la oposición de reclutar apoyo entre los trabajadores sindicalizados. Estos no han modificado sustantivamente sus pautas de adhesión política²⁰ y el PRI continúa manteniendo un monopolio virtual sobre la visión ideológica de los trabajadores, más por la ausencia de una alternativa visible y viable que por la validez que le asignen al proyecto oficial.

Además, los logros obtenidos por los pactos se presentan públicamente como un éxito de los trabajadores y no como el

resultado de una política estatal. Así, las confederaciones obreras aparecen como representantes eficaces de los intereses de los trabajadores mientras el Estado, en aras de mantener su alianza política puede fácilmente pagar el precio de no reivindicar la paternidad del éxito de la concertación.

¿Cómo sintetizar los resultados de la política de concertación y cómo reforzar nuestro argumento de que ella no ha sido sino una nueva forma de presentar el corporativismo vigente desde hace por lo menos seis décadas en México? ¿Y, cómo demostrar que la forma en que el sindicalismo se ha incorporado al proceso de concertación es un aspecto central de la reforma política en marcha en el país?

Es claro que es en términos económicos que el PECE revela su eficacia central. La inflación decreció al 30% anual promedio en los últimos tres años (1988-1991) de un promedio cercano al 100 % en los tres años anteriores (1985-1987). El tipo de cambio del peso con respecto al dólar se estabilizó. Solo las tasas de interés tendieron a mantenerse altas pero en 1991 comenzaron a experimentar una reducción considerable: en efecto, de tasas promedio del 50% anual en 1988-1989 se pasa a tasas promedio del 20% anual en 1991. Quizás, el único punto negro tiene que ver con la imposibilidad de frenar el ímpetu especulativo que convierte a las inversiones bursátiles o financieras en las más rentables, muy por encima de la actividad productiva.

Por otra parte, la concertación social ha permitido también poner en marcha un ambicioso programa de reestructuración económica orientado hacia las exportaciones no tradicionales, a la

privatización de las empresas estatales (en la siderurgia, la banca, los teléfonos, etc...), y hacia la creación de atractivos al capital extranjero. En este contexto, puede observarse que la entrada de México al GATT (General Agreement on Trade and Tariffs) en 1986 no fue tan traumática como muchos lo habían pensado. Aparentemente, la industria mexicana consiguió encontrar algunos nichos para ubicar sus exportaciones y reformar sus modos de organizar la producción en formas que son competitivas con las vigentes en el resto del mundo.

No obstante, es difícil preveer lo que ocurriría si algunos de los prerequisites del pacto no hubieran sido operativos. Por ejemplo, si las demandas de aumentos salariales excedieran la capacidad del Estado para concederlas (como ha sido el caso con los profesores del sistema estatal de educación en abril-mayo de 1989 o con varias empresas privadas), o si hubieran presiones fuertes en los sectores exportadores para mejorar las remuneraciones de sus trabajadores, sería inevitable observar presiones inflacionarias. Además, en cada coyuntura electoral, el apoyo de los trabajadores a los candidatos del denominado sector "obrero" es cada vez más reducido, al punto que muchos líderes sindicales, sobre todo al nivel estatal, han perdido su capacidad paralela de líderes políticos en los congresos estatales. Por lo cual, la concertación podría experimentar turbulencias si los actores localizados en lugares específicos de la estructura política y económica no pudieran asegurar la fuerza que dicen representar, colocándose así en una situación de vulnerabilidad.

Lo mismo podría ocurrir si presiones derivadas del resquebrajamiento de la legitimidad política continuaran profundizando la brecha entre la sociedad civil y el Estado. Si bien los resultados de las elecciones parlamentarias de agosto de 1991 dieron un triunfo aparente al PRI, la insatisfacción mostrada por los partidos de la oposición²¹ revela que las tensiones que aparecieron en 1988 todavía están presentes. En la medida que los resultados electorales oficiales difieran del conteo de los votos en las casillas, tal como fue certificado por los representantes de los partidos políticos, presentes en ellas, será imposible generar confianza y legitimidad en la ciudadanía respecto de la forma en que se genera el poder. Por lo que, si bien la concertación es capaz de asegurar una tranquilidad en la economía y en estabilizar las expectativas empresariales, está todavía pendiente un gran esfuerzo por realizar los mismos objetivos en el plano de la política.

Lo cual no es favorecido por la presencia de conflictos internos dentro del aparato político del propio PRI en los que se enfrentan los renovadores, apoyados por el presidente de la República y por el aparato del partido en contra de los denominados "dinosaurios", partidarios de mantener el viejo orden e identificados sobre todo con el liderazgo del sindicalismo oficial²². En el período 1988-1991, estos enfrentamientos, que se realizan en forma solapada y encubierta, revelan las tensiones que experimenta la estrategia de reforma política. Dicha reforma no parece tan fácil como el grupo gobernante, encabezado por el

presidente, lo pensó. Solo si los renovadores consiguen pactar dicha reforma con la oposición en forma durable y en especial con el Partido Acción Nacional (PAN) y encontrar así un consenso que aisle tanto a los "dinosaurios" como a los intransigentes de la oposición podrá encontrarse una salida a los dilemas actuales en los que solo una parte de la estrategia modernizadora, la referida a la economía, ha encontrado una posibilidad de plasmarse en resultados concretos.

A la luz de lo dicho, el sistema electoral parece ser más importante en la operación del corporativismo y en su reforma de lo que se podría pensar en términos abstractos. En efecto, a pesar de los controles que el corporativismo ejerce sobre el sindicalismo, queda el hecho, fundamental, de que hay trabajadores y organizaciones en la base de dicha estructura. Por lo que, si aparecen contradicciones entre el control que ejercen las estructuras corporativas sobre los individuos y el comportamiento de éstos en las elecciones, es posible que el corporativismo empiece a experimentar serias tensiones en sus posibilidades de sobrevivencia. Esta será la tensión que experimentará la concertación social en el futuro porque hasta el momento está limitada a acuerdos entre cúpulas localizadas dentro de la estructura corporativa. Sus vínculos con los trabajadores y con los campesinos de carne y hueso, así como con burócratas y clases medias, y también con los empresarios, no son tan sólidas ni tan institucionalizadas como el liderazgo del aparato corporativo pudiera desearlo, al menos si tomamos el comportamiento electoral

de esos grupos como un reflejo de sus posiciones en relación con el corporativismo.

Conclusion

A pesar de la larga experiencia que ha tenido México en la implementación de estrategias de concertación social, ello no permite concluir en forma perentoria. Al contrario, uno debe ser cuidadoso en no proyectar el éxito aparente que se observa actualmente con la viabilidad de la concertación en el futuro. No obstante, al mismo tiempo que debemos cuidarnos de un pesimismo excesivo, uno debe también subrayar que la experiencia mexicana del periodo 1987-1991 ha sido, de lejos, la más exitosa en términos comparativos, en el contexto latinoamericano.

Por un lado, el movimiento obrero ha podido gozar de los diversos "trade offs" que mencionamos en este trabajo: mantenimiento del aparato de seguridad social, educación pública, política de prestaciones sociales. Los empresarios han sido suficientemente flexibles como para no presionar en favor de incrementos de precios que se situen fuera de lo tolerado por las autoridades gubernamentales. Se han beneficiado también de una serie de ventajas otorgadas al sector exportador. Podemos constatar entonces que la vigencia del pacto ha permitido mantener el corporativismo en su esencia.

Dónde nubarrones se hacen presentes, tal como lo venimos de señalar, es en el ámbito electoral, en dónde las tensiones internas en el aparato del PRI, derivadas del costo que debería pagar el sector obrero si esas reformas se cumplieren, neutralizan las

iniciativas presidenciales para reformar el sistema político. Como el mantenimiento del aparato partidario representa un aspecto central de la operación del corporativismo en su conjunto, será difícil esperar cambios bruscos y lo que se verán serán más bien iniciativas que tiendan a modificar al aparato en forma progresiva. De manera que si se mantiene la estabilidad económica por un tiempo suficientemente prolongado será posible hilvanar la renovación del sistema político y producir así su modernización, si es que ese es el propósito real de quienes lleva el bastón del mando en México.

Podemos decir que la experiencia de México muestra que cuando el corporativismo ha estado vigente por un período suficientemente largo y cuando ha demostrado su utilidad para los sectores que lo componen, es posible utilizarlo en tiempos de crisis para lograr fines diferentes para los cuales fue originalmente creado. Así, un prerequisite para la operación exitosa de la concertación social en la situación actual es la existencia de la estructura corporativa en donde un largo proceso de aprendizaje ha facilitado el conocimiento mutuo entre los actores políticos que constituyen el sistema de dominación en México. Sin embargo, la pregunta que surge hoy es: ¿hasta qué punto esa estructura es representativa de lo que desean los ciudadanos, dada la necesidad en que el corporativismo se ve de deformar sistemáticamente los resultados electorales, que serían los que, en última instancia, podrían dar fe de lo que ellos realmente desean?.

NOTAS

1. Para ser presentado en el Coloquio **Transformaciones sociales y acciones colectivas: América Latina en el contexto internacional de los noventa. Antecedentes, balances y perspectivas**, que tendrá lugar en El Colegio de México entre los días 11 y 13 de noviembre de 1992, bajo los auspicios del Centro de Estudios Sociológicos.

2. Véase Francisco Zapata, "Los trabajadores y la política en México", en Centro de Estudios Sociológicos (comp.), **México en el umbral del milenio**, El Colegio de México, 1990.

3. El texto del primer pacto aparece en Banco Nacional de México (BANAMEX), **Examen de la situación económica de México**, enero de 1988. Comentarios analíticos aparecen en "Ni pacto, ni solidaridad", **El Cotidiano**, n° 21, enero-febrero 1988; José Rangel, "La inflación como recuperación de la ganancia", **El Cotidiano**, n° 23, mayo-junio de 1988; sus implicaciones para la relación entre sindicalismo y corporativismo son revisadas por Enrique De La Garza en "Para-estatales y corporativismo", **El Cotidiano**, n° 28, marzo-abril de 1989.

4. Véase declaraciones de Fidel Velásquez del 26 de diciembre de 1991 y del 6 de enero de 1992 en diversos órganos de prensa: **La Jornada**, 6 de enero de 1992: "No variarán el artículo 123 ni la LFT: Fidel Velásquez". Entre otras cosas, el líder declaró: "Nosotros hemos dicho con toda energía que no aceptamos en forma alguna modificación a la Ley Federal porque esto significaría la pérdida de la paz social"... "No le sucederán cambios como al 130 y al 27. Porque no es conveniente por ahora. La ley no impide que las empresas inviertan o que vengan otros a hacerlo porque la Ley Federal del Trabajo y el artículo 123 dan ocasiona inversiones".

5. Véase Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática (INEGI), **Cuadernos de Información Oportuna**, junio de 1992.

6. Es decir, cuando no se corresponde con la oposición capital-trabajo que orienta el comportamiento de los actores sociales en otros contextos nacionales como puede ser el caso de Bolivia, Chile o Perú.

7. Una síntesis de los indicadores económicos y laborales durante el sexenio del presidente Miguel De la Madrid es sugerente del deterioro que aceptó el aparato sindical [las cifras corresponden a promedios del sexenio 1983-1988 de los valores presentados en los cuadros 1 y 2]: inflación: 86.7%; variación porcentual del PIB: 0.23%; variación porcentual del PIB per capita: -2.04%; variación porcentual del salario mínimo real: -8.4%; variación porcentual del salario medio real: -5.3%; n° de huelgas: 236; n° de huelguistas: 95.150; días perdidos por huelgas: 1.326.350; variación porcentual de los asegurados al ISSSTE: 4.8%; variación porcentual de los asegurados al IMSS: 3.9%.

8. Veáse, Carlos Fernández del Real, "Todo dentro de la ley", *La Jornada*, julio 1991; Juan Ortega Arenas, "Feudalismo jurídico: freno a la apertura", *Excelsior*, 28 de abril de 1989; Silvestre Fernández Barajas, "Nueva legislación laboral como botín de Estado, patronos y líderes?", *Excelsior*, viernes 28 de abril de 1989. También, Arturo Alcalde, "Participating in productivity", *Business Mexico*, septiembre de 1991 y Francisco Hernández Juárez, "Making changes...", *Business Mexico*, septiembre 1991.

9. Como son los casos de Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, declarada en quiebra en mayo de 1986 con el consiguiente despido de 15 mil obreros (sin que el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos se haya inmutado); según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, los despidos en la siderurgia suman 49.663 (incluyendo 10.128 en Altos Hornos de México y Siderúrgica Lázaro Cárdenas- Las Truchas); en la Secretaría de Energía, Minas e Industria Para-Estatal (SEMIP), 33.646, en Pemex, 8.393 (a los que habría que sumar los 35 mil anunciados en la asamblea del SNTPRM celebrada a principios de enero de 1992), en la Comisión Federal de Electricidad, 2.039. (veáse *La Jornada*, 26 de diciembre de 1991, artículo de Sara Lovera).

10. Como fue el caso en la puesta en marcha de la planta de la Ford Motor Company en Hermosillo (Sonora) en donde los trabajadores firmaron un contrato colectivo muy distinto al imperante en las demás plantas de dicha empresa. Veáse, Harley Shaiken y Stephen Herzenberg, *Automation and global production*, Center for US-Mexican Studies, Universidad de California, San Diego, Monograph Series n°26, 1987; también, Harley Shaiken, "Alta tecnología en México: el caso de la producción de los motores automotrices", en Jorge Carrillo (comp.), *La nueva era de la industria automotriz en México*, El Colegio de la Frontera Norte, 1990.

11. Sobre el conflicto de la Ford, veáse Manuel Fuentes, "El caso Ford: ¿modelo de relación laboral en el futuro?", *Revista Justicia y Paz*, año VI, julio-septiembre 1991; Arturo Alcalde, "La realidad de nuestro derecho laboral: una constante violación a los derechos humanos", *Revista Justicia y Paz*, op. cit.; Arnulfo Arteaga, "Ford: un largo y sinuoso conflicto", en G. Bensunsan y S. León, *Negociación y conflicto laboral en México*, Friedrich Ebert Stiftung y FLACSO-sede México, 1990. Sobre el caso de la Cervecería Modelo, veáse, Centro de Estudios Sindicales, "Cervecería Modelo, prototipo de sacrificio político", Instituto de Propositiones Estratégicas, México, D.F. año I, n°11, abril de 1990; G. Bensunsan y S. León, "El conflicto laboral en el caso de la Cervecería Modelo", en G. Bensunsan y S. León, op. cit.

12. Quizás el único caso en que el sindicalismo adopta esta forma sea el de algunas empresas del sector automotriz como el de Volkswagen de México o de Nissan Mexicana en donde por razones muy particulares los trabajadores lograron mantener organizaciones que defienden un proyecto autónomo, sin vinculaciones ni con el

sindicalismo oficial ni con las formas de sindicalismo degradado como son el del **sindicalismo sin trabajadores** de la maquila o el **sindicalismo blanco** de Monterrey. Véase al respecto, Yolanda Montiel, **Proceso de trabajo, acción sindical y nuevas tecnologías en Volkswagen de México**, Centro de Investigaciones Superiores en Antropología Social (CIESAS), 1991.

13. Véase Rosa Albina Garabito, "La COR: recambio fallido", **Trabajo**, invierno-primavera 1991, n° 5-6.

14. Lo logró apenas en septiembre de 1992, después de la exitosa intervención de su secretario general, Hernández Juárez, en la resolución del conflicto que tuvo lugar en la planta poblana de Volkswagen de México en julio-agosto del mismo año.

15. Rosa Albina Garabito en el artículo citado dice: "En otras circunstancias el proyecto de la COR hubiese sido fácilmente asimilable para el gobierno como una alternativa de recomposición al interior del Congreso del Trabajo. Para desgracia de la COR, su emplazamiento en los hechos a la hegemonía de la CTM, con las consecuentes implicaciones sobre los equilibrios políticos al interior del partido de Estado, la proximidad de la XIV Asamblea del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el fortalecimiento--o al menos el empate--del proyecto de organización sectorial de Fidel Velásquez frente al de ciudadanos de Luis Colosio--abrazo de Mérida--un campo social fértil para iniciativas como la del FSU, la acumulación de contradicciones al interior del Congreso del Trabajo, para colmo, la rebeldía de José de Jesús Pérez frente a iniciativas como la reprivatización de la banca, hicieron fracasar su proyecto de recomposición sindical".

16. Véase los trabajos de Cirila Quintero Ramirez acerca del sindicalismo en las ciudades de Tijuana y de Matamoros en donde se documentan ampliamente las prácticas de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) y de la CTM a este respecto: **La sindicalización en los maquiladores tijuanaenses**, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, México, 1990; también, "Conflictos laborales en Matamoros: 1970-1990, el caso de las maquiladoras", manuscrito, 1991.

17. Véase Menno Vellinga, **Industrialización, burguesía y clase obrera en México. El caso de Monterrey**, Siglo XXI Editores, 1979.

18. Véase, Francisco Zapata, **Relaciones laborales y negociación colectiva en el sector público mexicano**, Documentos de Trabajo del CES, El Colegio de México, 1987 y "El empleo en el Estado en México", en Adriana Marshall (comp.), **El empleo público frente a la crisis. Estudios sobre América Latina**, Instituto Internacional de Estudios Laborales, Ginebra, 1990.

19. Veáse, Francisco Zapata, "El empleo estatal en México", en Adriana Marshall (comp.), *El empleo público frente a la crisis. Estudios sobre América Latina*, Instituto Internacional de Estudios Laborales, Ginebra, 1990.

20. A pesar de que en algunas concentraciones obreras, en el Estado de México (Toluca), en la ciudad de Querétaro, en el complejo siderúrgico-minero de Lázaro Cárdenas (Michoacán), entre otros lugares, el voto obrero haya favorecido a Cuauhtémoc Cárdenas en las elecciones presidenciales de 1988.

21. Tanto el Partido de Acción Nacional (PAN) como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) plantearon públicamente que esas elecciones fueron las más fraudulentas de la historia de México.

22. Dichos conflictos se han expresado en la incapacidad del aparato sindical para conseguir elegir diputados al Parlamento en la misma proporción que en el pasado; también se expresa en tensiones entre la dirección nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y sus federaciones estatales, más cercanas a la política local y regional, lo cual obliga a los dirigentes nacionales a imponer su parecer sobre ellas. Por ejemplo, los candidatos pertenecientes a la CTM en el estado de Tamaulipas no salieron elegidos en agosto de 1991. En suma, el peso de los "sectores" del PRI ha disminuido en favor de nuevas individualidades que se alinean directamente con el proyecto presidencial.

SEMINARIO

**TRANSFORMACIONES SOCIALES Y ACCIONES COLECTIVAS
AL FINALIZAR EL SIGLO XX: BALANCES Y PERSPECTIVAS**

**La democracia, ¿Algo nada más que político?
Nelson Minello**

**Seminario organizado por el Centro de Estudios Sociológicos de
El Colegio de México, del 11 al 13 de noviembre de 1992**

LA DEMOCRACIA, ¿ALGO NADA MÁS QUE POLÍTICO?

Nelson Minello
El Colegio de México¹

I. INTRODUCCIÓN

Democracia es un término polisémico y la interrogación sobre su significado es recurrente, aun para negarla. Como es sabido, los partidarios del Estado liberal veían a la democracia con malos ojos, aunque propiciaban un esquema de partidos en competencia y la existencia de libertades y derechos (Macpherson, 1968); a partir de las primeras décadas del siglo XX el pensamiento dominante occidental ensalzó la democracia oponiéndola a los fascismos pero también al comunismo; durante mucho tiempo la mayoría de la izquierda desdeñó la democracia, calificándola con adjetivos excluyentes, burguesa, vacía, formal y oponiéndola a la democracia social (no le faltaba razón, pero el error era la oposición entre ambas formas); durante y después de los regímenes militares en el Cono Sur la discusión sobre la democracia política volvió a tomar impulso. Ahora, cuando se plantea un cambio radical en el modelo de Estado -de estado de bienestar, interventor, desarrollista,

¹ Esta ponencia ha sido escrita para el Seminario "Transformaciones sociales y acciones colectivas. América Latina en el contexto internacional de los noventa", El Colegio de México-Centro de Estudios Sociológicos, 11 al 13 de noviembre de 1992. VERSIÓN PRELIMINAR. SE RUEGA NO CITAR.

industrializador, protector de los grupos desfavorecidos pero a la vez con problemas de corporativismo, burocratización y corrupción, a un estado "adelgazado", no interventor, que deja paso a las fuerzas que quiérense mágicas del mercado, a un Estado de individuos privados- continúa hablándose de democracia.

Hay toda una corriente que actualmente redefine la democracia señalando la centralidad de lo político, y le analiza como un regimen político. Tomo al azar un trabajo en este sentido. Garretón (1991) sostiene que

cualquier análisis de los problemas y perspectivas de la democracia en América Latina, debe partir de una definición del concepto que, además de eliminar las ambigüedades, permita comprender el sentido de los diversos actores históricos le otorgan. *Esto obliga a definir la democracia como un tipo de régimen político y no como un tipo de sociedad.* Cuando hablamos de régimen político nos referimos a las mediaciones institucionales entre Estado y sociedad, al modo como esa sociedad resuelve el problema de su gobierno y el de las relaciones de la gente con el Estado, es decir, el problema de la ciudadanía. La democracia entonces [...] tampoco resuelve todos los problemas del sistema político, que abarca elementos tales como el Estado mismo, los actores y la cultura política (cursivas mías, NM).

En otras palabras, una buena parte de los científicos sociales latinoamericanos tienen una concepción, desde mi punto de vista, reducida del fenómeno democrático y, al mismo tiempo, de la ciudadanía.

En este trabajo quiero compartir algunas preocupaciones acerca de la necesidad (o no) de ampliar esa visión de la democracia, para

entender cabalmente lo que sucede actualmente en la región.² Veamos primero algunos datos sobre empleo y niveles de vida en la región durante la década pasada.

II. ALGUNOS HECHOS

La CEPAL (1990a) señala que

el decenio [de 1980] se inició cuando culminaba un prolongado período de crecimiento [...]. Se cierra con un dramático balance que, en general, arroja un saldo de retrocesos en el ámbito económico y social [...] a lo largo de una década caracterizada por la recesión, el deterioro social, la subutilización y aún destrucción de capacidades productivas y el desgaste de los aparatos estatales.

Aunque el Producto Bruto Interno llegó a crecer 11.7 entre 1981 y 1989, se mantiene el bajo dinamismo de la región. Las tasas fueron negativas en 1982 y 1983, convirtiéndose en positivas, aunque bajas, en los años siguientes.

Si analizamos el PIB por habitante veremos que el panorama es aún más grave. En efecto, en 1989 el PIB por habitante de -1.0, inferior en algo más del 8% al de 1980 y equivalente al que se tenía en 1978; es decir, retrocedió 11 años; en términos de su variación acumulada entre 1981 y 1989 llega a un crecimiento negativo de -8.3

² Como señala Bobbio en su libro *El futuro de la democracia* (México, FCE, 1986, citado por Pereyra 1988:70): "Una vez conquistada la democracia política nos damos cuenta de que la esfera política esta comprendida a su vez en una esfera mucho más amplia, que es la esfera de la sociedad en su conjunto, y que no hay decisión política que no esté condicionada o incluso determinada por lo que sucede en la sociedad civil. Entonces nos percatamos que una cosa es la democratización del Estado [...] y otra cosa es la democratización de la sociedad".

Las exportaciones de la región aumentaron en los años ochenta un 57% en volumen, pero su valor sólo se incrementó un 24%, dada la disminución de los precios internacionales de las materias primas. Las tasas de crecimiento de los precios de muchos de los principales productos de exportación fueron negativos; por ejemplo, en 1989 la tasa de crecimiento de los precios del café suave era de -11.8, la del cacao -16.9, la de los plátanos -19.9, mientras la harina de pescado era de -25.4. Otros productos tienen, en ese año de 1989, una tasa de crecimiento positiva, pero habían sufrido sustantivas caídas de precios años anteriores. Por ejemplo, el estaño tenía en 1986 una tasa de crecimiento de precios de -51.9, el mineral de hierro de -1.8 y el zinc de -5.9; otros productos, como el algodón o la carne de res, también en 1989, alcanzaron una tasa de -14.3 y -16.6, respectivamente.

La industrialización de la región, medida por el "grado de industrialización promedio [...] bajó de 25.5% a 23.8% entre 1980 y 1989, con lo cual el sector manufacturado contribuyó a agravar el panorama recesivo" (Cepal, 1991).

En términos de empleo la situación no es más halagüeña. A partir de los años cincuenta y hasta la década de 1970 inclusive, se había venido dando en América Latina una tendencia histórica decreciente en términos de la subutilización de la mano de obra. El "cambio en la composición del empleo [en la década de 1980] elevó la participación de las actividades de menor productividad [...] la subutilización total de la fuerza de trabajo (subempleo más desempleo) [aumentó] de un 40 a un 42% durante el decenio"

(Infante-Klein, 1991:134).

Estos mismos autores señalan que también aumentó el proceso de "precarización" del empleo, con menor estabilidad laboral, dominio del trabajo a tiempo parcial y una creciente subcontratación (Infante-Klein, 1991:134), lo cual significa, como se sabe, reducción o de plano eliminación de prestaciones sociales (en salud, vivienda, etcétera).

El Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC), señala que en 1990 el número de trabajadores del sector informal latinoamericano era de 32 millones, cuando en 1980 sólo alcanzaba a 16 millones; en otras palabras, en diez años se duplicó. La magnitud del mercado informal es importante. Según una publicación del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de España (MOPU 1990, p 158 y nota 309) el presidente del BID, Enrique Iglesias, estimaba en febrero de 1989 que hasta un 60% de la población económicamente activa latinoamericana podría estar en el mercado informal.³ El servicio doméstico no quedó a la zaga, pues en esa década pasó de cinco a ocho millones.

Los salarios reales también bajaron, PREALC (citado en PAHO, 1990 cuadro 4) señala que entre 1980 y 1985 el salario real en la industria manufacturera tuvo un crecimiento porcentual de -12.2, el mínimo urbano -16.3, en la construcción de -17.8, en el sector

³ La magnitud varía de país a país, pero siempre es considerable. Uno de los problemas es que el empleo informal está severamente subrepresentado en las estadísticas. Las estimaciones dan, en términos de la PEA, el 42% en Brasil, 25% en Bolivia, más del 30% en Venezuela. Con relación al PIB el sector informal puede alcanzar a cerca de 40% de aquel en varios países de la región (MOPU, 1990, 158)

público de -17.1 y en la agricultura de -15.2

Tal panorama lleva a decir a Michel Hansenne, director de la OIT

se llegó a niveles de salarios que en algunos países sólo representaban, en 1990, fracciones del nivel prevaleciente en 1980. Tal vez es el caso de Perú, donde el salario mínimo se cifró en un séptimo; de México, donde fue de 40 por ciento, y de Bolivia, Ecuador y El Salvador, donde fue un tercio del vigente a comienzos del decenio (Citado por Becerril, 20.10.92)

Esto repercute directamente en la calidad de vida de los y las latinoamericanos/as, y uno de los indicadores más impactantes es el aumento de los pobres. Si en 1980 eran 35% de la población total, diez años más tarde alcanzan a 44%; en números absolutos, significa 183 millones de personas que no pueden alcanzar mínimas condiciones de vida (en términos comparativos, esa cifra es mayor que todos los habitantes de Brasil, el país latinoamericano con mayor población).

Hay dos sectores en la población latinoamericana que han sido afectados más profundamente: las mujeres y los jóvenes.

La recesión afectó, como se ha visto, el ingreso familiar, La estrategia de sobrevivencia de los hogares fue incorporar al mercado a las mujeres, especialmente a las mujeres adultas jóvenes, en busca de un trabajo remunerado para compensar la pérdida del empleo masculino (CEPAL, 1990b:68)

Las mujeres, sin embargo, se vieron afectadas de diversas maneras. Una de ellas tiene que ver con el mercado de trabajo, la otra con el "adelgazamiento" del Estado.

En términos del mercado de trabajo, "La crisis ha modificado

la composición interna de la participación femenina; han seguido aumentando -aunque a un ritmo menor- las tasas de ocupación, mientras que las tasas de desocupación han experimentado un fuerte crecimiento" (CEPAL, 1990b:69). En el sector formal hubo mayores ofertas de puestos de trabajo para las mujeres, mientras que en el mercado informal.

Los ingresos masculinos son siempre mayores que los femeninos en las mismas ocupaciones. En Sao Paulo, el caso extremo, los ingresos medios de varones, en el nivel de 13 o más años de instrucción, es el doble del ingreso de una mujer con igual instrucción. En Caracas, una mujer joven con 10 o más años de instrucción tenía la misma capacidad de un varón que no había completado seis años de escolaridad (CEPAL, 1990c, citado en CEPAL 1991)

Por otra parte, los ingresos medios femeninos entre niveles de instrucción bajos y altos tienden a acercarse. Se produce una baja en los salarios medios femeninos, igualándose hacia los sectores más bajos del ingreso.

Las mujeres que trabajan en el hogar también se ven afectadas por la crisis, tanto en las tareas domésticas cotidianas como en la carga de trabajo doméstico. No hay registro cuantitativo de este sector de mujeres, pero algunos estudios cualitativos pueden arrojar luz sobre esto.

En varios países, la estrategia de supervivencia supone el aumento de integrantes de los hogares, que se convierten así en hogares extensos o ampliados. Este aumento de integrantes

incrementa el trabajo doméstico, que también puede aumentar por la salida al mercado de trabajo de los hijos menores, auxiliares en algunas tareas domésticas; la necesidad de búsqueda de ingresos (sin abandonar el trabajo doméstico) en costuras, lavados, servicio doméstico remunerado por horas, venta de dulces, refrescos o comida, etc. El deterioro de los ingresos obliga a no pagar los servicios, (luz, gas, agua) y obliga a que se cocine con petróleo o con leña, se venden los bienes domésticos (refrigerador, estufa, vajilla), todo lo cual sobredimensiona la tarea doméstica.

Los documentos de la CEPAL señalan como este aumento de la carga doméstica por el exceso de trabajo derivado de la crisis, provocan en muchas mujeres la sensación de no estar cumpliendo adecuadamente con el papel socialmente asignado, y no es extraño comprobar fuertes depresiones y cuadros psicósomáticos, y concluyen: "Queda planteada la duda de cual sería la magnitud real de la crisis si las mujeres no hubieran suplido con un alto costo personal y de trabajo gran parte de las carencias provocadas por ésta" (CEPAL, 1990b).

El debilitamiento de la inversión pública también afectó a las mujeres en dos planos: en el del empleo pues el sector público era uno de los mayores empleadores de mano de obra femenina, y en el de los servicios, a las usuarias de los servicios sociales, especialmente en el área materno infantil.⁴ Las políticas de ajuste, con el llamado "ajuste invisible" reflejado entre otros factores en un aumento de las horas trabajadas y deterioro de las

⁴ Estos datos sobre las mujeres están tomados de CEPAL 1991.

condiciones de salud, contribuyeron también a agravaron la situación de las mujeres.

Con la particularidad de ser muy elevada en los grupos de edad con mayor labor reproductiva, la tasa de participación de mujeres aumentó casi un quinto en la década. Al mismo tiempo la heterogeneidad de los mercados laborales se hizo mayor, lo que significa el incremento tanto de la subutilización de la mano de obra como de los trabajos inestables y precarios.

Por último, digamos que la pobreza tiene cara de mujer, habida cuenta del alto número de hogares con jefes mujeres y la correlación positiva entre jefatura de hogar femenina y pobreza.

Otro grupo social que se ha visto especialmente desfavorecido, como señalé arriba, es el de los jóvenes, especialmente entre los de menor edad, tanto varones como mujeres. Las estadísticas sobre el trabajo de menores son escasas o sencillamente no existen, pero una observación somera nos permite comprobar como los niños y niñas laboran como trabajadores familiares no remunerados, lo hacen en el sector informal o, clandestinamente, en las fábricas y talleres.

El Informe de la OIT *El trabajo en el mundo*, de 1992, estima que probablemente laboren cerca del 26% de los niños latinoamericanos (*La Jornada*, 21.10.92),⁵ con el agravante de que ahora la explotación alcanza "un número mayor de niños, porque son

⁵ No se trata de decir que el trabajo de los menores ha comenzado con la crisis. Desde mucho tiempo atrás es conocido, tanto en el campo como en las ciudades. Tan conocido y visto como problema que el Estado de bienestar impulsó una legislación que limitaba el trabajo de los niños, para permitir que éstos fueran a la escuela primaria, aprendieran a leer, escribir y un oficio o profesión y posteriormente se insertaran, desde los 14 o 16 años, en el mercado de trabajo.

más las familias que se ocupan actualmente por un salario, con lo que es más probable que los niños estén laborando fuera de sus casas, sin la protección de sus padres" (citado por Becerril, 21.10.92).

Los niños y niñas pueden ser una importante fuente de ingreso para las familias pobres. En Recife, Brasil, se comprobó que los menores limosneros o vendedores en las esquinas podían ganar hasta tres veces el salario mínimo diario. Esto no sólo habla de que el salario mínimo es bajo, señala que una "buena y racional opción de mercado" exige que los niños salgan a trabajar en ese particular mercado informal de los cruceros principales de las ciudades latinoamericanas. Por supuesto, el informe de la OIT también menciona la prostitución de menores, que puede ser un ingreso importante en el presupuesto del hogar.

La FAO, en voz de su director para América Latina y el Caribe, establece que en América Latina la tasa de mortalidad de anual de niños menores de cinco años es de 69 por mil (Guerrero Chiprés, 01.10.92).

Como la economía no provee a los jóvenes de los empleos necesarios, éstos eligen caminos social y legalmente reprobados. El llamado "microtráfico" de droga en las áreas urbanas está casi siempre a cargo de jóvenes y niños (Giusti, 1991) y los sicarios, es decir los asesinos al servicio de los grandes carteles de la droga en Colombia, tienen en su mayoría alrededor de los 20 años; estas son dos muestras del desarrollo perverso de la ocupación de los jóvenes, obligados por la no menos perversa conducta económica.

Otro de los problemas que se enfrentan los y las jóvenes latinoamericanos es la deserción escolar, tanto en la escuela primaria como la secundaria, deserción que ha aumentado en la década de 1980. Esto está asociado por un lado con la imposibilidad de las familias para sufragar los gastos (vestido, alimentación, útiles escolares) y por otro con la necesidad de enviar a los hijos en edad escolar al mercado de trabajo -muchas veces vendiendo chicles, limpiando parabrisas, los automóviles, haciendo de payasos o tragafuegos en los cruceros más concurridos de las ciudades latinoamericanas- para la supervivencia familiar (CEPAL, 1990b).

III. LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA Y EN LOS AÑOS NOVENTA

Quizás tengan razón quienes ven un optimismo exagerado en llamar "década perdida" a la del ochenta⁶ pues la situación socioeconómica continúa siendo terriblemente difícil en la mayoría si no en todos los países latinoamericanos. En estas circunstancias, me pregunto qué significado puede tener la democracia para las mayorías latinoamericanas.⁷ Tengo dos órdenes de ideas en este sentido. Por un lado, la posibilidad o imposibilidad de elegir en la pobreza; por otro lado, qué tipo de democracia es la inscripta en

⁶ Véase MOPU, 1990:147.

⁷ Seymour Lipset (1990), refiriéndose a las naciones esteuropeas, señala algo que, con algunas correcciones, puede también aplicarse a nuestros países: "... dada la pobreza, el bajo nivel de educación y/o de cosmopolitismo, la estructura piramidal de las clases (donde hay más personas en la base que en el medio), las posibilidades de que se institucionalicen la tolerancia y la democracia están en duda.[...] los menos privilegiados quieren unas condiciones adecuadas de vida. Si las normas democráticas pueden o no estabilizarse en dichas condiciones es algo que queda por verse."

el imaginario latinoamericano. Me explico: la necesidad de sufragar las necesidades primarias (alimentación, vestido, alojamiento) son prioritarias para la vida humana; elegir entre éste o aquél partido político -y su(s) candidato(s)- significa conocer o de alguna manera compartir el programa, o simplemente compartir las promesas. Pero exige la "libertad de pensar" la ausencia de temor,⁸ la posibilidad de imaginar la vida no únicamente en el momento inmediato sino en un futuro a mediano o largo plazo. ¿Qué posibilidad de hacerlo puede tener hoy un joven de 18 (o 21) años -cuando es políticamente ciudadano, es decir, cuando se constituye como persona en ese ámbito- si debió abandonar la escuela primaria para insertarse en el mercado informal, obtener un empleo con contratos de 28 días, no conocer la seguridad social, formar una pareja -urgido por el afecto y la sexualidad- pero sabiendo que deberá compartir casa con el resto de su familia puesto que el sueño del "casado casa quiere" está muy fuera de su alcance. O si, habiendo cursado nueve, doce o más años de instrucción formal,⁹ su futuro está limitado a las inseguridades del mercado informal. ¿Qué posibilidad de pensar en libertad tendrá una mujer de 18 (o 21) años si a poco andar advierte que la violencia sexual está presente en su trabajo y sabe también que el aborto esta penado por la ley y que nunca podrá alcanzar la suma de

⁸ Evoco aquí las libertades que llevaron a la constitución de las Naciones Unidas, plasmadas luego en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos y pactos posteriores.

⁹ En 1989 una encuesta del Instituto Municipal de Planificación (IPLAN) de Río de Janeiro halló que el 7.8% de los informales tenía formación universitaria (MOPU, 1990:158).

dinero que le exige una clínica clandestina pero segura, y que sólo podrá recurrir a las hierbas, el lavado con líquidos corrosivos, la aguja perforante o las maniobras chapuceras de una comadrona que no cuida las más mínimas condiciones de higiene?

El segundo orden de ideas se refiere al tipo de democracia. Es decir, ¿alcanzará ahora con plantearnos la democracia política?¹⁰ ¿Tendremos que ampliar el concepto e incluir la democratización de las relaciones interpersonales?

Creo que no será difícil que la democracia política -una institución deseable y que debemos defender en su respeto a la voluntad política de los ciudadanos y por ende al voto; la separación de poderes (Montesquieu) y por lo tanto la independencia del poder judicial¹¹ y, en su caso, del electoral frente al poder ejecutivo; el respeto a la pluralidad y a la existencia de minorías, y el amplio etcétera que supone la democracia política- tenga su complemento en la democracia social. En América Latina hay una larga tradición de revoluciones, movimientos sociales y

¹⁰ No desconozco la centralidad del régimen político en la bibliografía actual -sobre todo la latinoamericana- sobre la democracia. La existencia de dictaduras militares en los países del Cono Sur revitalizó la preocupación sobre este punto desde mediados de los años sesenta y el proceso de transición dictadura-democracia en los ochenta mantuvo viva la preocupación. Pero por un lado considero que el reconocimiento de la autonomía relativa de la esfera política no debe hacernos olvidar que la sociedad es una relación contradictoria -y quien dice contradicción dice conflicto- de varios planos o esferas, y que para comprender -ergo explicar- es necesario ver a esa sociedad en su totalidad; por otro lado, la legitimidad de las actuales democracias latinoamericanas pasa por los espacios económico y social, entendidos en su sentido más amplio. Creo difícil pensar en la legitimidad de un régimen de gobierno que excluye -por pobreza, desempleo, alimentación deficiente, imposibilidad de educación básica, etc.- a una proporción importante de sus habitantes, mujeres y varones.

¹¹ Por razones de espacio y, en alguna medida, de oportunidad, no puedo tratar aquí el tema de la justicia. Es común oír a mucha gente en muchos países latinoamericanos que dice no recurrir al poder judicial porque es un órgano corrupto. La idea de justicia es un punto importante en la teoría clásica; hay que retomarlo. Agradezco a M.T.De Barbieri su señalamiento sobre este punto.

partidos políticos (en un espectro que va desde el centro izquierda hasta la izquierda franca) que propugnaron y propugnan una democracia social, entendida como extensión de derechos políticos y sociales, trabajo, vivienda, educación, salud, a toda la nación. En la región se dio un largo proceso por el cual las sociedades latinoamericanas incorporaron a las grandes masas a la educación, propiciaron su participación en la vida societal, generaron mecanismos que compensaban la desigualdad, y buscaron el desarrollo individual y colectivo. Creo que tampoco será difícil pensar en la democratización de los participantes en la democracia política; es decir, en democratizar el funcionamiento interno de los partidos políticos, de los movimientos sociales, de los sindicatos e incluso de las burocracias -en el sentido de transparencia de sus actos, posibilidad de control por la sociedad civil que debe tener recursos legales contra la arbitrariedad de éste o aquél funcionario/a ya se trate del policía de crucero o del presidente de la república-¹² o, en otras palabras, no será difícil pensar en la necesidad de democratizar el funcionamiento de los actores políticos.

Pero posiblemente será más difícil pensar en la pertinencia de democratizar las relaciones de género, de edades, religiosas, étnicas, interpersonales. Es decir, la construcción de una sociedad no excluyente.

La democracia supone libertad, igualdad y tolerancia (de allí

¹² Y a este respecto, nada mejor que recordar la movilización popular en Brasil que desemboca en el juicio político a Collor de Mello. Más allá del resultado final, creo que es un buen ejemplo de control sobre los funcionarios.

el respeto a las minorías, por ejemplo), pero ¿puede pensarse en democracia cuando la sociedad, y nosotros como parte de ella, dejamos en una situación de minoridad a las mujeres, los/as ancianos/as, los/as niños/as, los/as negros/as, los/as indios/as (o cualquier persona de una minoría étnica), o discriminamos por religión o por preferencia sexual?¹³

Junto a este problema de la minoridad tenemos que incluir, porque oculta momentos antidemocráticos, la visión del mundo dividida en esfera pública -donde aparece la política... y los varones- y el mundo privado -moderno gineceo conceptual pero no por eso menos real- donde se intenta recluir a las mujeres (y otros grupos postergados).¹⁴

El desafío es, entonces, extender la idea de democracia en el universo simbólico. La tarea no es fácil, pero es necesario reivindicar el poder de las utopías.

¹³ Véanse, por ejemplo y referidos a las mujeres, los trabajos de Carole Pateman *The Sexual Contract*, Stanford, Stanford University Press, 1988 y "Feminismo y democracia", *Debate Feminista* núm. 1, marzo de 1990; en el mismo número de esta revista véase también Mary G. Dietz "El contexto es lo que cuenta. Feminismo y teorías de la ciudadanía".

Señalo expresamente textos que analizan la situación de las mujeres a partir de una óptica feminista porque considero que el movimiento feminista ha sido, en las últimas décadas, el que más congruentemente ha analizado la ausencia de democracia en sociedades basadas en una visión de "fraternidad patriarcal" (Pateman, 1988) de un mundo construido por el esfuerzo de varones y mujeres pero apropiado para sí por los primeros. No desconozco la importancia que para la democratización de la sociedad han tenido también movimientos como los de derechos humanos, de minorías étnicas o los de liberación gay.

¹⁴ Sobre lo privado y lo público hay una extensa bibliografía. Pueden verse con provecho el texto de Pateman (1988) citado en la nota anterior y el artículo de M.T. De Barbieri "Los ámbitos de acción de las mujeres", *Revista Mexicana de Sociología*, enero-marzo de 1991.

Referencias

- Becerril, Andrea, "El empleo formal, deprimido, OIT", *La Jornada*, 20.10.92
- , "Informe de la OIT. Crecen el desempleo y la miseria en América Latina y el Caribe", *La Jornada*, 01.10.92
- , "Cada día crece el número de menores que trabajan", *La Jornada*, 21.10.1992
- , "En la miseria, 44% de los latinoamericanos: OIT", *La Jornada*, 19.10.1992
- CEPAL, (1990) *La economía latinoamericana y del Caribe en 1989*, Santiago de Chile, Fondo de Cultura Económica, 1990
- , (1990b) *Los grandes cambios y la crisis. Impacto sobre la mujer en América Latina y el Caribe*, Santiago de Chile, 1
- , (1990c) *La transmisión intergeneracional de las oportunidades de vida en la década de los ochenta*, Santiago de Chile.
- , (1991) *La mujer en América Latina y el Caribe: el desafío de la transformación productiva con equidad*, Documento de la Quinta Conferencia Regional sobre la Interpretación de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe. LC/L.627(CRM.5/4)
- Giusti, Jorge (1991) "Significación económica y social de la droga", *Revista de la CEPAL* núm. 45, diciembre
- Guerrero Chiprés, Salvador, "Son pobres en México el 45% de menores de 18 años: UNICEF", *La Jornada*, 01.10.92.
- Infante, Ricardo y Emilio Klein, "Mercado latinoamericano del trabajo en 1950-1990", *Revista de la CEPAL*, núm. 45, diciembre de 1991.
- Lipset, Seymour Martin (1990) "Libertad y tolerancia" *El Nacional* 14.04.90
- Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) (1990) *Desarrollo y medio ambiente en América Latina y el Caribe. Una visión evolutiva*, Madrid, MOPU/PNUMA/AECI.
- Pereyra, Carlos "Democracia política y transformación social" en R. Trejo Delabre, J.E. Vega (comp.) *México, el reclamo democrático*, México Siglo XXI/ILET, 1988:64

SEMINARIO

**TRANSFORMACIONES SOCIALES Y ACCIONES COLECTIVAS
AL FINALIZAR EL SIGLO XX: BALANCES Y PERSPECTIVAS**

**Revisando el camino: las apuestas
de la democracia en sudamérica**

Juan Carlos Portantiero

**Seminario organizado por el Centro de Estudios Sociológicos de
El Colegio de México, del 11 al 13 de noviembre de 1992**

¿Marca el "impeachment" a Color de Mello un punto de inflexión en el proceso de transición-consolidación de la democracia en el sur de América Latina? El descrédito público y el pedido de juicio político subsiguiente hacia quien fuera consagrado presidente a fines de 1989 en las primeras elecciones verdaderamente democráticas tras un período de tres décadas, ha sido visto por la mayoría de los observadores como una prueba de la fortaleza del sistema representativo. En ese sentido, el juicio, predominantemente institucional, parece ser correcto: una crisis como la que precipitó la salida de Color de Mello hubiera provocado, muy pocos años atrás, un clásico golpe militar. Esta vez no fué así y fueron los propios mecanismos que marca la Constitución los que se pusieron en marcha como correctivos, con lo cual el ejercicio democrático en América del Sur habría sorteado con éxito un riesgoso "test" en el más importante de sus países. Pero si se quedara allí, la valoración resultaría superficial: para el análisis debe importar tanto la cura como los síntomas, sobre todo cuando ellos se manifiestan en el interior de estructuras débiles como las sudamericanas con estados ineficientes y corruptos, sin un sistema de partidos representativos y con instituciones deslegitimadas, incapaces de disciplinar al poder económico y satisfacer a la creciente demanda social.

Un tópico común de la literatura sociopolítica señala que hacia 1990 las "transiciones" sudamericanas habían superado su fase de máximo riesgo y alcanzado los umbrales de la "consolidación", definida convencionalmente a partir del momento en que una sucesión presidencial "normal" tenía lugar. En efecto, entre mediados del 89 y mediados del 90 se realizaron nuevos turnos electorales en Argentina, Brasil, Bolivia, Perú y Uruguay, mientras Chile y

Paraguay se incorporaban al lote democrático y Colombia, Ecuador y Venezuela mantenían su más antigua rutina de secuencia constitucional. Entre mediados de 1993 y de 1995, nueve de esos diez países deberán renovar sus mandatos presidenciales en un momento en que todas esas sociedades se hallan sometidas a similares estrategias de transformación económica y atraviesan los puntos socialmente más dolorosos de las mismas. Los síntomas del "mal" brasileño obligarían a ser más cautos (no necesariamente pesimistas pero sí prudentes) en relación con el precoz entusiasmo ante la consolidación: el futuro próximo dista de ser seguro pues el consenso público que aún está en juego no se medirá, como al principio del proceso, por la lealtad aislada al valor genérico de la democracia sino por la capacidad de asociar el ejercicio de ella con las dificultades de las reformas económicas. Como la "transición" equivalía, en verdad, a un complejo proceso de "transiciones" desplegadas secuencialmente (primero la política; después la económica) esa asincronía genera problemas para acordar en la convención capaz de señalarnos el momento en que ella está realmente consolidada, pero está claro que el indicador de un mero recambio presidencial normal no es suficiente.

Por eso el síntoma brasileño preocupa, más allá de esta primera resolución institucional feliz, porque forma parte de una nueva saga de amenazas en la que se agolpan, de manera confusa, los espectros de la corrupción, del autoritarismo civil, del retorno militar (a veces con formas neopopulistas), de la desagregación social y de la descomposición del estado. Novedades sobre esos temas son recurrentes y notorias, desde el intento de golpe de estado en Venezuela hasta el autogolpe en Perú, pero abarcan también otras situaciones nacionales que parecen más sólidas como

is de Argentina, Bolivia y Paraguay en una gradación de peligros
e tornan todavía frágil a la estabilidad democrática. Superados
s primeros entusiasmos de la transición postmilitar y ante la
lvertencia de que la consolidación no depende sólo del respeto a
canismos electorales, se torna urgente un balance que rinda
entas, también, de los dilemas de la otra transición, la
ostpopulista que es la que nos permitirá medir la posibilidad de
ociación entre democracia política y reconversión económica en
s dos relaciones centrales en que ella se dirime: democracia y
ficiencia; democracia y pobreza. A esas tensiones alude,
ecisamente, el "síntoma brasileño".

Ha quedado señalado más arriba que el proceso de transición-
onsolidación podía ser leído en clave secuencial. La afirmación
be ser matizada para no dar lugar a equívocos. En efecto: no se
ata de una prescriptiva sucesión de "etapas" en las que las
mensiones no se articulan entre sí; lo que estos países
damericanos (como también los del este de Europa) deben acometer
s un proceso de reconstrucción de la sociedad que abarca todas las
sferas; lo que en términos de Touraine supone eliminar la
radicional confusión entre estado, sociedad civil y sistema
olítico. En ese sentido, son las expectativas públicas las que
lujan las agendas y señalan las prioridades a las elites políticas,
omo articulación de demandas en la que algún tipo de ellas
rganiza y subordina a las demás. Visto desde ese ángulo el proceso
e transición-consolidación tiene forma secuencial (aunque no
údimensional), en una espiral en la que se van agregando
cesivas demandas político-institucionales y socioeconómicas.

La experiencia sudamericana permite entonces hablar de tres
mentos a partir de una progresiva complejización de la

articulación de demandas colectivas. Una primera fase tuvo un carácter predominantemente institucional; la segunda debió atender a las presiones de la crisis económica y la tercera -de la que los síntomas de Venezuela primero y ahora de Brasil son testimonio- abre el abanico sobre las promesas incumplidas, de tipo ético y social, que se le reclaman a las nuevas democracias.

A principios de la década de los 80, cuando en el sur de América Latina los autoritarismos militares se manifestaban (salvo en el caso chileno) como incompetentes para resolver los gravísimos problemas que la crisis de la deuda había desatado, sucesivamente se abrían los llamados procesos de transición, sometidos cada uno de ellos a las modalidades históricas de cada uno de los países involucrados aunque reconociendo algunos rasgos comunes. El más importante de estos últimos era la persistencia de la convicción acerca de que la reconstrucción postautoritaria era exclusivamente un hecho político-institucional. El descrédito público frente a los fracasos militares alimentaba, como reacción, un fuerte apetito por la recuperación de las libertades cercenadas -que habían sido sacrificadas a cambio de nada- y de los mecanismos del estado de derecho. Quiero expresar con ello que al ser privilegiada de tal manera, casi excluyente, la construcción de un régimen democrático de gobierno, no se advertía que el tránsito debía incluir necesariamente y con el mismo peso a la reorganización de la economía. Una consigna emblemática del entonces flamante presidente constitucional argentino, Raúl Alfonsín, sintetiza bien ese fugaz clima de época: "con la democracia se cura, con la democracia se come, con la democracia se educa". De hecho todos aquellos primeros turnos de liderazgo postautoritario subestimaron o encararon con gruesos errores de cálculo a las relaciones entre política y

economía y debieron pagar el precio, al concluir sus períodos, de que sus mandatos no fueran revalidados. Así, en Argentina, Bolivia, Brasil, Perú y Uruguay los partidos que respondían al oficialismo fueron derrotados inapelablemente en las urnas.

Durante esta primera fase, preponderantemente "política", en que la democracia aparecía como panacea universal por el colapso de los autoritarismos, la economía era vista como un subproducto. Dicho de otra manera más precisa: la reforma del estado era vista de una forma estrechamente institucional y no articulada como modalidad de regulación entre ella y la esfera económico-social. La democracia quedaba como un tema de cultura política o de marco jurídico constitucional sin avanzar demasiado más allá de esos límites. En general, la economía aparecía como un tema de distribución: así como la política democrática equivalía a distribución del poder ilegítimamente concentrado por las dictaduras, la economía democrática debía ser, del mismo modo, redistribución de la riqueza que las dictaduras habían centralizado.

Pero esta inocencia inicial no tardó en esfumarse; rápidamente quedó demostrado que antes que reparar las inequidades lo que urgía a los nuevos gobiernos era gestionar la crisis más grave de su historia reciente, más aún que la de los años 30 que tuviera una relativamente rápida superación. El deterioro económico se aceleró y con ello los fenómenos de desagregación social, no por "culpa" de la democratización, ciertamente, pero sí por una visión muy unilateral de las tareas que debían ser encaradas. La "transición" se presentaba en la realidad como un emprendimiento con, por lo menos, dos dimensiones: además de una reestructuración de la esfera política requería una reorganización de la economía, porque lo que

había colapsado junto con las dictaduras era un modo de regulación de las relaciones entre estado y economía y lo que había que reconstruir era un modelo de sociedad y no sólo un modelo institucional en sentido político-jurídico. En tal sentido las fórmulas populistas y/o nacional-desarrollistas que habían sostenido las políticas públicas anteriores al autoritarismo y con las que se identificaban los nuevos liderazgos democráticos, resultaban caducas: no sólo no podían resolver la crisis, sino que formaban parte fundamental de ella.

La saga de democratización mundial -sur de Europa, América Latina, este europeo- expresa sin equívocos la continuidad entre liberalización de la política y liberalización de la economía; entre construcción del estado de derecho y construcción del mercado. Claramente a partir de 1989 el tema del "ajuste" y la reconversión se ha universalizado, como resultado de la mundialización de la historia a partir de la hegemonía, sin rivales a la vista, del patrón capitalista de acumulación. Por cierto que ello no niega las autonomías nacionales ni la existencia de distintas lógicas sociales en la aplicación de las reformas en cada una de ellas, pero las relativiza de manera suficiente como para que sus rasgos centrales no puedan ser eludidos.

Durante la primer fase postautoritaria la demora en advertir estas restricciones de época significó para los países sudamericanos un acelerado agravamiento de la situación, de tal modo que los valores taumatúrgicos de una democracia política que por sí sólo resolvía todos los problemas sociales quedaron mellados en la percepción colectiva, aunque si bien no tan profundamente como para que se añorara una vuelta de las fuerzas armadas al poder. Los espasmos hiperinflacionarios que comenzaron a surgir

como picos amenazantes en la tradicional megainflación sudamericana fueron el indicador más evidente de la descomposición que se avecinaba. Quedaba claro que si las democracias querían consolidarse lo debían realizar en una situación de emergencia económico-social y por lo tanto debían hacerse cargo de la misma.

Como ha quedado dicho esta expectativa no estaba presente en la concepción "distributiva" de la democracia que acompañó a los primeros pasos de la transición. Así como se soslayaba el problema de la deuda y de sus consecuencias, el de la crónica inflación quedaba subestimado en la medida en que se lo consideraba superable a través de recetas que estuvieron en boga en los años 60 pero que ya habían perdido totalmente su vigencia. Sin embargo, la inflación era apenas el síntoma de una enfermedad mucho más profunda que el desajuste económico con que se expresaba. Su perduración a través del tiempo indicaba la decadencia irremediable de un tipo de capitalismo asistido, prebendalista, que continuaba con la antigua tradición patrimonialista del estado latinoamericano, reforzada modernamente por las características de la industrialización protegida y de las políticas de inclusión social con que se encaró la superación de la crisis de los 30 y el desarrollo económico de la postguerra.

La megainflación, como fenómeno de frontera entre la economía y la política, venía a ilustrar el carácter de la crisis como **crisis estatal** (dándole al calificativo un sentido gramsciano) por lo que el pasaje del autoritarismo a la democracia involucraba muchos más aspectos que los político-institucionales. La presencia del autoritarismo y la posibilidad de achacarle a sus excesos toda la responsabilidad sobre los fracasos sociales opacaba una visión más honda de la situación, que remitiera no al desgaste de un

régimen político sino a la desagregación de un modo estatal de regulación de la vida social vigente desde muchas décadas atrás. Le tocaría a la democracia hacerse cargo de ese problema -salvo en Chile donde la larga dictadura militar lo había asumido a un alto costo- a través de un laboratorio de ensayo-error que todavía no ha concluído. La reconstrucción democrática debía ir más allá de la secuencia liberalización (política)-democratización (social) cuyo único riesgo era que el pasaje de la primera a la segunda se quebrara por un retorno autoritario: debía coexistir con la emergencia económica más grave, en una etapa de reconversión mundial, y desde ella acometer la ímproba tarea de reconstruir las bases del estado no sólo en cuanto a sus formas autoritarias sino en sus contenidos patrimonial-corporativos.

Enfrentados a la necesidad ineludible de gestionar la crisis económica, sin que ni sus líderes ni la sociedad estuvieran preparados para ello, los países sudamericanos pusieron en marcha distintos planes de reforma: algunos heterodoxos y moderados (como los planes Austral y Cruzado en Argentina y Brasil); otros ortodoxamente neoliberales (como el boliviano, bajo el gobierno del antiguo populista Paz Estenssoro) y otros como los de Perú, bajo el gobierno de Alan García, francamente ortodoxos también, pero en su caso de otra ortodoxia: típicamente sesentista. ¿En que condiciones políticas?

La coincidencia del derrumbe de las dictaduras con la decadencia terminal de un modo de regulación política de la economía transfirió a las democracias la imperiosa necesidad de acumular capacidad de gobierno, dada la magnitud de las tareas a enfrentar. El saldo de la primer fase de la transición fué esquivo para casi todos los partidos en el poder: fracasaron en sus

intentos y al final de los mandatos la crisis económico-social no sólo no estaba en caminos de resolverse sino que se había agravado. No habían logrado construir la fuerza política necesaria para gobernar la emergencia.

Las dificultades que se interpusieron fueron muchas; subrayaré sólo aquellas que tienen que ver con la reconstrucción del sistema político. Por cierto que es menester reconocer diferencias entre países, derivadas en buena medida de las tradiciones ideológicas y de los modelos de organización social heredados. En ese sentido una primera gran distinción debe hacerse entre sociedades en las que antes de las dictaduras predominaba un patrón populista de articulación de la comunidad política (como Argentina, Brasil o Bolivia) y aquellas -sólo Chile y Uruguay- en las que el patrón dominante era liberal-democrático.

Es obvio que una de las condiciones fundamentales para la perdurabilidad de un sistema político democrático consiste en la capacidad que posea para equilibrar las tensiones entre participación colectiva y decisión gubernamental hasta hacerlas compatibles. En los extremos, la pura decisión equivale a despotismo y la pura participación a anarquía. En las condiciones de "doble transición" en que se encontraron las nuevas democracias sudamericanas, presionadas por las exigencias de ajuste de la economía y los reclamos distributivos de la ciudadanía, la tarea fué enormemente compleja y frustrante para los primeros liderazgos, así como condicionante del futuro desempeño de quienes los reemplazaron en el poder.

Un supuesto generalizado, a partir de la teoría pero también de la experiencia de algunos países del sur de Europa, notablemente España, dice que la mejor manera de resolver los problemas de la

governabilidad democrática (esto es, de articular un óptimo de decisión y participación) es la que logra organizar el consenso a través de estrategias de cooperación en el interior del sistema político, estrategias que se expresan en una mecánica de "pactos" explícitos o implícitos. Ejemplos recientes de España, como los llamados Pactos de la Moncloa o más antiguos pero más cercanos como los de Venezuela entre socialdemócratas y democristianos o los de Colombia entre liberales y conservadores, eran invocados como caminos de solución, a medida que los datos de la crisis eran más evidentes.

En aquellas sociedades en que las tradiciones políticas fuertes eran las demoliberales de base contractual y en la que los partidos eran el núcleo principal de agregación de intereses, las estrategias del pacto podían tener un camino más seguro. Tal fué el caso del Uruguay y luego de Chile más nítidamente, vía la gran coalición que sustentó la llegada al poder del presidente Aylwin. Pero las otras, en las que primaba una tradición populista, con una visión corporativa y organicista de la comunidad política, la orientación hacia el acuerdo entre partes resultaba más difícil, porque la propia legitimidad de cada una de esas partes estaba en cuestión para las otras. Esto fué claro, dentro de una cultura política de tipo "movimientista" como la argentina, durante la presidencia de Alfonsín.

Vedado el camino de los grandes acuerdos cooperativos, transformada la relación entre oficialismo y oposición en un juego suma cero, la capacidad de gobierno de la democracia se recluye en el principio de la decisión con lo cual, en un círculo perverso, se corroe su legitimidad, sólo consolidable entonces en función de sus éxitos. Pero éstos, dado el monto y la calidad de la crisis no son

fáciles. En rigor, el sistema político democrático no se constituye como tal sino como un agregado de fuerzas centrífugas en el que entrechocan los partidos y los grupos corporativos aplicando lógicas de confrontación y en el que el gobierno, aislado, debe hacerse cargo del sistema como totalidad. El resultado, como lo fué en el caso argentino, no puede ser otro que la ingobernabilidad, como se demostró en 1989 cuando el presidente Alfonsín debió entregar el mando antes que culminara su período constitucional.

Es cierto que el ejemplo de Argentina fué el más extremo, por razones que sólo encuentran explicación en rasgos históricos particulares que he intentado desarrollar en otros textos (Portantiero, 1987 y 1988), pero salvo en Chile y en Uruguay (en este caso con metas y resultados mucho más modestos) la irresuelta tensión entre decisión y participación y la consecuente caída en problemas de gobernabilidad afectaron severamente al Brasil de Sarney, al Perú de Alan García y aún a Bolivia, pese al pacto parlamentario entre Paz Estenssoro y Banzer primero y entre éste y Paz Zamora luego. Como lo ha señalado un autor (Torre, 1991), a medida en que era evidente que la consolidación de las transiciones requería más gobierno y fallaban las grandes estrategias cooperativas las jóvenes democracias comenzaban un difícil tránsito entre el Escila de la ineficacia y el Caribdis del autoritarismo.

Esta primera fase de la democratización, culminada hacia fines de la década del 80, colocaba en la agenda una serie de problemas irresueltos. Por un lado veía agravar los datos de la crisis económica y las demandas sociales, por el otro y aún cuando parecían aventadas las amenazas de retorno de los militares no resolvía la ecuación capaz de consolidar un estable sistema político democrático, atenazeada por la tensión entre eficacia y

participación. Al decir de un autor (Malloy, 1991), el derrotero parecía conducir hacia "regímenes híbridos" en los que una democracia electoral coexistía con un estilo autoritario y tecnocrático de políticas públicas. Todo ello habría de reforzarse en la segunda fase.

Como lo ha señalado Adam Przeworski (1991), las transiciones, tanto en el sur cuanto en el este, abarcan un proceso que va desde el autoritarismo hacia distintas variedades de democracia y desde sistemas económicos administrados por el estado, proteccionistas y monopólicos hacia la confianza en el mercado: ambas reformas son radicales e interdependientes. Esta interrelación sólo será advertida con fuerza en la segunda fase, puntualmente coincidente con el reemplazo de los turnos electorales iniciales.

En varios casos esa sucesión fué traumática, con un sistema político fragmentado, un estado debilitado y una creciente movilización social. En algunas situaciones, como la argentina durante el pasaje de Alfonsín a Menem, se hizo presente la sombra del colapso democrático, pero en casi todas (Sarney-Color en Brasil; García-Fujimori en Perú) la crisis económica devoró a los gobiernos. La bancarrota fiscal, la hiperinflación, las vacilaciones entre el decisionismo y el consenso como políticas gubernamentales y el deterioro del nivel de vida que generaba protestas colectivas, alimentaron un círculo progresivo de deslegitimación que advertía sobre la urgencia de cambios de rumbo a efectos de encarar la interdependencia de las "transiciones". Concluía así el período idílico de la autosuficiencia de la democracia política.

En un trabajo sobre la transición democrática en América Latina, Giorgio Alberti (1991) ha señalado que los regímenes que sucedieron a los autoritarismos constituyen democracias "by default", en el sentido de que si ellas -pese a no haber resuelto las grandes expectativas que estuvieron presentes en sus comienzos- no se han desmoronado totalmente, la razón deberá encontrarse en el hecho de que para la mayoría de la sociedad no es visible una mejor solución alternativa. En tal sentido, la idea de un consenso estable y activo, de una consolidación en sentido estricto de la democracia, tenderá a horadarse en lugar de crecer, en la medida en que su legitimidad radica menos en sus propias potencialidades que en la quiebra de las dictaduras que la precedieron. En otras palabras: su legitimidad de origen no estaría avalada por una legitimidad de desempeño.

El carácter de esta peculiar democracia "por quiebra", cuya fortaleza es la inviabilidad de las alternativas a la vista, se reveló con toda claridad en el tránsito de la primera a la segunda fase de su ciclo de instalación en Sudamérica. Si en su etapa inicial, cuando comenzaron a advertirse los signos graves de la crisis económica, aparecieron los rasgos primeros de esa "hibridización" de la democracia que combinaba publicidad republicana con secreto tecnocrático dada la necesidad de gobierno a que obligaba la emergencia, este proceso habrá de acentuarse frente a la bancarrota fiscal del estado que precedió a los nuevos turnos presidenciales.

La crisis hiperinflacionaria hizo aún más dramática la necesidad de gobierno y vinculó de una manera nueva a la sensación de catástrofe económica vivida por la población con los valores de la democracia, expresando un brusco viraje de las demandas. Si en

un primer momento, en los albores del proceso democratizador la demanda colectiva era predominantemente político-institucional, en el segundo ella giró a lo económico-social. La manera en que esa situación se dió en Argentina y Perú es paradigmática.

En el primero de los casos, el presidente Alfonsín se vió obligado a abandonar el poder seis meses antes desbordado por una quiebra económica que no pudo controlar. El poder pasó a las nuevas autoridades electas, encabezadas por Menem, quién había conseguido la mayoría popular a favor de un programa nítidamente populista y nacionalista, entroncado con las más puras tradiciones originales del peronismo. En el caso peruano, el fracaso económico de Alan García dió lugar al triunfo de un verdadero "outsider" de la política, Fujimori, quién derrotó al candidato liberal, Mario Vargas Llosa, enarbolando también banderas populistas. Ambos, Menem y Fujimori, harían sin embargo desde el gobierno políticas inversas a las que habían prometido, virtualmente desde el primer día de sus gestiones. Esa "traición" a sus programas y, se supone, a la voluntad de sus electores, que implicaba la aplicación de violentas políticas de ajuste, no sería enjuiciada moralmente ni castigada por la ciudadanía. Es que la magnitud de la crisis no dejaba, en la percepción colectiva, otras alternativas. También en este caso, el ajuste se imponía "by default".

En el ejemplo brasileño, con matices, porque en él sería el tema (verdaderamente "boomerang") de la corrupción el ariete de la campaña de Color de Mello, se da una situación parecida a la argentina y a la peruana, en el sentido que la demanda mayoritaria apela a la necesidad de gobierno como reclamo predominante. Es sobre este marco de bancarrota que se opera el segundo tránsito en el ciclo democratizador, anclado sobre el tema del ajuste y la

concentración del poder; del "shock" económico y la tentación del autoritarismo. Es el camino que lleva del ciudadano al consumidor; de la demanda institucional a la demanda económica; de la lógica de la economía, en fin, subordinando a la lógica de la política. En el límite, de la retirada de la política, de la apatía cívica y la desmovilización.

Es que los alcances desorganizadores de la crisis no pueden ser subestimados. El estancamiento y la megainflación de los años 80, que configuraron la conocida "década perdida", y sobre todo los picos hiperinflacionarios que asomaron hacia su final descargaron sobre el tejido social la percepción del derrumbe. Los viejos temas durkheimianos de la anomia, de la disolución de las identidades colectivas en las situaciones de crisis, retomaron vigencia analítica. La población, recuperada durante la primavera democrática del terror padecido bajo la dictadura, perdió la frágil cohesión otorgada por el retorno de las libertades entre las llamas del desastre económico que la condenaba a la incertidumbre cuando no directamente a la marginalidad. ¿Cómo podría consolidarse la democracia en ese cuadro en el que debía coexistir con la ineficiencia gubernamental y con la pobreza creciente?

La respuesta avanzó en dirección de una degradación de la democracia, a través de un proceso en el que se acentuaron rasgos que ya habían aparecido en la primer etapa: sobre el tembladeral de incertidumbre que generaba la crisis hiperinflacionaria, la sociedad extendió el crédito a favor de la concentración de poder presidencial. La juridicidad republicana empezó a asentarse más sobre la "delegación" que sobre la "representación" y, en el sofocamiento de la vida política consiguiente, la búsqueda del "líder", del "salvador" apareció como el remedio para el desorden,

recuperando las nunca olvidadas tradiciones del "movimientismo" sudamericano.

Las reflexiones sobre la "democracia delegativa" (O'Donnell, 1991) como adulteración de la democracia representativa o sobre "el retorno del líder" (Zermeño, 1989) tematizaron esta incapacidad de las nuevas democracias para afrontar los dilemas de la crisis en los marcos clásicos del Estado de Derecho occidental. La desagregación social resultante de la descomposición del modelo de regulación preexistente derivó en fragmentación, desarticulación y heterogeneidad de los actores históricos que habían organizado la dinámica política modernizadora del continente: clases, estado, movimientos sociales. En ese cuadro de desintegración ¿que es lo que puede recomponer los trozos descentrados, lo que da sentido y centro a la acción, lo que devuelve un principio de unidad? En términos de Touraine (1987) para que la democracia representativa funcione no sólo tiene que darse la existencia de instituciones representativas sino también la de actores sociales representables, es decir, con un margen alto de autonomía de conciencia y acción. Ambas condiciones son de precaria densidad histórica en sudamérica: la primera intentó ser llenada (pero mucho más en la forma que en los contenidos, como veremos luego) luego de las dictaduras y la segunda, por efecto de la crisis y la segmentación social, se degradó aún más.

El resultado fué el predominio de los aspectos delegativos y plebiscitarios de la relación gobernantes-gobernados, la vocación cesarista del liderazgo democrático, el refuerzo de una visión organicista y no liberal-contractual de la democracia. Su fórmula fué la del hiperpresidencialismo, emblemático por los Menem, los Color o los Fujimori; el papel residual de los otros poderes del

estado; la concentración de la autoridad en favor de acelerar una política de reformas que se confiaban a la sabiduría del líder. La segunda fase postdictatorial construía así un camino que se alejaba del que lleva a la consolidación institucional de un régimen verdaderamente representativo.

Por cierto que en un primer momento y teniendo a su disposición un tal alto crédito, los nuevos gobiernos desentendidos de cualquier prejuicio antidecisionista, mejoraron la capacidad de gestión y reforzaron la gobernabilidad del sistema. Bajo el impacto del "shock" de políticas públicas en casi todos los casos (salvo en Brasil) la amenaza de retorno hiperinflacionario fué controlada y el factor de la estabilidad macroeconómica se incorporó como un sedativo para una sociedad convulsionada por el desorden. En ese marco se pudieron colocar en la agenda política temas hasta entonces tabú como las privatizaciones, la desregulación y la apertura de la economía: se unificaba el discurso del "ajuste" que presidirá toda esta segunda fase como el institucional había intentado organizar a la primera.

Retomando al pie de la letra los argumentos neoconservadores que venían del mundo central, codificados en el llamado "Consenso de Washington" de fines de los 80, el postulado central habría de invertir los términos de la formulación inicial: ya no sería la economía el subproducto de la política sino al revés, con lo cual una lógica economicista suplantaría a una lógica politicista de la democracia. Bien sabido es cual es el fraseo de esa nueva retórica: el mercado como organizador de la sociedad, no sólo como mejor asignador de recursos sino como dispositivo moral, como ordenador cultural y como sustituto de la política, en una secuencia en que lo privado reemplaza no sólo a lo estatal sino y sobre todo a lo

público.

Las condiciones que hicieron posible la sólida implantación de esa profunda transformación de valores, en una región en la que la tradición de cultura estatal era muy fuerte, ya han sido mencionadas. El fracaso de la gestión de la economía era tan notorio que la popularización de las viejas consignas de la derecha resultaba inevitable: al menos apuntaban alguna pizca de esperanza hacia el futuro en una sociedad desmotivada y desmovilizada. El "ajuste", aunque cruel, prometía una deconstrucción de la realidad de crisis y una búsqueda de integración con los cambios que se producían en el mundo.

Y en ese sentido su pertinencia resulta irrefutable. Carece de sentido discutir sus puntos básicos en tanto ellos responden a la lógica vigente en la economía mundial, frente a la cual todas las alternativas en juego se han desmoronado. Aún su costo social es insoslayable: más costoso en términos humanos sería el mantenimiento del viejo modelo. Lo que sí puede y debe ser confrontado críticamente es el uso neoconservador del ajuste, que es el que ha predominado en esta segunda fase de la democratización sudamericana.

Para sus voceros ortodoxos pareciera que el ajuste es al mismo tiempo la reconversión; que la deconstrucción equivale a la reconstrucción. El mantenimiento del equilibrio fiscal, los problemas de la tasa de cambio, de la tasa de interés y de la tasa de inflación agotan, en la visión neoconservadora, los problemas macroeconómicos: el resto depende de la acción del mercado. Esta ilusión, en un principio creíble porque se asienta sobre el predominio de estrategias individuales de prosperidad en la percepción de actores que fueron colectivos y que ahora se hallan

segmentados, deja afuera el verdadero problema que sufren tanto los estados periféricos como los centrales, los capitalismo maduros como los nuevos capitalismo que quieren resurgir de las ruinas del socialismo estatalista. Y ese problema es que el ajuste sólo destruye, pero deja un vacío de proyecto que sólo desde fuertes políticas estatales puede ser llenado.

El caso argentino es, en ese sentido, ilustrativo porque durante el gobierno de Menem se ha avanzado en esa línea más que en ningún otro país sudamericano, salvo Chile, que inició este proceso bajo la dictadura bastantes años antes. ¿Cuales son sus resultados inmediatos? Se alcanzó el equilibrio fiscal vía incremento de la recaudación impositiva y disminución del gasto público, se estabilizó el tipo de cambio y la tasa de inflación, se privatizaron virtualmente todas las empresas que estaban en poder del estado, se disciplinó fuertemente al sindicalismo y también - aunque al precio de grandes concesiones políticas- a las fuerzas armadas. En ese sentido en menos de tres años se desmontaron las bases del populismo estatista que el propio peronismo había contribuido a fundar en la década de los 40, con lo que los objetivos del ajuste quedaron de alguna manera colmados.

Pero el mapa que quedó tras esa operación quirúrgica es, en algunos rasgos centrales, el siguiente: si bien las privatizaciones desmontaron al corporativismo estatal, el monopolio en el que habían medrado burocracia y sindicatos fué reemplazado por un oligopolio de menos de diez grupos empresarios que se quedaron con la propiedad de esas empresas y con una capacidad de control enorme sobre una economía trustificada.

En lo social, en la medida en que la búsqueda de equilibrios presupuestarios impuso la disminución del gasto público en salud,

educación y asistencia social, la pobreza crítica se ha acrecentado notablemente mediante la incorporación masiva de "nuevos pobres" resultantes de la degradación económica de los estratos medio-medios y medio-bajos de la población. La Argentina es hoy una sociedad dual y si sería injusto atribuirlo con exclusividad a las últimas políticas, es evidente que la falta de articulación entre ajuste y reconversión ha acelerado la marginalización social.

Por fin, en lo político-institucional, todas las acechanzas decisionistas han finalmente cuajado en una desmedida acumulación de poder en el Ejecutivo, en una disminución del papel del Parlamento (mediante el uso reiterado de la legislación por vía de "necesidad y urgencia", al punto que en un trienio se han dictado más decretos de ese tipo que en todos los años de vida constitucional sumados) y en una supeditación política de la justicia a la voluntad presidencial, en el mejor estilo de los gobiernos autoritarios.

El resultado es un ajuste económico que no es reestructuración; una democracia que es cada vez menos representativa y segura jurídicamente y una sociedad crecientemente desigual. Sus consecuencias son un estado que pierde poder frente a los grandes grupos empresariales y que sólo gestiona las grandes variables del equilibrio macroeconómico, mientras crece la pobreza y se vacía el espacio de la ciudadanía.

Este último ítem es importante, entre otras cosas porque ha de permitir el contraste con la situación brasileña. La consolidación de la democracia supone, volviendo a Touraine, el vigor de instituciones representativas y de actores representables. La emergencia económica, la crisis hiperinflacionaria y el ajuste posterior, esos tres hitos por los que ha debido atravesar la

democratización sudamericana, han corroído -entre la pobreza y la ineficiencia estatal; entre la crisis de toda idea de progreso social, en fin- esas dos dimensiones imprescindibles. Si la democracia se resiente cuando descansa en formas delegativas y no en instituciones representativas, esa mella forma un sólo haz con la pérdida de la autonomía de los actores y la decadencia del espacio público, en una situación de "sálvese quien pueda" y en un clima moral que sólo premia el éxito individual por vía del negocio o del delito. En la ética del recluimiento defensivo, la política, el lugar de la polis se transforma en espectáculo (en un lugar donde se mira y se oye pero donde no se es oído y mirado, parafraseando un tópico arendtiano) y el ágora en que el espectáculo transcurre es la pantalla de televisión, como forma de comunidad ilusoria. En el reino de la ajenidad, la política es video política. Pero este distanciamiento no es, sin embargo, inocente y sin consecuencias para las elites que creen beneficiarse de él: de él puede surgir un eco impensado (y peligroso); su interpretación como escándalo, como corrupción y, por lo tanto, el refuerzo de una mirada ética sobre la realidad.

La fortaleza del ajuste sin reestructuración reside en el mismo mecanismo "by default" que protegió a la democratización institucional. Una sociedad con actores segmentados, no representables, una sociedad despolitizada, carece de energías para movilizar alternativas. Aún así, el ajuste, frente al cual no pueden encontrarse opciones en el pasado, muestra sus límites como horizonte de futuro. Exitoso en la destrucción, al confiar ciegamente en que la democracia es un residuo del mercado, puede cancelar no sólo a la democracia sino también a la viabilidad de un proyecto económico que sustituya al modelo anterior en crisis

terminal. Porque, ¿que significa, en verdad, cambiar de raíz el modelo de sociedad, el patrón de regulación de las relaciones entre estado, sociedad y política vigente incluso bajo las dictaduras cuyo colapso abrió el ciclo de democratización? Si estas nuevas democracias, además de ser post autoritarias, buscan ser también post populistas y post nacional-desarrollistas, ¿cuáles son los nudos decisivos que deberían ser desatados para lograrlo?

En un texto que tiene ya veinte años (Cardoso, 1972) se intentaba una respuesta a la pregunta sobre la nueva relación entre estado y sociedad que se planteaba en los países más modernos de la región, aunque el interrogante, en rigor, estaba planteado puntualmente con referencia al Brasil. Cardoso señalaba entonces la presencia de lo que llamaba "anillos burocráticos", como instancias de mediación -interiores al estado- entre intereses públicos y privados. Dichos "anillos" en buena medida anularon las fronteras que deben separar a la sociedad, al estado y al sistema político y heterogeneizaron a los actores y a los espacios institucionales, desplazando a los viejos temas liberal-representativos de la vida política.

Esa forma de organización de los intereses y de representación política de los mismos, que llamaremos patrimonial-corporativa, enraizada en la tradición iberoamericana que nunca recibió en plenitud la herencia liberal anglosajona, se acentuó con formas modernas a partir de la resolución industrializadora de la crisis de los años 30. El modelo "mercadointernista", estadocéntrico y proteccionista sonó una similar melodía en los momentos populistas o desarrollistas, autoritarios o semidemocráticos, en cuanto hace a la subsunción de la economía en la política y a la consiguiente falta de separación entre sociedad civil, sistema político y

estado. Este último se convirtió en gestor de la economía y dispensador de privilegios, lo que lo convirtió en una fortaleza codiciada en cuyo interior operaban las presiones por el reparto del excedente. En este marco el patrón de desarrollo tuvo en América Latina la forma predominante de un capitalismo asistido por un estado prebendario en el que se volcaban demandas organizadas corporativamente. Los actores sociales funcionales a este modelo patrimonialista, incluyendo al sindicalismo cuando el populismo amplió la capacidad integrativa del sistema, buscaron identificarse con el estado para orientar sus decisiones de manera estrechamente corporativa y perdieron su capacidad autónoma en la medida en que se transformaban en clientes prebendalistas de un territorio colonizado.

Cuando el desarrollo inflacionario dejó de ser el mecanismo apto para financiar este modo de regulación de las relaciones entre estado y sociedad, la crisis estalló ya en un grado terminal. Primero se supuso que la mera remoción del autoritarismo militar la superaría y rápidamente se demostró que ello era insuficiente. Luego se intentó el camino del ajuste, del "shock" de mercado, de la privatización y la apertura, pero éste tampoco alcanza para desatar los nudos profundos de la crisis; en buena medida puede, por el contrario, afianzarlos si cree que un mercado oligopolizado frente a un estado sin capacidad de regulación ni de orientación de la sociedad es remedio suficiente. El ajuste vale como desmantelamiento: repliega a algunos actores corporativos como los sindicatos y aún las fuerzas armadas, pero no reforma los roles prebendalistas del estado. Si lo que debe ser reconvertido es el carácter asistido del capitalismo, la política de reforma del estado consistiría en "desprivatizarlo", esto es, en liberarlo de

su colonización por los "anillos burocráticos". Privatizar al capitalismo es más importante que desestatizar a la sociedad; la lógica neoconservadora del ajuste no parece llevar por ese camino.

Retornemos ahora, para concluir ya esta larga revisión, al interrogante inicial. ¿Estamos ante el fin de otra etapa, cuyo anuncio son los casos de Brasil y, más larvadamente quizás el de Venezuela? Los dos casos importan, en primer término, un alerta. Del mismo modo que la primer fase se agotó al no poder resolver la relación participación-decisión y, por lo tanto, la contradicción entre democracia y eficiencia, la segunda, que encaró a través del ajuste la tarea de mejorar los niveles de gestión de la economía, puede tambalear frente a los desafíos éticos y sociales que plantean la creciente pobreza de los sectores populares y la corrupción de la nueva "Nomenklatura" que la democracia generó. Como lo ha señalado Weffort (1992), la democracia bajo condiciones de "apartheid social" es posible bajo sus cotas de mínima, pero su consolidación es improbable.

Si una incógnita a despejar es la de cuánta ineficiencia global (inflación, desajuste fiscal, pérdida de competitividad) puede tolerar el consenso democrático, no es menos importante la que inquiere sobre cuánta inequidad ese mismo consenso es capaz de resistir. A esas dos dimensiones críticas se le ha sumado, con enorme fuerza, otra temática: la de la corrupción, que subraya los rasgos de escándalo de la tradicional distribución desigual de la riqueza y que le ha hecho señalar al Banco Mundial en su informe de 1990 que "en ninguna región del mundo los contrastes entre la riqueza y la pobreza son tan notables (como en América Latina). A pesar de ingresos per cápita que son en promedio cinco o seis veces mayores que los de Asia Meridional y Africa al sur del Sahara, casi

una quinta parte de la población latinoamericana sigue viviendo en estado de pobreza y esto se debe a un grado excepcionalmente elevado de desigualdad en la distribución del ingreso".

La corrupción de los funcionarios públicos y los niveles de consumo ostentoso de la porción más rica de la población han sido el detonante más inmediato de las crisis venezolana y brasileña y adquieren en la Argentina de Menem un peso movilizador cada vez mayor. Si bien la descomposición del viejo modelo de regulación y los rigores del ajuste acentuaron la fragmentación de los actores sociales, el ejercicio democrático creó, pese a todos los condicionantes culturales, un segmento crítico de "opinión pública" que opera como una masa difusa pero penetrante en la sociedad civil y sustituye de alguna manera la desorganización y falta de representatividad del sistema político. Es como si a partir de catalizadores irritativos como la corrupción, la sociedad buscara superar su tradicional fusión con el estado y el sistema político, inmodificada por los proyectos de democratización institucional y de ajuste neoconservador, y constituirse autónomamente. La misma existencia de una nueva fase de la transición en Sudamérica y también su carácter, dependerán de este desarrollo.

Juan Carlos Portantiero

Universidad de Buenos Aires

SEMINARIO

**TRANSFORMACIONES SOCIALES Y ACCIONES COLECTIVAS
AL FINALIZAR EL SIGLO XX: BALANCES Y PERSPECTIVAS**

Estructura e historia: la viabilidad de los nuevos sujetos

Guillermo de la Peña

**Seminario organizado por el Centro de Estudios Sociológicos de
El Colegio de México, del 11 al 13 de noviembre de 1992**

ESTRUCTURA E HISTORIA: LA VIABILIDAD
DE LOS NUEVOS SUJETOS

Guillermo de la Peña
Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social

I

En 1920, el antropólogo Manuel Gamio encontró que, entre la población indígena que vivía en el valle de Teotihuacán, no existía vocablo alguno que nombrara a la nación.⁽¹⁾ Ocho años más tarde, otro antropólogo, Robert Redfield, se topó con una situación bastante parecida en el pueblo de Tepoztlán: muchos se reconocían como mexicanos, pero les era imposible dar un contenido preciso a ese término.⁽²⁾ El propio Redfield estudió otro poblado campesino --Chan Kom, en la península de Yucatán-- durante la década de 1930; ahí, a pesar de las actividades propagandísticas del Partido Socialista del Sureste y de la existencia de una escuela primaria, la idea de la nación mexicana era virtualmente incomprensible.⁽³⁾ Ahora bien: tanto Gamio como Redfield explicaban este fenómeno en términos de la incomunicación de los indígenas mexicanos. En Tepoztlán los mismos habitantes distinguían entre "los tontos" y "los correctos": "los tontos" eran precisamente quienes carecían de cualquier otra perspectiva que no fuera la estrictamente la del pueblo y su entorno inmediato, mientras que "los correctos" eran quienes habían viajado y podían entender el mundo ciudadano y nacional. Por ello, era de esperarse que al aumentar los flujos informativos mediante la escuela, el alfabetismo, el transporte y en general los medios de comunicación, las gentes pudieran tener una comprensión adecuada de lo que significaba de ser miembros de un país llamado México.

Sin embargo, la pertenencia a una nación es mucho más que una mera idea que se adquiere mediante canales eficaces de información. En su ya clásico libro, Benedict Anderson habla de las naciones como comunidades imaginadas: su construcción exige que, mediante un acto de voluntad y afecto, una colectividad invisible y hasta ese momento amorfa pueda concebirse como plausible, habitable, acogedora y propia. Más todavía: la nación existe cuando esa comunidad imaginada puede reclamar lealtades

¹ Manuel Gamio, La población del Valle de Teotihuacán, México, Secretaría de Educación Pública, 1922.

² Robert Redfield, Tepoztlán: A Mexican village, Chicago, The University of Chicago Press, 1930.

³ Robert Redfield y Alfonso Villa Rojas, Chan Kom. A Maya village, Washington: Carnegie Institution, 1934.

por lo menos tan fuertes como los del parentesco, la religión o la comunidad de vecinos. Anderson subraya la importancia que en este proceso tuvieron el alfabetismo y la difusión de las novelas y en general la narrativa literaria, así como la invención del periódico como órgano de opinión pública.⁽⁴⁾ En el mismo tenor, Eugen Weber documenta la increíble transformación sufrida por Francia durante la segunda mitad del siglo XIX: todavía al comienzo de la Tercera República la mayoría de la población no hablaba francés ni se beneficiaba del contacto de las instituciones públicas; en contraste, al estallar la primera guerra mundial existía una unificación lingüística e institucional, así como un sentimiento patriótico, causados por la escuela, la letra impresa, el servicio militar y la movilidad física y social de la población.⁽⁵⁾ Tanto Anderson como Weber resaltan la correspondencia última entre conciencia nacional y conciencia ciudadana: la comunidad imaginada va surgiendo en el contexto de la emancipación del individuo en cuanto sujeto fundamental de derechos y obligaciones. Es decir, la lealtad hacia una colectividad invisible se vuelve viable cuando surge lo que Habermas ha llamado espacio público (o esfera de lo público): un conjunto de lugares físicos e institucionales que en principio se encuentran abiertos a la participación de todos los miembros de esa colectividad, sin que esa participación tenga que ser mediada corporativamente.⁽⁶⁾ Así, lo que en el mundo moderno hemos entendido por nación se refiere siempre al consenso de individuos iguales ante la ley, que pueden sentirse representados en cuanto individuos por las autoridades e instituciones que ellos mismos van creando y revalidando.

Volvamos al caso de México. Sesenta años después de Gamio y Redfield, quienes hemos hecho trabajo de campo entre campesinos o incluso entre los moradores de los barrios populares urbanos encontramos todavía, en el discurso de nuestros informantes, una gran duda sobre qué significa "ser mexicanos", a pesar de la difusión de la escolaridad y de las comunicaciones. Igualmente, la palabra nación parece tener una consistencia mínima al lado de palabras como familia, barrio, pueblo. Por eso mismo, no es exagerado afirmar que, para muchos habitantes de México, lo que confiere identidad y sentido de la propia valía no es el ser ciudadano sino el ser miembro de un grupo primario o corporativo:

⁴ Benedict Anderson, Imagined communities, Londres: Verso, 1983.

⁵ Eugen Weber, Peasants into Frenchmen. The modernization of rural France, 1870-1914, Stanford University Press, 1976.

⁶ Jurgen Habermas, "La esfera de lo público", en Francisco Galván Díaz (comp.) Jouraine y Habermas: Ensayos de teoría social, Puebla y México: Universidad Autónoma de Puebla/Universidad Autónoma Metropolitana (Azcapotzalco), 1986.

entonces un corporativismo y un patrimonialismo informales, justificados por los valores y las prácticas sociales de grupos tanto tradicionales como emergentes, y amparados por caudillos y caciques que servían de mediadores y representantes en el ámbito nacional. Como es sabido, en el siglo XX el gobierno postrevolucionario en buena medida reforzó y reorganizó para su propio provecho y estabilidad esta estructura corporativa y patrimonialista, aunque mantuvo la ficción legal de la igualdad y la representación ciudadana. Así, de esta nueva armazón ficticia puede afirmarse lo mismo que Francois-Xavier Guerra afirmara sobre la sociedad porfirista:

No había más que un "pueblo", aquel que formaban los raros individuos que habían interiorizado su condición de ciudadanos. No había más que una "nación", la que definían las relaciones de fuerzas locales, justificadas después por el discurso. Esta doble ficción marca toda la realidad latinoamericana contemporánea; es la que asigna a las élites su doble misión: construir una nación y crear un pueblo.⁽¹¹⁾

Por otro lado, tampoco puede decirse que en México haya tenido vigencia corriente la representación basada en la clase social. El surgimiento de sujetos de clase también supone la descorporativización de la sociedad y la emancipación de los individuos que entonces pueden situarse en cuanto tales frente al mercado y asociarse frente al poder. En cambio, nuestros organismos sindicales --para poner un ejemplo obvio-- con frecuencia están montados en alianzas particularistas y protegidos por cacicazgos burocráticos. Resulta por ello paradójico --to put it mildly-- que estemos hablando ahora de los sujetos de la postmodernidad que han desplazado a los sujetos individuales y a los sujetos clasistas. ¿Cómo podrían constituirse estos entes postmodernos, dada la persistencia de la desigualdad extrema? ¿No estaremos enfrentando, otra vez, un corporativismo redivivo, simplemente ajustado a una situación donde la crisis mundial de las ideologías importa menos que una crisis económica que obliga a una nueva negociación de las relaciones de fuerza?

Con todo, sería frívolo negar la historicidad de nuestra estructura corporativo-patrimonialista. Ha podido ir modificándose y readaptándose, de la colonia a nuestros días, porque (más allá de la modernización exclusivista de las élites) no han faltado situaciones que propiciaran, así fuera embrionariamente, la conciencia individualista, la libre asociación y un determinado espacio público (en el sentido de Habermas): por ejemplo, la colonización de frontera, la

¹¹ Francois-Xavier Guerra, México: del antiguo régimen a la revolución, México: Fondo de Cultura Económica, 1985, II, p. 333.

un grupo protector frente al resto de la colectividad, pues ésta no se concibe como habitable y acogedora sino, por el contrario, como fundamentalmente hostil.⁽⁷⁾ Estamos aun muy lejos de haber construido un espacio público y por tanto una cultura donde el individuo se defina como el sujeto básico del derecho y de la acción social. Mas bien, el término individuo tiene connotaciones negativas: el individuo es el que, como dice el refrán, "no tiene ni padre, ni madre, ni perro que le ladre"; es decir, el que se encuentra expuesto a todo tipo de agresiones. En una sociedad marcada por la desigualdad económica extrema, el marco institucional proporcionado por las leyes nacionales es visto como radicalmente ineficaz.⁽⁸⁾ Si aceptamos lo anterior, tenemos que reconocer que en México predomina una cultura de tipo holístico o relacional --para usar los conceptos de Louis Dumont y Roberto DeMatta--, donde las relaciones preceden a los derechos formales, donde el grupo y no el individuo es el sujeto de la acción social, y donde la estructura real del país no es la jurídica sino la que resulta de negociaciones entre grupos que reclaman espacios privilegiados.⁽⁹⁾

II

Todo esto viene a cuento en la discusión actual sobre la transición democrática y el surgimiento de nuevos sujetos en los escenarios políticos mexicanos. En México, no podemos decir que el concepto de ciudadanía basado en la ideología liberal-individualista está pasado de moda, o está superado, puesto que esa ideología individualista nunca ha tenido vigencia o, si acaso, la ha tenido en espacios sociales restringidos. En el siglo XIX, los liberales impusieron una institucionalidad jurídica que abolía cualesquiera derechos corporativos en favor de los individuales; pero en la práctica, como lo demuestra una obra reciente de Fernando Escalante, los propios liberales fueron los primeros en boycotear esas instituciones.⁽¹⁰⁾ Surgieron

⁷ Guillermo de la Peña, Herederos de promesas. Agricultura, política y ritual en los Altos de Morelos, México: Ediciones de la Casa Chata, 1980; Claudio Lomnitz-Adler, Exits from the labyrinth, Berkeley: University of California Press, 1992.

⁸ James B. Greenberg, Blood ties. Life and violence in rural Mexico, Tucson, The University of Arizona Press, 1989.

⁹ Louis Dumont, Homo hierarchicus, Paris: Gallimard, 1967; Roberto DaMatta, A casa & a rua, Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1987; Larissa Lomnitz, "Las relaciones horizontales y verticales en la estructura social urbana de México", en Susana Glantz (comp.) La heterodoxia recuperada (en torno a Angel Palerm), México, Fondo de Cultura Económica, 1987.

¹⁰ Fernando Escalante Gonzalbo, Ciudadanos imaginarios, México: El Colegio de México, 1992.

lo que se ha denominado "la crisis mexicana".⁽¹⁵⁾ La gran mayoría de estas familias eran de migración reciente a la ciudad y sus miembros laboraban sobre todo en actividades con características de "informalidad". Un tema central en la investigación era el de las identidades colectivas: cómo la gente construía un sentido de pertenencia y participación con respecto a colectividades de distinto tipo. A través de entrevistas abiertas y de narrativas de historias vitales, se trató asimismo de discernir la variedad de visiones sobre la capacidad del individuo en cuanto agente social en el contexto de sus distintos grupos de referencia. Sintetizaré aquí información sobre cuatro contextos: el familiar, el laboral-sindical, el religioso y el del vecindario.

Sobre la familia extensa, patriarcal, autoritaria y corporada de nuestro país ha corrido mucha tinta, aunque los análisis no siempre son muy consistentes (y a veces se cae en estereotipos). Existe consenso sobre la gran importancia que en el mundo campesino ha tenido la unidad doméstica ampliada como organizadora a la vez de la producción y el consumo, e incluso de la distribución de sus miembros en mercados de trabajo locales y distantes. También nos consta que, en los procesos migratorios rural-urbanos, la familia extensa funciona como un auspicio u organización-puente en la obtención de vivienda y empleo, y que puede reconstituirse como centro organizador del trabajo productivo y del consumo.⁽¹⁶⁾ Todo esto apuntaría a la persistencia de un corporativismo familiar propiciado por la necesidad de cooperación estrecha en una situación de recursos escasos; ahí, las opciones de los individuos, y en particular de las mujeres y los jóvenes, se verían drásticamente limitadas. Sin embargo, los datos de Guadalajara muestran que, por el fuerte control que ha existido sobre la vivienda y el suelo urbano por parte del capital inmobiliario, los miembros de las familias extensas tienden a dispersarse por toda la ciudad y a debilitar sus vínculos de cooperación. Las excepciones las encontramos en

¹⁵ Los resultados in extenso de esta investigación aparecerán en un libro que preparo en colaboración con Renée de la Torre (La ciudad ambigua. Inserción urbana y cultura política en Guadalajara). Véase también, de los mismos autores, "Religión y política en los barrios populares de Guadalajara", Estudios sociológicos, VIII, 24, 1990; y mis ensayos "La cultura política en los sectores populares de Guadalajara", Nueva Antropología, XI, 38, 1990, y "¿Una nueva cultura política?", en Jorge Alonso et al. (eds.), El nuevo estado mexicano, Méxicio: Nueva Imagen/CIESAS/Universidad de Guadalajara, 1992, Vol. IV.

¹⁶ Larissa Lomnitz, "Dynastic growth and survival strategies: the solidarity of Mexican grand-families", en Raymond T. Smith (ed.) Kinship ideology and practice in Latin America, Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1984.

instrucción de tendencia generalizada, la secularización, las logias masónicas, el mercado capitalista, el sufragio universal, las migraciones, la feminización del trabajo asalariado, así como ciertos tipos de periodismo, de radio, de cine, de música, y de asociaciones cívicas, políticas e incluso religiosas.⁽¹²⁾ También las grandes movilizaciones sociales --y en primerísimo lugar la revolución mexicana-- han sido capaces de crear sus propios espacios públicos, aunque éstos hayan sido posteriormente subvertidos y corporativizados por los sucesivos Partidos de la Revolución (PNM, PRM, PRI).⁽¹³⁾ Quiero decir que es importante tratar entender, en cada momento histórico --y también, obviamente, en el momento actual--, cuál es el sedimento de cambio que nos queda. En los últimos años, hemos presenciado, por una parte, la bancarrota financiera del gobierno priísta, lo cual ha minado (si bien no anulado) su fuerza como gran dispensador de favores y árbitro supremo de la negociación; por otra parte, los intentos de reforma política auspiciados por el propio gobierno. Vivimos, además, los efectos de las presiones generadas desde abajo: el movimiento estudiantil de 68, las movilizaciones agrarias de los 70, las organizaciones cívicas del terremoto de 85, las respuestas electorales y partidistas después del 88.⁽¹⁴⁾ Más aun: el diagnóstico de nuestro tiempo no puede encerrarse en el territorio nacional: estamos envueltos en un proceso de globalización traído por la internacionalización de los mercados de productos y de trabajo y las revoluciones informáticas, que nos acarrearán presiones multidireccionales de cambio. Pero no basta examinar lo que ocurre en los niveles macro --aunque ello es sin duda muy importante--; es menester escudriñar los rincones e intersticios de la vida cotidiana: llevar la pregunta sobre el cambio hasta el ámbito de lo aparentemente trivial. En este ámbito, los "grandes" acontecimientos nacionales pueden tener sólo un impacto muy reducido o indirecto; no obstante, lo cotidiano tampoco puede escapar al fenómeno de la globalización.

III

En la última parte de este ensayo, deseo presentar en forma extremadamente resumida alguna información derivada de una investigación de campo realizada entre familias de los barrios pobres de Guadalajara entre 1986 y 1989: tres años cruciales en

¹² Néstor García Canclini, "¿Modernismo sin modernización?", Revista mexicana de sociología, LI, 3, 1989.

¹³ Alan Knight, "The Mexican revolution: Bourgeois? Nationalist? Or just a 'Great Rebellion'", Bulletin of Latin American Research, 4, 2, 1985.

¹⁴ Carlos Monsiváis, Entrada libre. Crónicas de la sociedad que se organiza, México: Era, 1987; Joe Foweraker, "Los movimientos populares y la transformación del sistema político mexicano", Revista mexicana de sociología, LI, 4, 1989.

tangibles (aunque quizá más reducidos que en años anteriores): desde atención médica gratuita hasta viviendas subsidiadas; y un tallerista o pequeño comerciante que tiene conflictos reales (vgr. con sus empleados o con acreedores) puede solucionarlos si cuenta con la benevolencia de los testaferros sindicales. En esos casos puede hablarse del surgimiento en los ámbitos laborales de identidades de cuño corporativo y clientelar, que funcionan como refuerzo de la hegemonía de un grupo gobernante que sigue legitimándose como benefactor no de la sociedad en general sino de personas y grupos en particular.⁽¹⁷⁾

Los datos sobre el contexto laboral en Guadalajara no sorprenden --resultan muy parecidos a los que pueden encontrarse en muchas partes de México--; en cambio el contexto religioso presenta cierta novedad, por la variedad de grupos y situaciones, y por la intensidad de la participación de la gente. Hablaré de cuatro tipos de grupos o asociaciones: dos de ellos tienen fuertes características corporativas y autoritarias, mientras que los otros dos son de índole voluntaria. Destacan en primer lugar las asociaciones parroquiales de Acción Católica, presentes en los barrios más viejos. Su vitalidad suele depender de un liderazgo clerical carismático, que puede llegar a tener ingerencia directa en la vida social y recreativa de los feligreses e incluso en la gestión de los empleos y los servicios urbanos. El párroco, entonces, puede convertirse en una especie de cacique urbano, que mediante sus organismos o directamente vigila el orden e impone sus opiniones. Curiosamente, este tipo de asociación católica tradicional tiene fuertes similitudes con las asociaciones evangélicas de corte pentecostal, cuyos liderazgos son igualmente centralizados y prepotentes. En Guadalajara existe una famosa iglesia pentecostal, la Iglesia de la Luz del Mundo; con la protección explícita del PRI, controla el acceso y la gestión de servicios en varias colonias populares. Más todavía, ejerce un sistema de vigilancia tan eficaz que esas colonias se convierten en enclaves totalitarios, donde se controla hasta la forma de vestir de las mujeres.⁽¹⁸⁾ Tanto en esta iglesia como en las parroquias tradicionales se crean identidades exclusivistas e integristas: se parte de la premisa que la asociación religiosa y sus autoridades tienen el derecho y la obligación de influir e incluso intervenir directamente en todas las actividades de sus afiliados. Otro es el caso en las

¹⁷ Cfr. el análisis que hace Susan C. Stokes de los procesos hegemónicos entre los pobladores de una barriada limeña: "Hegemony, consciousness, and political change in Peru", Politics & society, 19, 3, 1991.

¹⁸ Renée de la Torre y Patricia Fortuny, "Mujer, participación, representación simbólica y vida cotidiana en La Luz del Mundo. Estudio de caso en la Hermosa Provincia", Estudios sobre las culturas contemporáneas, IV, 12, 1991.

ciertos tipos de pequeños negocios familiares expansivos --por ejemplo, talleres de calzado o puestos de fabricación y venta de alimentos caseros--, que tienden a reclutar como fuerza de trabajo a los vástagos e hijos políticos de ambos sexos, y a veces a sobrinos y primos cercanos y lejanos. Lo interesante es que en estos negocios no necesariamente se reproduce la autoridad patriarcal en forma estricta: se reconocen ámbitos de competencia femenina; a veces, la coordinación general de actividades está en manos de una mujer; y no es infrecuente que se estimule a los más jóvenes a que estudien y busquen mejores empleos. Por otra parte, la mayoría de los hogares nucleares presenta una fuerte cohesión y organización interna; pero no son unidades de producción y consumo sino fundamentalmente de consumo, y tienen como una de sus funciones el apoyar a los jóvenes en su carrera vital; la expectativa reciproca es que los hijos apoyen a sus padres en la ancianidad. Existe en muchos casos la conciencia de que los hijos e hijas pueden tener alternativas de trabajo interesantes, incluso fuera de Guadalajara y del país --ir por dólares "al Norte", con o sin papeles, se ha ido convirtiendo en una suerte de rito iniciático para los varones--; y que tratarlos con excesivo autoritarismo es contraproducente. Así, la presencia de una familia consolidada suele estar correlacionada en los informantes con una visión relativamente positiva (aunque no idílica o ingenua) de las capacidades individuales propias; mientras que quienes carecieron desde edad temprana del apoyo familiar tienden a interpretar la vida en términos de "la buena o la mala suerte" o la presencia o ausencia de patrones.

En contraste, el ámbito laboral --si no está mediado por la protección de una familia fuerte-- no genera por sí mismo, en la mayoría de nuestros entrevistados, visiones optimistas o individualistas. Carentes de credenciales educativas y destrezas especializadas, saben que les es muy difícil conseguir un buen empleo en empresas formales, a menos que utilicen mecanismos clientelistas. Sus actividades más frecuentes son como trabajadores eventuales no calificados (en la construcción, con frecuencia) y como autoempleados. En ambos casos requieren del patronazgo sindical o priísta. Los vendedores ambulantes y los tiangueros, por ejemplo, para tener acceso a un mercado callejero o simplemente para no ser molestados por la policía, deben afiliarse a una de las centrales sindicales oficiales o a un organismo dependiente del Partido Revolucionario Institucional; lo cual en la práctica significa pagar cuotas y "derechos" a los delegados y asistir a los actos partidistas. Igualmente, la continuidad en el trabajo de un albañil depende del pago de cuotas a un delegado. De manera semejante, los dueños de pequeños talleres o tiendas, so pena de ver sus negocios clausurados por huelgas ficticias, deben firmar un supuesto contrato colectivo con una central priísta y pagar una fuerte suma de dinero. Normalmente, los vínculos de esta clase no producen sentimientos de pertenencia sino de hostilidad. Pero, a veces, el acercarse amistosamente a un delegado puede aún reportar beneficios

instrumentalización externa o a su cooptación. Hay un caso de asociación civil en una colonia que lleva veinte años negociando con el ayuntamiento sobre el uso y administración de un gran terreno, y hasta la fecha han conseguido destinarlo a fines de beneficio colectivo, que además han ido cambiando. Tras las explosiones del 22 de abril, aparecieron varias organizaciones; algunas fueron rápidamente cooptadas; pero otras guardaron su independencia y capacidad de crítica.⁽²⁰⁾ En fin: sin caer en una idealización excesiva de las asociaciones de barrio, y reconociendo que muchas de ellas se disuelven una vez conseguidos sus objetivos materiales más inmediatos, debe valorarse su contribución en la forja gradual de identidades participativas. No sólo muestran que la defensa del "derecho a la ciudad" puede tener resultados tangibles sino además proporcionan conexiones con grupos y espacios institucionales donde explícitamente se da importancia al cumplimiento de la ley y al respeto a derechos humanos que trascienden las redes de protección particularista.

IV

Los cuatro contextos sumariamente expuestos no agotan, obviamente, las posibilidades existenciales de los actores, ni son "típicos" de otras zonas urbanas de México; pero muestran las condiciones en que surgen las fragmentarias y contradictorias identidades populares en el México contemporáneo. El proceso de apropiación colectiva de lo nacional parece ser aún una tarea incompleta, y los sujetos que harían viable tal apropiación son todavía embrionarios. Pero la tarea sigue pareciendo importante -no parece haber surgido un marco alternativo de convivencia global--, aunque seguramente el concepto de nación de los teóricos liberales deba ser revisado.

[continúa...]

²⁰ Silvia Mara Pérez, "Towards redemocratization in Mexico: Reflections on the Guadalajara explosions of April 22, 1992", M.A. thesis. University of Chicago. Center for Latin American Studies, October 1992.

iglesias protestantes "históricas" --luteranos, metodistas, presbiterianos--, que fomentan la discusión razonada de la Biblia y distinguen claramente entre la esfera religiosa y otras dimensiones de la vida. Pero estos grupos protestantes son muy escasos en Guadalajara. El cuarto tipo de grupo al que me voy a referir está formado por las Comunidades Eclesiales de Base. Son también grupos de discusión bíblica, pero con la peculiaridad de que buscan aplicar las enseñanzas de la Escritura a la solución de los problemas de la vida cotidiana --y por tanto discuten abiertamente sobre éstos: sobre lo que pasa en las familias, en el barrio, en la ciudad, en el país... Surgieron en colonias populares nuevas e inevitablemente han desembocado en movilizaciones de protesta y reivindicación urbana. Se organizan por manzanas y vecindarios, pero en principio no rehusan admisión a nadie. Permiten y estimulan las opiniones de todos los asistentes, por heterodoxas que parezcan; como en las primeras comunidades puritanas de la Nueva Inglaterra, la identidad se construye con la participación activa y cuestionadora. Me atrevería a decir que son lo más cercano que encontré en Guadalajara a un espacio público popular; pero el que sean abiertamente católicas les resta universalismo y las vuelve vulnerables a los vaivenes de la jerarquía. De hecho, la política oficial de la Iglesia en los últimos diez años --preocupada por el pluralismo que se había creado en su propio seno-- ha conseguido disminuir la importancia de las Comunidades de Base en favor de nuevas variedades de control parroquial tradicional.⁽¹⁹⁾

Los grupos religiosos que he mencionado son, en efecto, organizaciones de barrio y crean una identidad barrial, aunque subordinada a y condicionada por la afiliación religiosa. Sin embargo, hay organizaciones que logran crear una identidad propia, válida en sí misma. Eso pasó, al menos momentáneamente, con algunas organizaciones vecinales derivadas de las Comunidades de Base, que se constituyeron en alternativas frente a las juntas vecinales propiciadas por el PRI. Ha habido muchas otras asociaciones, sobre todo en zonas de poblamiento reciente, que han conjuntado esfuerzos de participación democrática en la resolución de problemas apremiantes: la regularización de la tenencia de la tierra, los fraudes en la venta de lotes, la defensa ante amenazas de desalojo violento, la carencia o escasez de servicios. Un símbolo muy importante y notorio de la participación, quizá más que las marchas espectaculares de protesta, son las jornadas de trabajo en común, que funcionan también como espacios físicos de encuentro. No es infrecuente que estas asociaciones sean intervenidas por partidos políticos, por la Iglesia o más recientemente por el Programa Nacional de Solidaridad; tampoco es raro que se desarrollen en ellas ciertas prácticas clientelares; pero eso no necesariamente conduce a su

¹⁹ Soledad Loaeza, "La Iglesia mexicana y las relaciones internacionales del Vaticano", Foro internacional, 126, 1991.

SEMINARIO

**TRANSFORMACIONES SOCIALES Y ACCIONES COLECTIVAS
AL FINALIZAR EL SIGLO XX: BALANCES Y PERSPECTIVAS**

Descomposición y redefiniciones políticas en el Perú

Julio Cotler

**Seminario organizado por el Centro de Estudios Sociológicos de
El Colegio de México, del 11 al 13 de noviembre de 1992**

Descomposición y redefiniciones políticas en el Perú.

Julio Cotler
Octubre, 1992

Documento preparado para el seminario "Transformaciones y Acciones Colectivas. America Latina en el contexto internacional de los 90. Antecedentes, Balances y Perspectivas", organizado por el Colegio de México, 11-13 Noviembre de 1992.

(Versión preliminar)

Descomposición y redefiniciones políticas en el Perú.

Julio Cotler

Al compás de las transformaciones mundiales ocurridas en la última década, en América Latina se observan complejos procesos de recomposición social y redefinición de las estrategias políticas concernientes a la organización y las relaciones del Estado y la sociedad. Por su importancia estos cambios tienen una trascendencia histórica de imprevisibles alcances.

La vigencia de actores, prácticas y consignas ideológicas excluyentes y antagónicas frustraron las esperanzas depositadas en la transición a la democracia para consolidar un orden político fundado en acuerdos que aseguraran la gobernabilidad, la cohesión social y el desarrollo. A su vez, la crisis de la deuda, en el marco de la globalización y reconversión en el centro, determinaron el agotamiento del modelo económico semi-autárquico de sustitución de importaciones, a la que estaban asociados dichos actores y sus postulados, abriéndose una coyuntura favorable para la aplicación de medidas de ajuste y liberalización de los mercados de acuerdo al tenor de los organismos de financiamiento internacional.

La incapacidad de los gobiernos para satisfacer simultáneamente las segmentadas demandas sociales y los compromisos internacionales agudizaron el conflicto político, generando oleadas hiper-inflacionarias que desorganizaron el entramado institucional y los referentes de vastos núcleos sociales; promovió el

cuestionamiento de los partidos y sus plataformas e incluso la legitimidad del Estado. La crisis de los "paradigmas" y el desmoronamiento del socialismo "real" contribuyeron para dar paso al pensamiento y las prácticas neoliberales, añadiendo motivos para remover las identidades, las lealtades y las autoridades forjadas décadas atrás.

En unos casos la represión gubernamental aplastó las resistencias políticas para la consecución del ajuste y la modificación del rol del Estado; en otros, la ausencia de nuevos proyectos verosímiles dió cabida para que viejas figuras políticas o "independientes" las aplicaran tecnocráticamente, en contra del mandato electoral que habían recibido, generando diversos resultados.

Si bien es prematuro calificar estas transformaciones como definitivas, entre otras razones por las incensantes alteraciones que se observa en la escena internacional, es indudable que América Latina se enfrenta a una recomposición social y redefinición de las prácticas y orientaciones políticas, que comprometen la organización y las relaciones del Estado y el mercado¹¹. En este complejo cuadro, el Perú es un caso extremo de las consecuencias de las transformaciones en curso, lo que le confiere a su análisis una especial relevancia.

¹¹ Ver, Cavarozzi, O' Donnell, Paramio, Zermeño.

Los mencionados fenómenos han contribuido a la descomposición del orden y las identidades tradicionales, paralelamente a la irrupción de fuerzas que, en un caso, persiguen destruir el Estado e impedir el desarrollo democrático mediante el ejercicio inusitado de la violencia ; y, en otro caso, buscan la refundación del orden mediante la liberalización a ultranza de los mercados y la pacificación por vías autoritarias y tecnocráticas.

Frente a estas alternativas, las fuerzas y los planteamientos para enfrentar democráticamente los múltiples desafíos que encara el Perú son muy débiles; de ahí que el país se encuentre en una difícil y crucial encrucijada. En las siguientes páginas se presentará, de manera sucinta, los factores políticos que han contribuido a este desenlace.

1. El legado del régimen constitucional.

La transición a la democracia en el Perú en 1980, a diferencia de los otros casos latinoamericanos, se realizó en una situación en la que confluía la ruptura del viejo orden social, la crisis derivada del fracaso del régimen que lo reemplazó y la emergencia de masas radicalizadas hasta entonces carentes de los mínimos derechos ciudadanos.

Pero, paralelamente a estas sustantivas alteraciones, la vigencia de organizaciones y orientaciones políticas forjadas en el antiguo régimen bloquearon la constitución de un sistema de partidos y la canalización institucional de los plurales intereses, frenando la fundación de una comunidad política. Estas

contradicciones constituyen el trasfondo de las pendulaciones políticas y económicas que han derivado en el continuo deterioro y las confrontaciones que hoy desgarran el país.

El régimen patrimonial y colonial, fundado en la concesión de prebendas que el Estado otorgaba para la explotación rentista de las capas subordinadas - campesinos indígenas - a cambio de la lealtad personal a la autoridad, imprimió un fuerte sello jerárquico y corporativo, con claras connotaciones étnico-raciales a la sociedad. Desde el descabezamiento del pacto colonial, las diferentes partes del "cuerpo" se encontraron divididas y enfrentadas, sin que emergiera un centro capaz de centralizar la autoridad y cohesionar dichas partes. El tradicional carácter "invertibrado" del país sería motivo para la permanente preocupación de intelectuales y políticos por la integración del "archipi[elago] peruano y la construcción de un país " de todas las sangres"; también para que, salvo contadas excepciones, persiguieran la concentración autoritaria del poder en el Estado como medio para lograr la unificación nacional.

A lo largo de las últimas seis décadas, y de manera pronunciada desde mediados de los cincuenta, el país ha experimentado dramáticos cambios en diferentes instancias que han erosionado la dominación patrimonial y colonial. En cada uno de los momentos cruciales - en los años 30, 56, 68, 80 - emergieron sucesivos segmentos desgajados y desarticulados de las divisiones estamentales, que fueron organizados por partidos centrados en

fuertes liderazgos personalizados que renovaron las relaciones de patronazgo y clientela.

La identificación y lealtad total de esta población desarraigada con los jefes de los partidos les confirió una autoridad indiscutible, que se perfila de manera extrema en el culto reverente de los senderistas a Guzman - faro y guía de la revolución mundial - manifiesto en las cartas de "sujeción" - en las que de manera devota se someten a la voluntad omnímoda del "Presidente Gonzalo".

La reproducción de las divisiones y los comportamientos sociales y culturales de índole señorial en las organizaciones partidarias hicieron que los desafíos internos y externos a sus jefaturas, desembocaran invariablemente en el rechazo a toda forma de conciliación y prevaleciera el rechazo y la confrontación ; la duplicidad y la desconfianza, que vinieron a formar el fundamento de la cultura política.

A su vez, por los contrastados orígenes e intereses sociales que los jefes y los partidos articulaban, las ideologías y las plataformas partidarias se caracterizaron por su variada naturaleza populista, y que la conquista del poder como medio para controlar de forma excluyente la distribución de los favores estatales se constituyera en su principal objetivo.

Es así como, paralelamente a la tenaz resistencia de los segmentos dominantes a permitir la incorporación de indios, cholos y mestizos en el Estado, el "segmentado" pueblo fue organizado por

varios jefes y organizaciones que apelaban a intereses particulares y excluyentes, derivando en la constitución de cerradas sub-culturas políticas que conferían fuertes y totales identidades a contrastados segmentos sociales.

Esta fragmentación político-social motivó el desarrollo de una práctica que Alberti ha calificado de "movimientista", en la que cada uno de los actores reclama la exclusiva representación de los intereses globales y rechaza la legitimidad de los contrarios, creando un clima de hostilidad y desconfianza, en donde cualquier muestra de acercamiento y tolerancia era - y sigue siendo - visto como traición y cobardía.

La modernización experimentada por el país a partir de la segunda post-guerra y la creciente incorporación de las masas populares en la política - en circunstancias que la mayoría de la población, campesinos e indígenas, seguía sin contar con los mínimos derechos ciudadanos - derivó en el empate político entre las fuerzas reformistas y las tradicionales, durante los años sesenta. En un ambiente cargado de multitudinarias presiones, este empate condicionó una salida de compromiso en la que, paralelamente al mantenimiento del régimen de dominación patrimonial y las relaciones coloniales de naturaleza estamental, los jefes de los partidos entraron en una competencia para redistribuir las prebendas estatales entre las capas urbanas. En razón del alto grado de concentración de la propiedad agraria y de las exportaciones mineras, los indiscriminados "incentivos" y subsidios se destinaron a la generación de nuevas clases vía la

sustitución de importaciones, para lo cual se impulsó el gasto público, satisfaciendo las demandas de los sectores urbanos allegados a los distintos partidos.

La crisis fiscal que motivó, dió paso al estallido de conflictos por la apropiación de los escasos recursos públicos y la emergencia de comportamientos radicales de las masas excluidas o insatisfechas por el parcializado patrocinio partidario y estatal, lideradas por jóvenes estudiantes y trabajadores en trance de ruptura con el viejo orden social y cultural, precipitando la pérdida de legitimidad instrumental de los partidos y el régimen oligárquico de dominación.

En efecto, el incumplimiento a las expectativas de patronazgo de las masas provocó su desapego y rechazo a los jefes, sus organizaciones y el Estado' y, de otro lado, que ellas se inclinaran por soluciones autoritarias a cargo de otro hombre "fuerte" capaz de satisfacer sus demandas. Como es sabido, la legitimidad de los regímenes fundados en la cooptación clientelista descansa en la concesión de favores de los patronos, a cambio de la lealtad personal de los dependientes. De ahí la especial importancia de contar con "influencia" ("vara") y que sea de sentido común la decisiva importancia de contar con un "padrino"²².

²² En cambio los regímenes de representación ciudadana se fundan en la consecución de derechos de acuerdo a reglas y procedimientos universales, organizados en y por el Estado de Derecho. De ahí que mientras la dominación y el estilo patrimonial se sustenta en la arbitrariedad de la autoridad, el Estado de Derecho se funda en instituciones y normas burocráticas.

La crisis de gobernabilidad condicionó la autonomía de los militares, hasta entonces garantes del viejo orden, y la instauración del "gobierno revolucionario de la fuerza armada" (1968-80) que, bajo la "indiscutida e indiusctible" jefatura del general Velasco, decretó sucesivas reformas estructurales, apelando al repertorio populista. La eliminación autoritaria y tecnocrática de los actores e intereses tradicionales otorgó al Estado una desconocida concesionaria que le permitió centralizar la autoridad, penetrar la sociedad y reordenar las instituciones estatales y sociales.

El impulso a la sustitución de importaciones, el incremento del gasto público y los discursos nacionalistas de tonalidades radicales, se conjugaron que esta "democratización social por la vía autoritaria" pareciera realizar la tarea histórica de componer el fragmentado cuerpo social y fundar un orden nacional.

Pero simultáneamente, el gobierno instauró mecanismos corporativos para controlar que la participación de los nuevos y movilizados sectores, liberados del yugo patrimonial no desbordara su proyecto de "democracia social de participación plena". Sin embargo, estos se mostraron inefectivos debido a la naturaleza castrense del gobierno y, por lo tanto, reacio a la organización política. Esta contradicción entre movilización y control inefectivo, en condiciones que los actos y las declaraciones del gobierno contribuían al desplazamiento de los clientes por ciudadanos, sería determinante del fracaso y derrumbe de la revolución "desde arriba".

Los restringidos canales de intervención de la sociedad en las decisiones del gobierno y el rechazo de los militares a reconocer la legitimidad de su participación política, condicionaron que los sujetos que habían contribuido a forjar se volcaran contra ellos, abriendo una coyuntura de crisis a mediados de los setenta. Ello dio lugar a desbocadas y tajantes reivindicaciones clasistas; mientras el movimiento popular, liderado por organizaciones políticas revolucionarias, presionaban tumultuosamente por la inmediata y total realización de sus postergadas exigencias, que el gobierno había contribuido a legitimar, los empresarios presionaban por la imposición de políticas de ajuste, la eliminación de las reformas y la reducción del ámbito y funciones estatales y, por último, la represión de la presencia y demandas de las despreciadas y temidas masas de cholos, indios y mestizos, a los que no se les reconocía su condición ciudadana.

En estas condiciones, las presiones internacionales se sumaron para que los militares se vieran obligados a retirarse a sus cuarteles de invierno, pero sin que ello menoscabara su autonomía. Para ello debieron acordar con los jefes de los partidos, a los que habían denostado permanentemente, la convocatoria electoral para la formación de una Asamblea Constituyente que luego, culminaría con la devolución del poder a la civilidad, a cambio de su respaldo para aplicar una política de estabilización ³³.

³³ Desde mediados de la década del 70, y a pesar de la intermitente aplicación de cerca de 45 "paquetes" estabilizadores, no ha cesado la crisis y la permanente caída de la economía. Las consecuencias han sido devastadoras: hoy el 70% de la población se encuentra en condiciones de indigencia y el ingreso promedio ha

Este quid pro quo no acalló la movilización política pero, paradójicamente, procuró la división de la sociedad entre las distintas apelaciones electorales de las contrapuestas identidades políticas tradicionales y de las nuevas organizaciones izquierdistas, que no por ello se diferenciaban de las prácticas y orientaciones de éstas. Es decir, la recomposición social no dio lugar a nuevas formas y estilos políticos y se adaptó a las tradicionales, reminiscentes del viejo orden orden patrimonial. que tendría consecuencias decisivas para que, a lo largo de la década pasada y

2. Democracia, crisis de representatividad y descomposición política.

El régimen constitucional se inició con buenos auspicios. Las negociaciones entre jefes políticos y militares, el reconocimiento de las izquierdas y la aceptación del Ejército de los resultados electorales de un lado y de otro, el que la mayoría del electorado se inclinara por un candidato centrista, eran indicios de la formación de un escenario y prácticas pluralistas.

Sin embargo, los gobiernos de Belaunde (1980-85) y García (1985-90) frustraron estas expectativas. En la medida que los partidos políticos mantuvieron incólumes las estructuras, prácticas

regresionado a los niveles de 1960. Por ello, el Perú se encuentra a la cola en América Latina, en todos los indicadores. El cierre de los canales de movilidad, entre los cincuenta y hasta los 70, bloquearon la incorporación económica y social de las movilizadas masas populares, condicionando el desarrollo de la subversión.

y estilos patrimoniales, se reforzó la exclusión y el antagonismo político para la distribución prebendaria de los recursos públicos entre segmentados sectores sociales.

Los jefes siguieron designando las direcciones de los partidos y los candidatos al Parlamento entre sus fieles seguidores. Los resultados electorales de 1980 y 1985 permitieron a Belaunde y García contar con domesticadas mayorías parlamentarias que les otorgaron amplios poderes legislativos determinando que, en los hechos, el régimen fuera eminentemente presidencialista.

Estos recursos otorgaron al Ejecutivo y a las directivas partidarias, que monopolizaron en cada periodo las directivas de las cámaras legislativas, los medios para patrocinar a sus partidarios, allegados, familiares y amigos en posiciones claves en las distintas instancias de la administración pública, el poder judicial, las empresas públicas e incluso en las privadas. De esta manera la "vara" era condición para el acceso a los recursos prebendarios del Estado, lo que derivaría en corrupción y cinismo.

Estos factores se conjugaron para que los gobernantes no se vieran precisados a dar cuenta de sus actos ni a mantener un sentido de responsabilidad pública (accountability) , ni se sintieran en la obligación moral de hacerlo. Ni hacía mayor falta, en tanto contarán con el sustento personal de sus dependientes . Pero, los limitados recursos estatales y la proliferación de actores y demandas incontrolables concurrieron para socavar los gobiernos de Belaunde y García ; además, ello, el desarrollo de la

subversión y el narcotráfico, provocaron finalmente la bancarrota del régimen político.

Belaunde se decidió por una política tibiamente liberal, que contradecía frontalmente las promesas y las esperanzas pluralistas del mandato electoral, produciendo una reacción violenta de diferentes sectores "traicionados". El deterioro económico y la eclosión del sector informal, dieron paso al relanzamiento del radicalizado movimiento popular pero que se vió ineficaz para doblegar la voluntad del gobierno. A ello se sumaron fenómenos naturales y la crisis de la deuda, la subversión y la violación de los derechos humanos para completar un cuadro de desastre general. Un renombrado historiador diría que en 1983, el país vivía el peor momento de la historia de los cien años; pero como se vería luego, el país no cesaría de empeorar.

Paralelamente a la masiva deserción a los partidos de gobierno, la población se volcó en favor de las organizaciones de centro-izquierda. La permanente competencia y fisuras en la dirección de la Izquierda Unida y el carácter corporativo y sectario de cada una de las agrupaciones que la constituía le impidieron ganar una audiencia plural. En cambio, el unificado partido aprista y su nuevo Jefe, Alan García, ganaron el sustento mayoritario en razón de su proyecto nacionalista y pluralista.

Después de diez de persistente crisis económica, la puesta en marcha de una política "heterodoxa", en contra de la opinión y voluntad de los organismos financieros internacionales, tuvo un éxito resonante que le valió a García recabar el respaldo casi

unánime de la población. La restricción del pago de la deuda le otorgó recursos que destinó a la expansión económica, distribuyendo indiscriminadamente subsidios e incentivos, satisfaciendo a todos y sin que nadie tuviera que cargar con el costo. El apoyo universal le permitió a García volcar su irrefrenable voluntarismo en todas direcciones, pasando por encima del ordenamiento institucional y partidario, estableciendo una comunicación directa con las masas. Por esas medidas y la clara personalización del poder, García se identificó con los típicos liderazgos populistas.

Pero la defensa cerrada del mercado interno - y el consiguiente freno a las exportaciones - desembocó rápidamente, como en anteriores ocasiones, en el rápido agotamiento de las reservas internacionales, sin que se advirtieran signos de reinversión de las utilidades. Al contrario, la sobrevaloración de la moneda y la incertidumbre por el resultado de la heterodoxia, impulsaron las importaciones y la masiva exportación de capitales complicando más aún la situación fiscal.

García rechazó las repetidas advertencias sobre el inminente peligro de rebrote inflacionario e insistió en su política que tantos réditos le había otorgado; su voluntarismo y preferencia por sus amigos en la distribución de favores públicos, concitó las críticas entre los apristas desplazados y en la sociedad; el masivo asesinato de presos senderistas y las persistentes violaciones de los derechos humanos crearon varios frentes de oposición a su irremediable soberbia.

Ante estas situaciones, en vez de buscar concordancias con sus opositores, García optó en 1987 por una "fuite en avant", típica de los liderazgos populistas, proponiendo al controlado Congreso la estatización del sistema financiero en la esperanza de acallar las críticas y agrupar alrededor suyo al Apra, la Izquierda Unida y las masas populares. La frontal reacción política de los afectados produjo un terremoto que acabó anulando esa propuesta y condicionó la irrupción del empresariado y de fuerzas liberales que trastornaron la escena política.

El tenaz enfrentamiento determinó que la inflación se desbocara hasta llegar a 7.000% en 1990 y que el alicaído producto cayera en 22% entre 1988-90, paralelamente al desarrollo de una incontenible oleada de conflictos "salvajes" y el literal derrumbe de los servicios públicos. Las organizaciones sociales y políticas, incapaces de canalizar la atención de las impostergables y contradictorias demandas entraron en estado de marasmo, en tanto la Izquierda Unida se fragmentó. Las referencias culturales que dichas instituciones habían otorgado hasta entonces, especialmente a los jóvenes de los sectores populares, perdieron validez contribuyendo al desconcierto y rechazo a la política, pero favorecieron la violencia. Estos factores se conjugaron para que la sociedad rechazara el Estado, que hasta entonces había sido considerado como el *primum movens*. Los repetidos avisos sobre el peligro de "libanización" y descomposición del precario orden estatal parecían cumplirse.

Desde el inicio del régimen constitucional, la subversión y el narco-tráfico contribuyeron al desarrollo del conflictivo escenario político. Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru reflejan vivamente la fragmentación política y social del país, por su reclutamiento, tácticas y objetivos. Ambos grupos se arraigan en la juventud, pero el primero se caracteriza por su origen serrano, rural y "mestizo" - propio del arcaísmo de las regiones donde se concentra la extrema pobreza - y se proyecta a esas poblaciones en las ciudades. El segundo, en cambio, tiene su fundamento en las zonas costeñas, urbanas y "criollas". En tanto el primero se inspira en el maoísmo, el segundo lo hace en el fidelismo. Esos contrastes derivan en una sangrienta competencia por la "hegemonía" revolucionaria y el control de los recursos provenientes del tráfico de drogas del Huallaga, donde se produce el 60% de la coca del mundo.

Las repetidas y fallidas experiencias de incorporación de las demandas populares en el Estado, en condiciones de creciente participación política y cultural de la juventud, condicionaron que durante los años setenta se desarrollaran organizaciones izquierdistas y penetraran en este segmento social. Pero mientras las organizaciones que contaban bases urbanas se acomodaron a las reglas constitucionales para la consecución de las demandas corporativas de sus integrantes, los grupos marginales - tanto los de SL como los del MRTA - reivindicaron las consignas revolucionarias levantadas durante las décadas pasadas y se aferraron a la pureza doctrinaria que otros "traicionaban".

En ello contribuyó la débil presencia y desatención del Estado a las regiones periféricas, como es la sierra peruana. Por esa misma razón durante los primeros años no se les prestó atención, en tanto sus acciones se concentraban en el alejado medio rural. Pero el incontenible crecimiento del terrorismo urbano y la penetración de esos grupos, y muy particularmente de SL, en los pauperizados barrios de Lima y otras ciudades importantes han sido motivo para que los medios políticos y la opinión pública reconozca tardíamente su decisiva influencia. Los 25.000 muertos, la destrucción de instalaciones por un valor equivalente a 22.000 millones de dólares - equiparable a la deuda externa - y la inseguridad pública se han combinado para hacer de este tema un asunto de especial relevancia política y económica.

Pero también la férrea organización de SL para convertirla en una "máquina de guerra", fundada en el total sometimiento a Guzman, el uso del terror a todos los que se le oponen y su escolástico discurso, que coincide con el arcaísmo cultural y la descomposición social que predomina en las capas donde logra penetrar, constituyen la otra cara de la importancia adquirida por esta organización.

Sin embargo, los dos gobiernos que se sucedieron durante los años ochenta, se negaron a desarrollar una estrategia de concertación política para enfrentar colectivamente este problema y derivaron en las fuerzas armadas la responsabilidad de su represión. El control militar sobre la mitad del territorio y la consiguiente restricción de los derechos constitucionales colaboraron en el continuo incremento de las violaciones de los derechos humanos, haciendo que

en los últimos cuatro años el Perú encabece la lista de los países por el número de desaparecidos. Esto ha llevado a múltiples protestas por organismos nacionales y extranjeros, estableciéndose una permanente confrontación política con los militares.

Es así como en el curso de diez años, la vigencia de las viejas formas de hacer y pensar la política contribuyeron para que el Perú sufriera varias quiebras que acabaron haciendo trizas el débil entramado institucional y estatal.

3. Liberales, independientes y tecnócratas.

A mediados de los ochenta, Hernando de Soto en "El Otro Sendero" inició una eficaz crítica liberal del orden "mercantilista" que, ante la debacle producida por García cobró inusitada validez. En efecto, entonces se hizo evidente que el acceso privilegiado de personas e intereses corporativos en el Estado frenaban el desarrollo de las iniciativas individuales, determinando el derroche de los recursos públicos entre los beneficiados por el poder y propugnando la corrupción de los funcionarios. La irresponsabilidad de los gobernantes ante la sociedad, en tanto "dictadores electos por cinco años", sería causal del desarrollo de actores y comportamientos "informales", que se distanciaban y rechazaban las formalidades legales impuestas por el Estado.

Estas consideraciones en favor de la reducción y desregulación del Estado, se desarrollaron en la campaña que Vargas Llosa emprendió contra García y luego para las elecciones de 1990. Pero si

recibió el fervoroso respaldo de dos de las tradicionales organizaciones políticas , los empresarios y las clases medias, ello no se debió a la impugnación que hiciera a sus prácticas mercantilistas, sino a sus virulentos y eficaces ataques a las reivindicaciones nacionalistas y distributivas.

Sus tajantes postulados para realizar drásticas medidas de ajuste y su clara afiliación con los "blancos y ricos" representados en los partidos que lo acompañaban, de un lado, y el desprestigio del Apra y las izquierdas, por el otro, derivó en la preferencia popular por un desconocido candidato independiente que planteaba vagas fórmulas para sacar al país del atolladero - honestidad, trabajo y tecnología - . Mientras Vargas Llosa, con el abierto apoyo de la Iglesia y los medios de comunicación recibió los votos de los segmentos de altos y medios ingresos, Fujimori gozó del respaldo de campesinos, "informales" de la ciudad, trabajadores, capas medias pauperizadas y evangelistas. La derrota del insigne y laureado escritor, dió pábulo para que se desarrollaran expresiones racistas contra las "ingorantes" masas que habían preferido a un desconocido hijo de inmigrantes japoneses que, además, no contaba con una clara propuesta y un plantel de técnicos para sacar al país adelante. Estas hostiles reacciones y el que no contara con mayoría parlamentaria anticipaban situaciones de profunda inestabilidad política.

Sin embargo, con una habilidad propia de un tradicional y experimentado político, Fujimori fue creando lazos de apoyo, mientras se rehusaba a tejer alianzas políticas que lo

comprometieran ,y neutralizando oposiciones. Ello le otorgó un sorprendente margen de autonomía, que le permitió asumir comportamientos tecnocráticos y autoritarios que desembocaron en el golpe del 5 de abril de este año.

La asesoría de un pequeño y secreto cenáculo de amigos y familiares lo vincularon con las fuerzas armadas. El coincidente aislamiento y oposición de Fujimori y la oficialidad con respecto a los partidos, y la defensa que hiciera de ellos contra los ataques de las organizaciones de derechos humanos consolidó esa alianza. Simultáneamente el Presidente hizo profesión de fe católica, dejando en claro su distanciamiento con los evangelistas, despejando los temores de la autoridad eclesiástica. De esta manera Fujimori ganó el respaldo de las instituciones tutelares...

Frente a las dramáticas restricciones legadas por el anterior gobierno , las recomendaciones y las propuestas de apoyo del gobierno japonés, norteamericano y los organismos multilaterales para colaborar en el saneamiento económico determinaron que Fujimori decretará un violento paquete de medidas estabilizadoras, similar a las que Vargas Llosa había propuesto llevar a cabo.

Para llevar a cabo esta medida contó con un gabinete de técnicos, entre los que se encontraban adeptos de las izquierdas moderadas y con el entusiástico respaldo de los parlamentarios plegados al liberalismo y de los organismos internacionales. Pero, de otro lado, Fujimori supo acallar la irritación de la burlada población, responsabilizando a los gobiernos anteriores por la catástrofe nacional ; la liberalidad de la justicia con los acusados por

terrorismo y narcotráfico , fueron motivos para que atacara frontalmente la administración de justicia; las denuncias contra altos funcionarios del gobierno aprista por estar involucrados en manejos dudosos, dieron pie para que Fujimori atacara el favoritismo político de la "partidocracia".

De un lado, las promesas de apoyo externo y, de otro, las condenas del Presidente al ordenamiento partidario y estatal, así como su decisión para revertirlo totalmente concitaron el mayoritario aplauso público, reiteradamente manifiesto en las encuestas de opinión, a pesar de la dureza de las medidas económicas, convirtiéndolo en el intérprete de las frustraciones y esperanzas del "pueblo" . Estos ininterrumpidos ataques de Fujimori contribuyeron para que la tan mentada "crisis de la clase política" y "el divorcio entre sociedad y Estado" a la que intelectuales hacían constante alusión, se arraigara en la conciencia pública.

A pesar que Fujimori no contaba con mayoría parlamentaria, el Legislativo le otorgó sostenidamente los poderes que solicitaba para avanzar en la reestructuración liberal . Pero, conjuntamente con ello, el Congreso asumió una desconocida conducta fiscalizadora de la política económica y del comportamiento de los militares .El reiterado rechazo del Ejecutivo a las propuestas del Legislativo para establecer coordinaciones que contribuyeran a una relación constructiva condicionaron el desarrollo de tensiones entre los poderes , que Fujimori se encargó de agudizar al establecer un curso de colisión, en la seguridad que el desprestigio de las instituciones políticas estaban a su favor.

La percepción que el Legislativo, los tribunales, el Banco Central, la Contraloría, donde se encontrarían enquistados los intereses de la partidocracia, coactaban la aplicación de las medidas económicas y la pacificación del país acorde con los planteamientos militares, impulsó a Fujimori a decretar la suspensión de la Constitución y emprendiera una depuración de la administración pública, colocando a un nuevo personal incondicional, repitiendo la práctica que criticaba. La eliminación de la "partidocracia" para fundar una democracia "real", contó con la directa colaboración de los militares y del generalizado respaldo de la población.

Las presiones internacionales y la interrupción de los flujos económicos internacionales, indispensables para la continuidad de la ortodoxia, obligaron a Fujimori convocar elecciones para el Congreso Constituyente Democrático (sic) en noviembre de este año. El relativo éxito de la lucha contra la inflación y la creación de un horizonte de estabilidad económica, el indiscutido éxito en la captura de Guzman y de otros importantes dirigentes de Sendero, han determinado que la popularidad de Fujimori se mantenga entre el 65% de la población. Ello y el abierto apoyo gubernamental a la lista oficial aseguran el probable triunfo político de Fujimori, en tanto que las cúpulas partidarias, en unos casos, se abstienen de participar en estas elecciones - puesto que sus resultados desnudarían su aislamiento - y en otros casos persisten en presentarse fragmentadamente.

En estas condiciones, son muy débiles las perspectivas de la constitución de nuevos actores y la reformulación de proyectos

democráticos . En cambio, se perfila una suerte de regimen plebiscitario, paralelamente al mantenimiento del estado bélico, en el que las fuerzas armadas parecerían llamadas a hacer las veces de partido oficial , mientras que los tecnócratas y empresarios asumirían la organización de la economía.

SEMINARIO

**TRANSFORMACIONES SOCIALES Y ACCIONES COLECTIVAS
AL FINALIZAR EL SIGLO XX: BALANCES Y PERSPECTIVAS**

**Movimientos sociales y pugnas por la democracia
en Chile y México**

Jean François Prud'homme

**Seminario organizado por el Centro de Estudios Sociológicos de
El Colegio de México, del 11 al 13 de noviembre de 1992**

MOVIMIENTOS SOCIALES Y PUGNAS POR LA DEMOCRACIA
EN CHILE Y MEXICO.

(Versión preliminar y abreviada)

Jean Francois Prud'homme
ILET

Todo proyecto de investigación tiene circunstancias históricas y académicas que orientan sus objetivos y perspectivas de explicación de la realidad. En el verano de 1988 al calor de las movilizaciones que caracterizaron a la elección presidencial mexicana y en el clima de entusiasmo que precedió el plebiscito constitucional chileno, el ILET de México, SUR de Chile y el Instituto de Sociología de la Universidad de Hannover emprendieron un proyecto de investigación sobre el papel de los movimientos sociales en las pugnas por la democracia en ambos países latinoamericanos. Conscientes de la especificidad de cada uno de los casos nacionales que se reflejaba entre otras cosas en una historia institucional distinta, en las formas particulares que adquiría el comportamiento autoritario en los regímenes estudiados, en el papel diferenciado de los respectivos sistemas de partidos nacionales y por supuesto, en la existencia de culturas y prácticas políticas también muy definidas, los participantes en el grupo de investigación estimaron que la alta visibilidad y la sincronía de los procesos que tomaban lugar en ambos países justificaban el esfuerzo de comparación.

Inmersos en el clima intelectual de las ciencias sociales latinoamericanas que buscaban reencontrar a los sujetos perdidos e imaginar el contenido y las formas de un orden democrático deseado, enfocamos en un primer momento nuestra investigación hacia el problema general de la traducción del orden social en el orden político. Por ello, elegimos estudiar el papel de los

movimientos urbano-popular, ~~femenilo~~-feminista y sindical~~es~~ en el proceso de cambio político. Desde convicciones e intereses naturalmente diversos en un grupo de trabajo amplio, formulamos preguntas acerca de los factores que alentaban el surgimiento de demandas democráticas, de la posibilidad de mantener una autonomía supuesta o declarada de los movimientos estudiados, de los procesos de creación de identidades sociales restringidas, de la capacidad de articulación entre demandas heterogéneas, ~~del~~ impacto de las estrategias y formas de acción colectivas sobre el marco institucional y finalmente, de las modalidades de convergencia de dichos movimientos en un proyecto político alternativo. Como se puede percibir en esta breve enumeración de nuestros intereses de estudio, estábamos muy influidos por el clima imperante en la reflexión y/o investigación sobre el tema en América Latina. Hacíamos énfasis en el actor y le adjudicábamos una pureza, una voluntad, una capacidad de cambio y de innovación social y política que tendían a hacer caso omiso de la tradición y del contexto social e institucional en el cual actuaba. Me parece importante mencionar ese prejuicio favorable inicial porque creo que permite ilustrar un proceso por el cual han transitado muchas investigaciones sobre el tema en los últimos años. Y me es más fácil hacerlo porque rápidamente cambiamos el enfoque del estudio haciendo énfasis en las relaciones que se establecían entre dichos movimientos y el ámbito de la institucionalidad política poniendo en evidencia la multiplicidad de lógicas de acción colectiva que estaba en juego.

Como todos sabemos, la investigación sobre los movimientos sociales en América Latina a lo largo de la década pasada tendió a apoyarse en premisas que idealizaron a los actores populares. Esta idealización tiene por supuesto una explicación que reside en parte en las situaciones concretas por las cuales atravesaban varias sociedades latinoamericanas que vivían procesos de democratización y en parte en el contexto de incertidumbre y de innovación que marcaba el desarrollo de las ciencias sociales.

En primer lugar, y me parece aquí repetir obviedades, la tan aludida crisis de los paradigmas propició una búsqueda del sujeto perdido: los cambios que afectaron a las estructuras productivas formales así como la negación de la actividad política en muchos países restaron visibilidad a los sujetos predilectos de la sociología y de la ciencia política que eran las clases sociales y los partidos políticos con proyecto ideológico.

En segundo lugar, las luchas contra el orden autoritario pusieron en evidencia actores sociales cuyas estrategias se apoyaban más en la movilización y en la participación que en su desempeño en el sistema político formal. Dichos actores fueron calificados de nuevos, en parte porque respondían a cambios en las condiciones sociológicas de las sociedades estudiadas pero también en parte porque adquirirían una visibilidad que no habían tenido antes. Insisto en la palabra visibilidad porque creo que

muchos de ellos habian tenido presencia desde hace mucho tiempo en sus respectivas sociedades. Lo que cambiaba en las situaciones de transición era la importancia que adquirian en el proceso de movilización contra el orden autoritario: ello se explica en parte por la ruptura de las mediaciones existentes entre el sistema politico formal y los grupos sociales organizados.

En tercer lugar, el papel protagónico acordado a esos nuevos sujetos sociales se insertaba dentro de una visión peculiar de la democracia. El orden democrático deseado se basaba en una visión un tanto rousseauiana de la democracia: es decir que habia que reinventar una noción pura de pueblo que casi sin mediaciones expresaba su voluntad general en un nuevo orden democrático. Esos movimientos, aparentemente espontáneos y desvinculados de los aparatos politicos tradicionales y de la institucionalidad politica formal, se presentaban como los vehiculos ideales de expresión politica de nuevas formas de sociabilidad. Exagerando un poco, en muchas interpretaciones de su acción colectiva subyacia una cierta idea de pureza, de esencia popular. Constituian una alternativa frente a una clase politica desacreditada y se erigian como pilares de la democracia deseada. De alli, la insistencia en su autonomia y en la novedad de sus prácticas politicas.

Y finalmente, aún en el reconocimiento de su diversidad que se expresaba en identidades restringidas el problema de la articulación de sus demandas y prácticas culminaba hacia la creación de un nuevo proyecto político global. Es decir que la aceptación de una pluralidad de colectividades o comunidades terminaba de nuevo en la búsqueda de la totalidad: más precisamente, se buscaba pensar a partir de ellas la producción de grandes proyectos políticos nacionales. Además esas identidades restringidas aparecían como dadas sin que se indagará mucho sobre sus procesos de producción, sobre la relación entre el individuo y el movimiento.

Por supuesto que esta demasiada breve presentación de un paradigma que estuvo en gestación en la década de los años ochenta no hace justicia ni a las investigaciones ni tampoco a los problemas estudiados en torno al tema de los movimientos sociales. Muchos de los temas aquí mencionados siguen siendo de alta relevancia y continúan ^{permanente} la investigación sobre movimientos sociales y democratización en América Latina. El cambio reside más en el hecho de que el optimismo haya cedido lugar a programas de investigación que toman en consideración una mayor gama de variables y que ponen en evidencia las inercias propias a los fenómenos de continuidad social y a la dura realidad de las relaciones políticas.

Por lo tanto, en nuestro estudio, llegamos a privilegiar la relación que se establecía entre los movimientos sociales y el marco institucional. Boschi, Foweraker, Escobar y Alvarez entre otros han insistido en la importancia de esta dimensión en el estudio del tema. Esta perspectiva permite plantear el problema de la autonomía de los movimientos sociales de manera relativa: el mismo hecho de entrar en relación con el estado o con el sistema político formal para lograr la satisfacción de demandas tiene efectos de institucionalización de las relaciones que repercuten tanto en la organización interna como en las estrategias de los movimientos sociales. En sentido inverso, los actores participantes en el marco institucional formal (agencias del estado, partidos políticos, etc.) también tienen que adecuar sus estrategias a la acción desplegada por los movimientos sociales.

Esta situación de interdependencia institucional plantea por supuesto el problema de la autonomía de los movimientos sociales que está estrechamente vinculado a las formas de acciones colectivas y a lo que podríamos calificar de recursos institucionales de los sistemas políticos considerados.

En el primer caso, hemos encontrado que en los procesos de transición tienden a coexistir varias formas de acción colectiva que se acercan a lo que O'Donnell califica metafóricamente de "zonas cromáticas" de relaciones políticas. En cada uno de los

movimientos estudiados, y de manera más pronunciada en México que en Chile, hemos identificado tres lógicas de acción colectiva que tienden a coexistir: a defecto de precisar con más exactitud la tipología, las hemos denominado populistas, ciudadanas e híbridas. Estas formas de lógicas de acción colectiva se complementan a veces en función del ámbito de acción del movimiento: por ejemplo, en el caso de movimiento urbano popular las relaciones internas en el movimiento tienden a reproducir una lógica populista mientras que las dirigencias tenderían a asumir en ciertas de sus relaciones con el sistema político una lógica más ciudadana. Varios elementos cuentan en la determinación de los tipos de acción colectiva:

1) La naturaleza misma de las demandas o de los intereses que justifican la existencia de los movimientos. La producción de lógicas de acción colectiva de carácter ciudadano encontraría más dificultades en movimientos cuya actividad está basada en la consecución de satisfactores básicos. En este caso, la actividad de gestoría tiene que ser acompañada de un discurso político de carácter ciudadano que logre vincular la consecución de dichos satisfactores con un universo simbólico de derechos universales.

~~En los casos que~~ los movimientos de carácter ético que buscan la consecución de bienes simbólicos estarían más propensos a la acción de carácter ciudadano.

Pero aún así, con la excepción quizás de los movimientos orientados hacia la promoción de los derechos humanos, dichos movimientos no se limitan solamente a la consecución de bienes simbólicos. (re: movimiento femenil, feminista).

2) El tipo de sociabilidad a partir de la cual se constituye la identidad del movimiento. Hablar de identidad significa entre otras cosas referirse a la producción de sentido, la que a su vez se apoya en formas específicas de relaciones interpersonales. El movimiento urbano popular, por ejemplo, tiende en fundamentarse en redes complejas de relaciones de reciprocidad que hacen énfasis más ~~en~~ la participación y ~~en~~ la pertenencia que ~~en~~ la representación. En este caso, hay que reconocer el peso de la tradición y de la continuidad en las formas de sociabilidad y tratar de identificar y de evaluar los componentes de cambio.

3) Las formas políticas de organización interna de los movimientos. El argumento de la espontaneidad y de la pureza social (desconectada de la intervención de agentes externos) de los movimientos parece en muchos casos no resistir al examen empírico. El mundo popular ha sido tradicionalmente, y con justificación, ~~un~~ terreno de organización y de proselitismo por parte de diferentes organizaciones políticas. En este sentido, sus dirigentes en muchos casos responden ~~en parte~~ a lógicas de acción que están motivadas parcialmente por imperativos externos a los movimientos. Se trata de una relación compleja que se

refleja en tensiones en cuanto a la autonomía del movimiento y que tienen efectos diferenciados en función del contexto político global en el cual operan: en ciertos casos pueden provocar la desaparición de los movimientos (re: pobladores en Chile) mientras que en otros favorecen un incremento de su eficiencia en la consecución de sus demandas.

4) Y finalmente, hay que considerar los recursos institucionales de los sistemas políticos. Aquí incluiría tanto a los mecanismos tradicionales de articulación y de agregación de intereses como a la capacidad de generar nuevos canales de intermediación entre el universo político y el universo social y también a las características asumidas por las pugnas por la democracia en el sistema de partidos. Sin extenderme más sobre este punto, llama la atención el hecho de que en el caso chileno el declive del protagonismo de los movimientos sociales sea atribuido al tipo de consenso logrado por los partidos políticos en la restauración del orden democrático: el realineamiento hacia el centro de las fuerzas políticas así como su capacidad tradicional de control de las organizaciones sociales restó protagonismo y visibilidad a los movimientos sociales. En el caso mexicano, el reestablecimiento de mediaciones de corte clientelista entre el Estado y los sectores populares habría contribuido también a un cierto retroceso de los movimientos sociales en la vida pública. En ambos casos, este punto requiere de mayor análisis.

Para concluir, insistiría en dos aspectos 1) por un lado, el estudio de los movimientos sociales y de las formas de acción colectiva requiere tomar en consideración varias dimensiones que indudablemente nos llevarán hacia investigaciones más específicas que tomen en consideración lo que llamaría el cambio de las condiciones sociológicas generales de una sociedad: por ejemplo, en el caso de nuestra investigación llegamos a la conclusión de que habría un aspecto vinculado a la producción de sentido y a la cultura en general que habría que trabajar para entender mejor nuestro tema de estudio. En este sentido, habría que renunciar a la percepción heroica que marcó el estudio de la gesta de los movimientos sociales en los años ochenta; 2) en la misma línea de pensamiento, habría quizás que revalorar el papel de los movimientos sociales en la producción de un orden democrático. En lugar de insistir en su rol de protagonistas directos y permanentes de la vida política, quizás habría que valorar su capacidad de problematizar políticamente aspectos de la vida social: ello constituye en sí una mayor garantía de su autonomía.

SEMINARIO

**TRANSFORMACIONES SOCIALES Y ACCIONES COLECTIVAS
AL FINALIZAR EL SIGLO XX: BALANCES Y PERSPECTIVAS**

**El abrigo de Arturo Alessandri:
populismo, estado y sociedad en América Latina, Siglo XX
Alan Knight**

**Seminario organizado por el Centro de Estudios Sociológicos de
El Colegio de México, del 11 al 13 de noviembre de 1992**

El abrigo de Arturo Alessandri: populismo, estado y sociedad en América Latina, siglo XX.

Como historiador, si bien especialista en la historia moderna, participo en esta reunión de politólogos con cierta ansiedad. Por definición, los historiadores se preocupan del pasado, no del presente, y mucho menos del futuro. De costumbre, eligen temas particulares, que pueden investigarse en los archivos, más que grandes generalizaciones que requieren síntesis de estudios publicados. Según la jerga, la historiografía, el estudio de la historia, es una práctica idiográfica, más que nomotética. Por supuesto, hay excepciones, pero esos historiadores excepcionales que niegan a especializarse, y que ceden a la tentación de generalizar, son a veces víctimas del 'juicio de sus pares' que Hexter considera la regla dominante - el superego colectivo - del gremio de historiadores (Hexter, 1971: 82). De hecho, para ciertos críticos severos, toda tacha de sociología es sospechosa; solamente los historiadores idiotas rechazan la metodología idiográfica (Cobb, 1969: 120-1). Como, al mismo tiempo, los historiadores que arriesgan generalizaciones no siempre reciben la aprobación de los politólogos - que tienen que defender su propio terreno - aquéllos pueden caer víctimas ante un fuego arrollador enfilado: por un lado, de otros historiadores, bien dotados de municiones empíricas, que apuntan a sus generalizaciones, y por el otro, de politólogos rigurosos, que bombardean el eclecticismo y la ingenuidad teóricos del historiador.

Frente a estos peligros, el historiador está tentado de retirarse a su bunker - ese pequeño y cómodo refugio, cavado dentro del terreno hostil - donde puede mantener la cabeza baja. En mi caso, por ejemplo, yo estaría bien dispuesto a limitar esta ponencia, y mi papel en esta discusión, a la Revolución Mexicana de 1910-20 (el tema de mi investigación anterior) y al régimen Cardenista de 1934-40 (mi investigación actual). Sin embargo, los requisitos de esta reunión son diferentes. Además, es al menos concebible que la reunión pueda sacar provecho de un enfoque más amplio y ambicioso. En primer lugar, porque la historia a veces puede servir para modificar las generalizaciones o teorías demasiado comprensivas o infundadas (y, si bien una sola excepción no condena una teoría, toda una serie de excepciones sí lo haría); y, en segundo lugar, porque una perspectiva histórica puede iluminar las continuidades y los ciclos que podrían quedar ocultos ante los observadores demasiado concentrados en el presente. Así, tendencias que se consideran muy novedosas, o permanentes, a veces - no siempre - son de hecho bastante tradicionales, cíclicas, o efímeras. Y si bien sería erróneo proclamar que 'no hay nada nuevo bajo el sol', no es menos importante resistir la tentación de cada generación de volver a descubrir - con mucha fanfarria - el Mediterráneo.

En búsqueda de un balance entre las oportunidades y los peligros de la generalización, decidí concentrarme en el fenómeno/concepto de populismo, vinculándolo a una breve discusión histórica sobre el estado y la sociedad civil en América Latina, especialmente en México, en el siglo veinte. ¿Por qué el populismo? En primer lugar, porque es un fenómeno ubicuo y un concepto controversial: 'elusivo y recurrente'; 'la experiencia más notable' del periodo 1930-70; 'la creación más original de América Latina en el siglo veinte'; 'uno de los enigmas no resueltos de la historia y la sociología latinoamericanas' (Laclau, 1977: 142; Ianni, 1975: 9; French, 1992: 4; Grugel, 1992: 170). Como tal, debería estimular un cierto grado de debate. En segundo lugar, en la actualidad el populismo es una palabra grosera: 'el vocablo más infeliz de la época', según dice Cordera; y quizás para los que nunca han dejado de ser jóvenes, las palabras groseras poseen cierto encanto (Cordera, 1991: 142; Grugel, 1992: 170).¹ En tercer lugar, actualmente muchos expertos consideran que el populismo está muerto y enterrado (Drake, 1982: 217); y, si en los Estados Unidos, la muerte y los difuntos son cosas que se prohíbe mencionar en la buena sociedad, no es lo mismo en México, sobre todo en el mes de noviembre. Además, los historiadores pasan sus días asociándose con los muertos, y no tienen ningún remordimiento en intentar – podríamos decir – la resurrección de Lázaro. En cuarto y último lugar, tenemos aquí un punto teórico importante e interesante. Los que condenan al populismo y afirman con toda confianza su muerte, a veces van más lejos, niegan la utilidad de la historia y abrazan 'lo nuevo', 'lo moderno', 'la modernidad' – las supuestas antítesis del populismo (Villa, 1991: 213). La marcha de la modernidad, nos dicen, ha dejado muy atrás la política primitiva de populismo; así, dejan que sus huesos, bien roídos por una bandada de críticos zopilotes, se conviertan en polvo en los cementerios y museos; y, aún cuando hoy día fenómenos de apariencia populista salen a la luz, los descartan por ser atavismos, o los aclaman como algo nuevo, 'moderno', que no tiene nada que ver con el populismo (Knight, 1992a). De una u otra manera, se niega o se malinterpreta la historia; y tenemos frente a nosotros una extraña y estridente lógica hegeliana que, en su forma más extrema (con Fukuyama), proclama el fin de la historia, el triunfo del capitalismo liberal, 'moderno', y la inconsecuencia del pasado tanto para el presente como para el futuro humano (Fukuyama, 1989). Aunque sólo sea por defender su humilde gremio, el historiador tiene que poner en duda esta conclusión y – lo que haré en esta ponencia – ofrecer una breve reconsideración (si no una rehabilitación)² del controversial fenómeno del populismo.

Como otros comentaristas – más expertos – del fenómeno, creo que es esencial una breve discusión de definición, para evitar el riesgo de entrar en el debate con premisas diferentes en vez de compartidas. Como punto de partida, podemos tomar una definición amplia y bastante

típica: el populismo es 'un movimiento político . . . que se basa . . . en amplias movilizaciones de masa extensas a partir de una retórica de contenido fundamentalmente emocional y autoafirmativo, centrado en torno a la idea del "pueblo" como depositario de las virtudes sociales de justicia y moralidad y vinculada a un líder, habitualmente carismático, cuya honestidad y fuerza de voluntad garantiza el cumplimiento de los deseos populares' (Torres Ballesteros, 1987: 171). Más breve y concretamente, con frecuencia se ve al populismo como una especie de política latinoamericana: 'urbana, basada en coaliciones policlasistas, jerárquica, cooptiva, ad hoc, y no-revolucionaria' (Wirth, 1982: ix).

Estas definiciones ofrecen puntos de partida útiles. Sin embargo, por lo menos por tres razones, sería erróneo reificar al populismo: es decir, establecer una definición sencilla pero, inevitablemente, arbitraria y dividir los posibles populismos entre los que satisfacen tal definición y los que no lo hacen. Primero, las definiciones varían; distintos comentaristas enfatizan diferentes criterios. Existen, sin duda, rasgos compartidos dentro de las definiciones rivales, pero todo intento de extraer estos rasgos y erigirlos en criterios canónicos probablemente produciría un denominador común mínimo, carente tanto de precisión como de poder heurístico.³ Quizás sería más útil repasar los posibles casos y dividirlos, según su percibida composición genética, en subespecies, en reconocidas 'familias populistas', tales como los populistas 'agrarios' y 'políticos' de Canovan; o utilizar la tipología tripartita de Drake: estilo político, coalición social y políticas redistributivas (Canovan, 1981: 8-9; Drake, 1982: 218).

En segundo lugar, aún si se llega a un acuerdo sobre los criterios, habrá considerable desacuerdo con respecto a su aplicación empírica. ¿Cuán 'nacionalista' tiene que ser un supuesto populismo? ¿Cuán 'policlasista'? ¿Hasta qué punto tiene que basarse en un vínculo carismático entre líder y adherentes? Lo menos, los criterios acordados deben entenderse como un continuo, de acuerdo al cual determinados casos alcanzan una puntuación 'más alta' o 'más baja'. Es decir, tenemos que evitar una simple clasificación 'positiva/negativa' y hablar, en vez, de grados de populismo (si bien grados que tampoco es fácil calcular).

En tercer lugar, los fenómenos históricos que analizamos no son homólogos. Tenemos que distinguir, como lo han hecho otros, entre los diferentes aspectos del populismo: 'actores, políticas, actitudes, estilos, reacciones' (Drake, 1978: 7). Sería perfectamente posible concebir un líder 'populista' - 'populista' en virtud de su estilo político, su retórica, y su relación con sus partidarios - que no sigue políticas económicas 'populistas'; o, por otra parte, políticas económicas 'populistas' llevadas a cabo por un líder de lo más gris y lo menos carismático - por ejemplo, José Sarney.

Entonces, hay una gama de posibilidades, que pueden co-existir y entretorse en diversas

permutaciones. Algunos analistas desearán conservar una definición más rigurosa y exigente, y aceptar sólo a los candidatos que satisfacen todos los criterios (supuestos).⁴ Otros preferirán condiciones de entrada más relajadas. En fin de cuentas, importa poco: la rosa con otro nombre huele lo mismo de dulce. La tarea importante es estudiar y comparar populismos supuestos, ver cuáles son los elementos comunes que comparten (o no), y sacar cuántas conclusiones útiles podemos de este ejercicio analítico. Detrás de este intento, por supuesto, se encuentra la suposición - o intuición - que el concepto de populismo tiene cierta utilidad; que, a pesar de su imprecisión, no es simplemente una quimera; que, como dice Worsley, 'es posible que la existencia del humo verbal indique que por algún lado hay un incendio' (Worsley, 1970: 219).

La abundante literatura sobre el populismo revela varios enfoques analíticos que manifiestan premisas, definiciones y metodologías distintas. Mencionaré cuatro, sin pretender que esta lista es minuciosa en su alcance o profunda en su presentación. Primero, tenemos los análisis que, aunque no siempre utilizan la palabra, se concentran en el discurso. Para ellos, el populismo es un estilo y una retórica políticos, que recalcan la virtud del pueblo y postulan tanto una polarización entre 'ellos' y 'nosotros' (a veces, extranjeros y compatriotas), como un vínculo estrecho entre líderes y pueblo. Estos análisis pueden ser relativamente sencillos, volviendo a la etimología de la palabra 'populismo'; o pueden ser engalanados de los adornos de la teoría del discurso (Laclau, 1977). En ambos casos, no es que estén equivocados, sino que son minimalistas; admiten demasiados candidatos a su club, sin discriminar entre ellos. Como dijo Marx en una ocasión, no le gustaría pertenecer a un club que acepta como miembros a gente como él.⁵ Después de todo, estos criterios del discurso populista podrían incluir no solo, por ejemplo, a Cárdenas, Perón, y Vargas, sino también a Obregón, Haya de la Torre, Castro, Mao Zedong, Hitler, Joe McCarthy, Mahatma Gandhi, y a la Señora Thatcher (por mencionar sólo a unos pocos). Insisto, esto no es un error; puede tener interés el que líderes políticos y movimientos de gran disparidad compartan determinados rasgos que los distinguen de sus rivales - no menos dispares - que carecen de rasgos populistas (por ejemplo, Calvin Coolidge, Adolfo Ruiz Cortines, Miguel De la Madrid, Raúl Alfonsín, Edward Heath, Sidney and Beatrice Webb, etc.). Y, claro, podríamos intentar colocar a los 'populistas' a lo largo de un continuo, de acuerdo a la intensidad, sinceridad o tenacidad de su discurso populista. Pero sería arriesgado establecer divisiones arbitrarias basadas sólo en el discurso, convirtiendo así al discurso en el fundamento del análisis; por eso, los análisis que se concentran excesivamente en el discurso - si bien son un punto de partida útil - generalmente ofrecen pocas conclusiones productivas.⁶

Un segundo enfoque es, desde ciertos puntos de vista, un reflejo exacto del primero; pero, mientras que aquél le da gran prioridad al discurso, éste hace lo mismo con el concepto de clase. De este modo, el populismo se define otra vez en términos minimalistas: como

movimiento/coalición/ régimen que abarca una gama de clases y no representa la organización autónoma de una sola clase (Di Tella, 1969: 47; Hennessy, 1970: 29; Drake, 1978: 9). El problema más evidente con este enfoque es que la gran mayoría de los movimientos/coaliciones/régimenes políticos abarcan varias clases; pocos - si acaso hay alguno - corresponden al supuesto estereotipo uniclasista que, aún en las formas clásicas citadas (como el Partido Laborista Británico), es bastante dudoso. Es verdad que algunos analistas de clase construyen tipologías complejas de alianzas de clase, que pueden avanzar nuestro conocimiento (Di Tella, 1969); pero las tipologías son muy amplias, poco discriminadoras y, a veces, erróneas. Alegrementemente clasifican una gama enorme de fenómenos, poniéndolos en casillas; y, en caso de duda, agregan algunas casillas más, hasta que toda la estructura empieza a tambalearse bajo el peso de la proliferación de casillas.

Un tercer enfoque, histórico y estructural en su énfasis y muy conocido en la literatura latinoamericana, evita algunos de estos escollos 'minimalistas' y considera al populismo como un gran proyecto sociopolítico, 'populista' desde el punto de vista de su discurso y retórica, pero que también incluye políticas específicas y una coalición específica de intereses que son ellos mismos productos de circunstancias históricas determinadas, empezando en el periodo de la entreguerra. Según esta imagen del populismo 'clásico', el populismo quedó asociado con el surgimiento del modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) y de un estado intervencionista y regulador, adherido a un claro proyecto económico, que generó una retórica populista, y recibió el apoyo de, y a su vez otorgó beneficios a, ciertos grupos sociales, especialmente los obreros urbanos organizados y la burguesía nacional (Ianni, 1975; Weffort, 1978). Así, por un tiempo, el populismo se convirtió en un paradigma predominante - quizás el paradigma predominante - en América Latina; estableció prácticas económicas y políticas que duraron tenazmente desde los años treinta hasta los sesenta, y que no desaparecieron de la escena hasta los últimos veinte años, a medida que el modelo de ISI y las relaciones políticas asociadas a él mermaron. Debido a esto, algunos comentaristas, adoptando la terminología de los arqueólogos mesoamericanos, hablan del populismo 'temprano', 'clásico', y 'tardío', correspondientes muy aproximadamente a los periodos de alrededor de 1900-1930, 1930-70, y pos-1970 (Drake, 1991: 38-9). Y, en forma más general, esta interpretación histórica-estructural del populismo cabe nítidamente dentro del 'patrón modal' más amplio de desarrollo político y económico de América Latina que Roxborough considera (y, creo yo, con razón) como el paradigma dominante en la literatura reciente (Roxborough, 1984).

En la medida que este modelo del populismo combina criterios políticos, económicos e ideológicos, entrelazados con hipótesis sobre la causalidad histórica, ésta es una teoría poderosa, que es al mismo tiempo falsificable y resulta heurísticamente provechosa. Evita tanto el

minimalismo de la teoría del discurso y las tipologías sencillas de los análisis de clase; además, tiene cierto atractivo para los historiadores porque involucra tanto la comparación como la causalidad (no sólo dice en qué consiste el populismo, sino que también trata de explicar su razón de ser).

Sin embargo, tiene dos desventajas, que pueden preocupar al historiador y al politólogo respectivamente. En primer lugar, no está claro que sea empíricamente válida. Aquí, permítanme retirarme a mi bunker ya preparado. El cardenismo es muy distinto de los otros populismos 'clásicos', con los que se le compara - en vez de contrastarlo - frecuentemente (Ianni, 1975: 19, 107). El cardenismo tenía una fuerte base rural; ni el peronismo ni el varguismo la tuvieron.⁷ Cárdenas expropió a una gran parte de la clase terrateniente; Perón sólo antagonizó (y luego apaciguó) a los estancieros argentinos; Vargas co-existió pacíficamente con la elite terrateniente brasileña. La afirmación frecuente que el populismo latinoamericano es fundamentalmente urbano, entonces, no convence fácilmente al historiador del cardenismo (Conniff, 1982: 3, 15; Drake, 1991: 39). Además, el retrato del cardenismo como una alianza policlasista, basada en la sumersión de los intereses de clase, es discutible (sobre todo para el periodo 1934-38); como lo es la aseveración que el liderazgo cardenista provenía de 'una clase media o clase media alta descontenta y desarraigada' o que el régimen respondía a los intereses de los 'estratos más altos de la burguesía' (Hennessy, 1975: 153). La mayoría de la burguesía mexicana y una gran parte de la clase media urbana abominaba a Cárdenas. El año milagroso de 1938 vió un cierto cambio; pero fue una medida táctica de parte del gobierno y de sus antiguos enemigos; no constituyó una tierna comunión nacionalista y policlasista (Knight, 1993).

Lo mismo ocurre, hasta cierto punto, con el peronismo, sobre todo hasta fines de los cuarenta. El peronismo despertó una vigorosa oposición por parte de la elite y de la clase media y, si bien no revolucionó la sociedad argentina, desafió - y desde ya no simplemente reprodujo - el status quo sociopolítico. (James, 1988). Algunos también pondrían en duda la imagen del varguismo como una forma de manipulación controlada, de arriba hacia abajo, de los obreros urbanos, en beneficio del estado y de la burguesía nacional, y subrayarían en vez la gestión autónoma de los obreros y su capacidad de extraer verdaderas ganancias del estado 'populista' (French, 1992). En parte, el problema aquí se debe a una tendencia hacia la dicotomización simplista, que descarta todo desafío político que no sea abiertamente revolucionario o socialista calificándolo de mero reformismo, que en realidad apoya al status quo. Una crítica histórica de esta tendencia advertiría (a) que con frecuencia la gente de la época no pensaba así y, en efecto, a menudo veía al 'mero reformismo' con grandes esperanzas o con puro horror; (b) que con frecuencia el 'mero reformismo' trajo cambios significativos, aunque incrementales; y (c) que las imágenes opuestas entre las masas manipuladas de América Latina - los peones del populismo

- y las clases autónomas y conscientizadas de Europa - los soldados del socialismo - son exageradas y probablemente basadas en una interpretación errónea de la historia europea.

Así, dentro del contexto latinoamericano, la investigación reciente 'revisionista' (¿o 'posrevisionista'?) ha tendido a poner en duda las nociones de manipulación por parte de la elite y de alianzas de clase armoniosas, subrayando en vez la dinámica interna e inestable de las coaliciones populistas, el papel autónomo relativo de la clase trabajadora (y, en México, del campesinado), los límites de la manipulación de arriba hacia abajo, y, por tanto, la fragilidad de las alianzas nacionalistas y policlasistas que se supone apuntalan los regímenes populistas clásicos (Knight, 1990). Si aceptamos las investigaciones recientes, entonces tenemos dos opciones: por un lado, tolerar ciertas desviaciones sustanciales del patrón modal; o, por otro, reconsiderar a fondo ese patrón.

Aparte de estos debates esencialmente históricos, queda el problema del politólogo. Muchos análisis, como dije, consideran el populismo clásico como artefacto de museo. Según ellos, fue perdiendo gradualmente su dinamismo, su razón de ser, y su capacidad de auto-reproducción; acabó en la intervención militar, el desmoronamiento del ciclo de i.s.t., el neoliberalismo y la democratización de los años ochentas. A lo más, fue 'una solución lógica pero transicional a las crecientes presiones sociales' durante un periodo histórico concreto (Wirth, 1982: xi). De ahí, los frecuentes obituarios del populismo 'clásico'; las afirmaciones terminantes que acabó irrevocablemente en el basurero de la historia. De esta forma, el populismo no tiene futuro y sigue siendo un objeto de curiosidad anticuaría. Los historiadores pueden preocuparse por lo que pasó, digamos, en los años treinta o en los cuarenta; pero, si el propio animal está extinto y sobrevive solamente como trofeo disecado que adorna las salas neoliberales y democráticas del continente, entonces los politólogos pierden su tiempo cazándolo.

¿O no? La teoría más conocida del populismo clásico es una teoría histórica y estructural, que coloca su objeto en los años treinta y cuarenta. Recientemente se ha propuesto otro modelo, más estrictamente económico y coyuntural. Me refiero al modelo de Dornbusch y Edwards que - cualesquiera sean sus méritos - al menos tiene la ventaja de preocuparse con fenómenos más o menos contemporáneos, es decir, con animales vivos en vez de trofeos disecados.⁸ Según Dornbusch y Edwards, las políticas macroeconómicas muestran un comportamiento constante, que incluye 'presupuestos deficitarios, controles generalizados, y un desprecio de equilibrios económicos'; estas políticas pasan por etapas distintas, y culminan en crisis macroeconómicas que perjudican a los pobres - los supuestos beneficiarios del proyecto populista - y que 'muchas veces son acompañadas por cambios políticos importantes, incluso el derrocamiento del gobierno', como en Brasil en 1964 y Chile en 1973 (Dornbusch y Edwards, 1991: 1-13). Si el populismo 'clásico', tradicionalmente interpretado en términos de factores económicos, fue el

producto de crisis, el populismo 'tarde' es el productor de crisis. Por añadidura, podemos ir más lejos y, comparando el populismo 'clásico' y 'tarde' (por ejemplo, Lázaro Cárdenas y Luis Echeverría), citar el viejo cliché de Marx, que dice que la historia se repite, la primera vez como tragedia, la segunda como farsa (Basurto, 1982). Además de su énfasis en la coyuntura, la política económica, y de ahí el voluntarismo (que contrasta con los determinantes estructurales de la teoría del populismo clásico), este enfoque también nos trae al presente: la administración de Alan García sería un caso ejemplar de la economía populista y de su rotundo fracaso (Lago, 1991). Sin embargo, como mucha de la literatura anterior, esta nueva corriente de interpretación es muy crítica, no tanto de la manipulación maquiavélica por parte del populismo, como de su afán ingenuo de soluciones fáciles, su expectativa utópica de que el crecimiento rápido y la redistribución real pueden realizarse por medio del fiat oficial.

En tres otros aspectos esta nueva interpretación económica comparte rasgos de las otras teorías. En primer lugar, sugiere que el populismo ya dejó de ser útil, no por motivo de cambios estructurales en la sociedad latinoamericana, sino debido a un proceso de aprendizaje lento y doloroso por parte de los líderes latinoamericanos y sus votantes; así, al empezar la década de los noventa, 'la mayor parte de los gobiernos han abandonado el populismo' y 'no obstante quién fue elegido, las políticas populistas fueron desprestigiadas y descartadas en la mayor parte del hemisferio (Kaufman and Stallings, 1991: 19; Drake, 1991: 39). Quizás el populismo no está extinto, pero está claramente deteriorado.

En segundo lugar, aunque esta interpretación es, en ciertos aspectos, muy concreta (por ejemplo, en cuanto a las etapas del proyecto populista), también podría aplicarse - mutatis mutandis - a muchos otros estados y economías. Las políticas de expansión y restricción ('stop-go') que han caracterizado a Gran Bretaña en la posguerra no responden a las metas igualitarias que, dicen, empujan al populismo; pero la historia de las sucesivas 'carreras para el crecimiento' ('dashes for growth'), con sus breves booms, crisis del balance de pagos, y resultados deflacionarios, ofrecen un modesto paralelo al populismo económico paradigmático. Es decir, si el concepto de populismo pierde su contenido político, y se define específicamente en términos de política económica, se encuentra otra vez en un vasto universo alternativo, en compañía de otros fenómenos bastante extraños. Ya sea discurso, clase, o política económica lo que se enfatiza, si se depende de un solo criterio de 'populismo' se acaba inevitablemente ante este problema analítico.

En tercer lugar, y quizás lo más importante, existe un problema empírico constante. Otra vez vemos que los populismos 'clásicos' no se ajustan bien al modelo. La administración de Cárdenas no cuadró con el síndrome populista: los déficits no fueron excesivos, la administración se

esforzó para contrarrestar los, no hubo ninguna 'aceleración extrema de inflación', los salarios no 'cayeron masivamente', no ocurrió ninguna recesión deflacionaria ni ninguna crisis política (Dornbusch and Edwards, 1991: 11-12; Bazdresch and Levy, 1991: 228; Cárdenas, 1991: 260). Se podría decir lo mismo respecto al régimen de Vargas (Rabelio de Castro and Ronci, 1991: 156, 168). Por supuesto, los analistas del populismo económico se interesan más en el populismo 'tarde' que en el 'clásico', por tanto en populismos que parecen corresponder a su modelo.⁹ Pero, a menos que querramos convertirnos en violentos iconoclastas semánticos, seguramente debemos poner en duda una teoría que - por ejemplo - considera a José Sarney más populista que Lázaro Cárdenas; o que niega la existencia de un populismo colombiano, no obstante la importancia clave del Gaitanismo (Urrutia, 1991). En breve, mientras que puede ser útil e instructivo analizar una clara política económica populista,¹⁰ no debemos caer en el reduccionismo económico, ni elevar este criterio, más que cualquier otro, ya sea discurso, clase, o etapa histórica, a un rango canónico sobresaliente. Como historiador, creo que todos estos enfoques contienen algo de verdad (es decir, algo de poder explicatorio), pero ninguno contiene toda la verdad.

Este resumen escueto de interpretaciones y definiciones - que no pretende ser exhaustivo - al menos nos ayuda a explicar por qué el populismo no está de moda en la actualidad. El populismo clásico está muerto; el populismo tardío, dicen, está moribundo y pocos lo lloran. Aunque la historia no haya llegado a su fin, parecería haber bastante consenso respecto a que el populismo - que todavía en sesenta podía considerarse como el movimiento reformista más prometedor de América Latina (Di Tella, 1969: 74) - no tiene ningún futuro. Como el comunismo, es cosa del pasado, una reliquia de la fase i.s.i. de desarrollo, invocada hoy día solamente por un grupo menguante de políticos que, a su vez, son considerados (aún por los que simpatizan con las metas igualitarias del populismo) como peligrosamente equivocados (Cardoso and Helwege, 1991; Thorp, 1992).

¿Pero es este fallecimiento, como el de Mark Twain, algo exagerado? No es la primera vez que el populismo ha sido declarado vencido, para levantarse otra vez del suelo (Wirth, 1982: ix). Permítanme ofrecer dos argumentos en contra. Primero, ni siquiera el populismo 'clásico' está muerto. Es decir, América Latina todavía ostenta movimientos y partidos que invocan al pueblo, lucen su nacionalismo, confieren al estado un papel económico importante (más importante que el que el neoliberalismo aceptaría), enfatizan el mercado doméstico, ofrecen cierto grado de redistribución, y apelan a los obreros y campesinos, entre otras cosas. Dos ejemplos obvios son el PT de Lula en Brasil y el PRD de Cuauhtémoc Cárdenas en México (Kaufman and Stallings, 1991: 33). Estos líderes/partidos no solamente cuadran con los criterios populistas (y no me

refiero, por supuesto, a los criterios minimalistas), sino también tienen una importancia innegable. En 1988 el PT ganó las alcaldías de 36 ciudades, incluso la de Sao Paulo y un año después, con un llamamiento policlasista y más moderado (*¿ergo*, populista?), consiguió el 38% de la votación en la elección presidencial. En 1988, Cárdenas recibió (oficialmente) el 31 % del voto, contra el 51% de Salinas, pero los cardenistas reclamaron el 41-42% (Cornelius, Gentleman and Smith, 1989: 19-20).

Por supuesto, es verdad que sus programas no son meras copias de sus predecesores (o padres) populistas. Lula ha declarado que representa una ruptura con la política laboral tradicional (French, 1992: 1). Cárdenas no ofrece un retorno a las políticas de los treinta. No abogan un simple regreso a la i.s.i., al proteccionismo, a la intervención estatal generalizada. Pero, en este contexto, vale mencionar dos puntos. Primero, ninguna tradición política es inmutable. Aún los Borbones - no obstante el celebre dicho - aprendieron algunas cosas y olvidaron otras. En vista de los paralelos manifiestos, es lícito ver, por ejemplo, el neocardenismo de 1988 en adelante como una versión modernizada - pero todavía reconocible - del populismo que florecía en la década de los treinta y que resurgió esporádicamente en los años posteriores, por ejemplo en los setenta. Y seguro que muchos partidarios neocardenistas ven su afiliación en estos términos. En el caso brasileño, French sostiene que existen claras continuidades - aunque a veces disfrazadas y hasta negadas (French, 1992: 282-3). Segundo, es importante acordar que aún los populismos clásicos de los años treinta y cuarenta no satisfacen perfectamente los supuestos criterios de populismo. La política macroeconómica de Cárdenas fue bastante ortodoxa; aún su nacionalismo económico, muy evidente en el caso celebre pero no-típico del petróleo, fue pragmático y en algunos sectores (por ejemplo, la minería) tanto suave como moderado. Vargas también 'comprendió que tenía que regir la economía dentro de los límites de las realidades financieras' (Raballo de Castro and Ronci, 1991: 168). Como señala Frieden, las políticas 'clásicas' de i.s.i. fueron productos no de los treinta, sino de la época de la posguerra - en el caso mexicano, de la época del alemanismo y del desarrollo estabilizador (Frieden, 1991: 48). Es decir, la falta de responsabilidad económica que se atribuye al populismo es en parte mítica; aún si fuera un cargo legítimo en contra del populismo tardío de hoy (el de García, por ejemplo), no se puede generalizar a los populismos clásicos de ayer, cuya irresponsabilidad económica a veces se acepta automáticamente en vez de ser examinada críticamente. Un examen crítico podría llegar a la conclusión que el populismo sociopolítico y la política económica ortodoxa no son totalmente incompatibles.

Además de sugerir el significado persistente del populismo de hoy, también debemos considerar su potencial. ¿Tratamos con escombros moribundos o con un fuego que un día podría encender la selva? Otra vez, la tendencia del historiador es desconfiar de las conclusiones definitivas y de las

auroras nuevas, y preferir interpretaciones más cíclicas.¹¹ Durante la década de los veinte la disciplina y las oportunidades del mercado fueron enfatizadas por los políticos latinoamericanos; diez años después prevalecía un paradigma muy distinto. Entonces, por supuesto, el desarrollo hacia adentro prometió un crecimiento real - y cumplió. El período de i.s.i. fue, de hecho, uno de rápido crecimiento per cápita de las principales economías latinoamericanas (Albuquerque Llorens, 1992). No sorprendería si la moda actual de librecambismo, de desregulación y privatización, de adelgazamiento del estado, también llegara a su fin;¹² especialmente si el mundo desarrollado quedara estancado, los booms frágiles de México y Argentina se agotaran, y el optimismo actual ('Latin America Cheers Up'; 'Latins Ride High')¹³ resultara ilusorio. Eso no quiere decir que se necesita, o se espera, un regreso a las políticas rigurosas de i.s.i.; podemos imaginarnos una forma de populismo - un 'neopopulismo', quizás - vinculado con un proyecto económico diferente, menos estadista, menos pródigo. Pero, además, este argumento puede ser válido aún si uno concede la lógica económica del neoliberalismo (que es otra cuestión). Es decir, un rechazo del neoliberalismo y un resurgimiento del populismo, incluso ciertos rasgos del populismo clásico o del llamado populismo económico, podrían ocurrir aún careciendo de racionalidad económica, o de legitimidad entre el gremio de economistas. La experiencia de aprendizaje ('learning experience') del populismo peruano bajo García quizás inculcó tanto al gobierno como al pueblo contra una repetición rápida de ese fenómeno. Pero la experiencia de aprendizaje del neoliberalismo - en Brasil, for ejemplo - también tiene su aspecto negativo. Y (quizás porque viví en los Estados Unidos de Reagan y Bush y en la Inglaterra de Thatcher y Major) no estoy convencido de que los proyectos de gobierno son determinados por una nitida racionalidad económica.

Pero hay otra - última - consideración más interesante. Podemos conceder que la experiencia del pasado - el agotamiento del modelo i.s.i., los defectos del hinchado sector estatal, los estragos de la inflación - hace que un regreso a las políticas populistas (ya estructurales o coyunturales) sea improbable y/o poco aconsejable. Pero, como sugerí antes, el populismo no debe definirse solamente en términos económicos. También significa un estilo político, una retórica, una relación entre líder y adherentes, una respuesta a las crisis, un medio de movilización, una forma de mediación política; como dice Wiles, 'un síndrome, no una doctrina' (Wiles, 1970: 166). Implica no tanto un proyecto económico o una alineación de clases determinados, sino una combinación de ideas, de estilo, de relaciones políticas que muestran cierta coherencia funcional. Estos varios elementos pueden cuadrar con una mezcla determinada de políticas económicas, o con una etapa de desarrollo económico, como la i.s.i. Pero sería equivocado encadenar al populista a una teoría 'etapista' de la historia, a un patrón modal que, como dice Roxborough, es bastante dudoso (Roxborough, 1984). De hecho, podríamos concebir - y hasta dar ejemplos - de

fenómenos populistas que se apartan de este patrón histórico. Con todo, los grandes 'ismos' – las ideologías claves de la historia – se han mostrado muy flexibles. El liberalismo tradicionalmente se ve como la ideología de los nuevos grupos comerciales e industriales europeos, pero como la de los terratenientes exportadores de América Latina. El fascismo se nutrió de la clase terrateniente italiana, de los votantes de la clase media provincial alemana, y de los campesinos rumanos. El comunismo soviético tenía su base en el proletariado industrial, el chino en la guerrilla campesina; y, como sugiere este último caso, el nacionalismo – muchas veces el vehículo de una burguesía creciente que busca la integración nacional y un mercado unificado – también puede ser apropiado por un campesinado en plena pugna con invasores extranjeros (Worsley, 1970: 214-217; Knight, 1992: 125-6). En cada caso, no solamente la base social, sino también el contexto histórico y el paso del 'tiempo mundial' determinaron una manifestación muy distinta de una ideología compartida.

Es al menos posible pensar el populismo en términos similares. Recuérdese que, muchos años antes de que surgiera el populismo 'temprano/ clásico/tardío' de este siglo, existieron otras versiones (¿formativas?), al menos según determinados historiadores: los caudillos 'populistas' de la época de la independencia y del siglo XIX, que tenían una autoridad carismática sobre fuerzas genuinamente populares, ofreciéndoles beneficios tanto materiales como psíquicos: por ejemplo, Hidalgo, Artigas, Juan Álvarez (Lynch, 1992: 43-4, 76, 332). Más recientemente, los populistas 'tempranos' de las primeras décadas de este siglo se adhirieron al librecambismo y ni trataron ni lograron introducir políticas económicas centralizadas y redistributivas: Madero, Obregón, Calles, Irigoyen, Alessandri (Drake, 1982: 237-8; Tamarin, 1982; Córdova, 1972; Collier and Colloer, 1991: 202-219).¹⁴ Me refiero a estos ejemplos para sugerir que, a través de los años, el populismo aparece en varios períodos, asociado con varios proyectos; y que, si bien el populismo y la i.s.i. tenían una relación lógica de apoyo mutuo, esa relación no es ni inevitable ni necesaria (Kaufman and Stallings, 1991: 21). Una relación entre el populismo y un proyecto económico ortodoxo, hasta incluso neoliberal, es al menos concebible; quizás podría ayudar contestar la pregunta lastimera: ¿'como pueden popularizarse las fórmulas liberales?' (Rabello de Castro y Ronci, 1991: 168).

Entonces, ¿como podría construirse un neopopulismo, correspondiente a una época neoliberal? Dos escenarios – sacados de la realidad, no de la imaginación – se presentan. Primero, la recesión de los ochenta, acoplada con la decadencia de la izquierda tradicional y el atractivo – al menos para los políticos – del proyecto neoliberal, han ayudado a producir una nueva generación de líderes latinoamericanos que practican lo que O'Donnell llama 'la democracia delegativa'. Es decir, la democratización aparente de los últimos años – en Argentina, Perú, Brasil, quizás México – en realidad se ve muy comprometida por el estilo político de líderes que,

si bien elegidos en las urnas, optan por gobernar de una manera arbitraria y autocrática, pretendiendo personificar la nación y el pueblo, no haciendo caso a las instituciones – sean tribunales, congresos, o partidos – que estorban la imperiosa voluntad presidencial (O'Donnell, 1992). Las credenciales populistas de estos líderes son, desde cierto punto de vista, muy escasas. Algunos, como Fujimori, se dan a conocer rechazando los excesos populistas de sus predecesores, por ejemplo, Alan García; otros, como Carlos Menem o Carlos Andrés Pérez, son los que Drake útilmente llama 'populistas que lanzan el anzuelo y cambian' ('bait-and-switch populists'), es decir, populistas tradicionales de antaño, apoyados por partidos populistas, quienes, una vez en el poder, han roto con su pasado populista y se han adherido a un proyecto neoliberal (Drake, 1991: 36).

Sin embargo, dejando de lado el proyecto económico, se ve que su estilo y su retórica políticos hacen pensar en precedentes populistas: lanzan llamamientos al pueblo, denuncian los intereses políticos creados, prometen cortar con el pasado corrompido, y ofrecen una alternativa nueva, 'moderna' y popular. El populismo chileno clásico, por ejemplo, se esmeraba en 'elogiar las virtudes del pueblo y censurar los fallos de las antiguas capas dirigentes del país'; Carlos Ibáñez, uno de sus protagonistas principales, pugnaba en contra de los partidos en nombre del pueblo chileno (Drake, 1978: 8; Grugel, 1992). Después de Gaitán, el gran campeón del populismo colombiano, vino Rojas Pinilla, que se enfrentó a los partidos, imitó a Perón, y trató de establecer una llamada Tercera Fuerza – popular, pero autoritaria – en contra del sistema bipartidario tradicional (Collier and Collier, 1992: 459-461; Di Tella, 1969: 66-67). Típicamente, los populistas clásicos eran indiferentes – incluso hostiles – a los detalles de la democracia representativa (Ianni, 1975: 138). Mientras que los críticos atribuyen esto al hambre populista del poder y al odio populista contra cualesquiera 'límites al poder del gobernante que las instituciones robustas podrían proveer' (Rabello Castro y Ronci, 1991: 168; Krauze, 1987), también debe tenerse en cuenta que, en ciertas circunstancias, hay gente – no necesariamente gente adinerada – que racionalmente prefiere un autoritarismo populista a una democracia elitista (Canovan, 1981: 160-164).

Dentro de los líderes de esta 'democracia delegativa' hay algunos – como Menem o Fujimori – que parecen tener cierto éxito con su plataforma política; otros, como Carlos Andrés Pérez, que apenas se agarran al poder; y Collor, por supuesto, que ya se fue. Sin embargo, la cuestión de éxito o fracaso debe separarse de la cuestión del carácter y de la lógica de estos regímenes. Mi argumento es sencillo: es posible concebir un nuevo populismo – el último de la serie histórica – cuyo atractivo para el pueblo estriba en su rechazo del populismo clásico, especialmente sus fallos económicos, pero que comparte con su supuesto adversario un sabor autocrático, arbitrario, plebiscitario, y anti-institucional. Así, el Presidente Salinas, cuando derroca a unos

atríncherados caciques laborales como La Quina o Jonguitud Barríos – los pilares de un antiguo populismo corporativista, o cuando requiere la renuncia de gobernadores PRIistas electos, probablemente va más allá de sus poderes constitucionales; pero pretende actuar en nombre del pueblo y aparentemente logra convencer a gran parte de la opinión pública. De la misma manera, Fujimori, que en su subida meteórica a la presidencia recibió un apoyo electoral sustancial de sectores pobres, tradicionalmente izquierdistas y Apristas, ahora disfruta de bastante aprobación pública en su Fujimorazo contra el Congreso nacional.

Por supuesto, pegar la etiqueta 'populista' a la democracia delegativa de O'Donnell es bastante dudoso. Significa un rechazo de la teoría 'etapista', del patrón modal, según cuales el populismo se ve como una cosa del pasado, ligada a estructuras económicas agotadas. Da prioridad al estilo, a la retórica, y a las relaciones políticas más que a otros factores como el proyecto económico y las alineaciones de clase. Y, por supuesto, trae el riesgo de diluir excesivamente el concepto del populismo, puesto que si el mero hecho de invocar al pueblo fuera prueba suficiente del populismo, los populismos serían muy abundantes (Canovan, 1981: 150, 261-288).

Personalmente, yo dudo que el populismo de Fujimori vaya a durar mucho tiempo; las llamadas para purgar y purificar los sistemas políticos – en términos norteamericanos, para 'echar a patadas a los bribones' ('kick the bums out') – son bastante frecuentes, sobre todo en época de recesión económica; y, generalmente, despiertan esperanzas que no se cumplen (recuérdese las campañas presidenciales y las administraciones tanto de Jimmy Carter como de Ronald Reagan). Sobre todo, tal populismo, con su llamamiento sencillo, negativo, anti-statu quo, es demasiado vago y mal definido; los movimientos, partidos y regímenes fuertes no se construyen, pienso yo, sobre los cimientos de una indignación efímera. Deben tener bases más concretas, que se echan solamente por medio de la lucha, la confrontación, la movilización y el sacrificio. La legitimidad duradera – en este caso, de tipo populista – necesita políticas genuinas de redistribución, beneficios materiales y psíquicos reales, movilizaciones de clases y comunidades; es decir, un populismo de hueso colorado. El atractivo del populismo debe ir más allá de la retórica; es una cuestión – como decían los pancartes en México en 1988, de hechos y no meras palabras.

Ahora vuelvo a mi segundo escenario. El gran éxito de los populismos clásicos de las décadas del treinta y el cuarenta – especialmente el cardenismo y el peronismo – fue que juntaron un discurso emotivo, psíquico y retórico con una redistribución real de recursos, con la lucha popular y con los intereses de clases (James, 1988).¹⁵ La naturaleza de estos movimientos no era igual, como ya dije: el cardenismo tenía una base rural y campesina, mientras que el peronismo dependía principalmente de la clase obrera urbana; que no era – como algunos análisis influyentes han sostenido – una clase obrera desarraigada, manipulada, disponible, que

'apenas despertaba de su sueño de siglos' (Germani, 1978; Di Tella, 1969: 51; cf. Murmis y Portantiero, 1971). Ambos movimientos forjaron una unión poderosa de ideología e interés material. Cárdenas destruyó las grandes haciendas y distribuyó más tierras que todos los presidentes anteriores; con un golpe audaz expropió las compañías petroleras y estableció la primera compañía petrolera estatal del Tercer Mundo. No obstante los problemas que tanto los ejidatarios como los petroleros tuvieron que enfrentar en los años siguientes, estos grupos fueron verdaderos beneficiarios de las reformas cardenistas y sus lealtades echaron raíces hondas. Cincuenta y dos años después del gran reparto de 1936, los laguneros festejaron la visita de Cuauhtémoc Cárdenas; y correspondientes - a veces más entusiasmados que letrados - le comunicaron a Cuauhtémoc su estima y apoyo a la antigua causa cardenista (Gilly, 1989). Así fue con el Peronismo. No obstante su base social distinta, o la situación más desarrollada de la Argentina, el Peronismo trajo no solamente beneficios concretos - mejores salarios, reconocimiento de sindicatos, ingresos accesorios - sino también premios 'afectivos'; según una perspectiva, alcanzó una forma de revolución cultural (Tamarin, 1982: 41). La conclusión - que 'Perón era un gran amigo de la clase obrera, el mejor que jamás ha tenido' (Schoultz, 1983: 39) - es, entonces, bastante razonable, y no el producto de una ilusión irracional de las masas. Y después, no obstante las vicisitudes y la represión, el Peronismo retuvo una secuela obrera fuerte y duradera (James, 1988). Como sugieren estos casos, el populismo no debe considerarse como un truco que engañó a un pueblo ingenuo, ni como una movilización manipulada de masas desarraigadas por parte de una elite maquiavélica, menos aún como un vestigio atavístico del patrimonialismo colonial (Connif, 1982: 7, 12-13, 21). Los líderes populistas no podían engañar a todo el pueblo todo el tiempo. Los motivos de los líderes cardenistas y Peronistas sin duda fueron diversos y a veces cínicos; pero, más importante, la presión apremiadora de las circunstancias los impulsaron a ofrecer - o conceder - beneficios, tanto materiales como psíquicos, que, a su vez, sostuvieron un populismo duradero. Esta no fue una simple imposición 'desde arriba' (ni, por supuesto, una insurgencia espontánea 'desde abajo'); más bien, fue una combinación de las dos, con líderes y seguidores influyéndose mutuamente, por medio de un proceso dialéctico y dinámico (Collier and Collier, 1992; Knight, 1990; Ianni, 1975: 18-19). En menor grado, podría decirse lo mismo del populismo brasileño (French, 1992). En contraste, los populistas que no cumplieron lo prometido, que intentaron controlar sin representar, que comerciaron en retórica, en 'palabras, no hechos', y que desatendieron - algunos dirían traicionaron - los intereses de sus seguidores, sufrieron pérdidas y derrotas, como, por ejemplo, sufrió el MNR en Bolivia en los sesenta (Mitchell, 1977).

Por tanto, el populismo retórico no puede aspirar a tanto poder y tenacidad. Pero - ahora como en el pasado - la retórica puede (énfasis, puede) combinarse con la política aún dentro del

nuevo ambiente neoliberal. Un ejemplo interesante es el Programa Nacional de Solidaridad. La realidad de Pronasol es compleja y proteica, y no me atrevería a resumirla ni a evaluarla en una breve página final.¹⁶ Sin embargo, sostendría que la ideología oficial de Pronasol, si fuera puesta en práctica de una manera acabada y honesta (una condición muy exigente!) ofrecería lo que una crítica bien informada llama 'soluciones neopopulistas a problemas neoliberales' (Dresser, 1991). Pronasol implica un rechazo radical de subsidios estatales generalizados que, se dice, son pródigos, costosos e indiscriminados; de tal manera, representa la antítesis del populismo económico tradicional. En lugar de eso, Pronasol ofrece beneficios para los más indigentes. Puede coexistir, por tanto, con un proyecto macroeconómico neoliberal; simbólicamente, los ingresos de la venta de Mexicana de Aviación son destinados al Pronasol. Esto promete - y, en cierto grado, trae - verdaderos beneficios: escuelas, becas, clínicas, alcantarillas, agua potable, electricidad. Por supuesto, éste no es el primer programa de obras públicas básicas, ni en México ni en el resto del continente. Han sido una pieza clave del populismo del pasado: con Cárdenas, Perón, Odría y otros. El populismo chileno, por ejemplo, se notaba por su 'capacidad para movilizar e integrar sus clientes' por este medio; como también lo era el partido oficial mexicano de antaño (Drake, 1978: 4). La diferencia, al menos teóricamente, tal vez en la práctica, es que Pronasol se ufana de haber roto con el estado rector, el estado papá; se vincula con una política librecambista; y busca (otra vez, teóricamente) devolver las decisiones a la comunidad local. En proclamar este proyecto, Pronasol puede alejarse del populismo clásico y alinearse con elementos distintos: con el solidarismo Católico (notése no solamente el nombre - Solidaridad - sino también el actual acercamiento entre la Iglesia y el Estado); con el concepto - ahora muy de moda, especialmente en Europa - de subsidiaridad (otro concepto de origen Católico); con los llamados 'nuevos movimientos sociales', que enfatizan la autogestión y una desconfianza marcada hacia el estado central; aún con algunos grupos radicales, que ven a Pronasol como una alternativa tanto al izquierdismo quijotesco como al dinosaurismo del PRI (Sigmund, 1992; Craig and Foweraker, 1990). Teóricamente, al menos, Pronasol ofrece una ideología ecléctica de esfuerzo comunal, autogestión, mejoras materiales, y devolución del poder al pueblo ('empowerment'); una ideología que se aleja del populismo clásico, étatiste, corporatista, pero que retiene un atractivo popular y, me atrevo a decir, populista. Hasta podría sostener que este neopopulismo de hoy - no obstante, o, quizás, debido a - sus rasgos cuasi-Católicos, se acerca más a las actitudes populares que el populismo clásico de ayer (Hennessy, 1970: 50-51).¹⁷

Todo esto, por supuesto, es muy especulativo. Implica no solamente el tomar en serio la retórica (cosa bastante riesgosa) sino también el enfatizar algunos aspectos del Pronasol a costa de otros. Lo que no se puede negar, en términos prácticos y no meramente teóricos, es que

Pronasol fue concebido como respuesta al desafío neocardenista de 1988 y que ha contribuido bastante a reforzar el prestigio del Presidente y, algunos dirían, a darle algo del carisma populista que, irónicamente, disfrutaba el celebre padre de su contrincante de 1988. Es demasiado temprano decir si este 'neopopulismo' va durar; sin duda, dependerá de factores imponderables importantes: el comportamiento de la economía, el Tratado de Libre Comercio, la sucesión presidencial. Sin embargo, las reacciones iniciales sugieren que no es imposible que un político hábil, dotado de recursos suficientes,¹⁸ logre una fusión del neoliberalismo y neopopulismo (y, quizás, de la democracia delegativa también), una fusión, por tanto, de un proyecto macroeconómico basado en el mercado y una estrategia política basada en iniciativas locales, la autogestión colectiva, las intervenciones presidenciales, el solidarismo y la subsidiaridad. En este contexto, vale acordarnos que algunos populismos del pasado – como el sonoreño de los años veinte – floreció sin recurrir a dosis masivas de intervención económica por parte del estado.

Sin duda, esta fusión, este matrimonio del neopopulismo y neoliberalismo, está lleno de tensión. Pero así son muchos matrimonios que logran durar y multiplicarse. Y tiene una ventaja importante: con el derrumbe del comunismo soviético y el desprestigio de la vía cubana, hay pocas alternativas radicales. El neopopulismo, entonces, puede ser el vehículo más apropiado para una política de movilización, redistribución y legitimación. Sin embargo, para tener éxito, tal populismo tiene que cumplir, tiene que hacer una realidad de la tantas veces afirmada afinidad entre el mercado, la democracia, y la descentralización. Comparado con populismos anteriores, esta versión pondría menos énfasis en los sindicatos y, en el caso mexicano, en la antigua institución corporativista del ejido, y más énfasis en la autogestión, los comités de vecinos, los grupos comunales, las mujeres, y los consumidores. Mostraría, también, alguna preocupación por el ambiente y menos entusiasmo por proyectos prestigiosos. Como tal, correría, si no con la marea de la historia, al menos con la moda contemporánea.

En corto plazo, Pronasol parece un éxito político. Compara bien, por ejemplo, con el fracaso relativo de los programas anti-pobreza en Argentina (Miodré, 1992). Aún sus críticos reconocen que facilitó el triunfo electoral del PRI en 1991 (Dresser, 1991: 23-24); y seguramente contribuyó a la nueva popularidad (¿legitimidad?) del Presidente. Pero, para que este experimento tenga éxito en mediano o largo plazo, tendrá que cumplir sus promesas y evitar la tendencia histórica según la cual los programas de reforma social y en contra de la pobreza han caído en el caciquismo y la burocratización, sirviendo los intereses de la casta política o de la clase media urbana (Knight, 1992a). Es decir, debe llevar a cabo sus ideales proclamados y alcanzar el supuesto matrimonio feliz entre la racionalidad del mercado y la solidaridad social. Es una cuestión de hechos, no palabras. Si no cumple, si se queda en un proyecto retórico

sirviendo los intereses de un neoliberalismo regresivo, entrará al fin en ese superpoblado círculo exterior del purgatorio reservado para los populismos fracasados, ésos que, erróneamente pensaron que podían engañar a todo el pueblo todo el tiempo.

Y es aquí que encontramos, por fin, el abrigo de Arturo Alessandri, que menciono como último ejemplo aleccionador. En una oportunidad, cuando el gran orador populista chileno dirigía la palabra a una multitud de mineros en un helado campamento de minería en el norte del país, un obrero gritó que tenía mucho frío. Con gran gesto de galantería, Alessandri tiró un bello abrigo desde la plataforma a sus oyentes. ¡Qué generosidad populista! Pero hay que notar: primero, que un solo abrigo entre tantos mineros no servía y, en la rebatía siguiente, el abrigo se hizo pedazos; y, segundo, resultó que el abrigo regalado no era después de todo el abrigo de Alessandri.

Alan Knight,

Profesor de la Historia de América Latina

Universidad de Oxford, Inglaterra

[dirección: St Antony's College, Oxford, OX2 6JF]

Notas

- 1 Las conotaciones negativas del populismo no son totalmente nuevas: véase Di Tella, 1969: 49.
- 2 No propongo en esta ponencia hacer recomendaciones políticas y normativas, más bien analizar el pasado y, de una manera tentativa, sacar algunas conclusiones para el presente.
- 3 A mi juicio, no hay definiciones o modelos 'correctos'; estos conceptos se justifican solamente en términos de su poder heurístico, es decir, su capacidad para ayudarnos a organizar y entender los datos empíricos.
- 4 Esto nos lleva al problema de cómo decidir si tal caso 'satisface' o no cierta definición: ¿qué grado de correspondencia se necesita, qué grado de discrepancia se permite? Y generalmente, éstas no son preguntas que se pueden contestar en términos estadísticos precisos.
- 5 Me refiero a Groucho, no a Carlos.
- 6 Mi conclusión en cuanto a Laclau, 1977, y (aún peor) MacRae, 1970.
- 7 Aunque cf. French, 1992: 317 n.41.
- 8 Es decir, vivos en el pasado muy reciente.
- 9 Se nota que, en su discusión del populismo económico en México, Bazdresch y Levy (1991) se concentran en el período pos-1970; parecen incluir al cardenismo en su crítica de los fallos económicos del populismo, pero su referencia al cardenismo es muy pasajera y superficial.
- 10 Aunque sea verdad que los gobiernos populistas clásicos - como el cardenista - pudieron portarse con bastante responsabilidad fiscal y financiera, sería posible sostener que, cuando extendieron los poderes del estado y su intervención económica, posibilitaron los excesos populistas de futuros regímenes.
- 11 Ha sido sugerido que los historiadores - como el griego Polybio o quizás el propio Maquiavello - que vivían en culturas que se percibían estar en decadencia, preferían interpretaciones cíclicas (y aleatorias) de la historia; mientras que los que tenían más confianza en el progreso y el futuro - clásicamente, los historiadores 'Whig' de la Inglaterra decimonónica - optaron por filosofías evolucionistas y teleológicas.

12 Un solo ejemplo: 'las soluciones del mercado libre son una receta para el fracaso'; 'Gran Bretaña . . . necesita un programa estatal desarrollista ('state-led development approach) de política industrial y financiera dentro de un marco macroeconómico Keynesiano': The Guardian, 19 de oct. de 1992, p. 15.

13 The Economist, 18-24 de abril de 1992, 18-24 de julio de 1992.

14 Tengo muchas dudas acerca del 'populismo' de Francisco Madero.

15 Pienso que Laclau quiere decir más o menos lo mismo, cuando dice - a su estilo propio - que, en casos como el Peronismo, el populismo 'consiste en la presentación de interpelaciones popular-democráticas como un complejo sintético-antagonista con respecto a la ideología dominante': 1977: 172-3 y passim.

16 Mi limitado conocimiento del Pronasol deriva principalmente de mi participación en la conferencia organizada por Wayne Cornelius en el Centro de Estudios de México-EE.UU., Universidad de California, San Diego, febrero 1992, 'Transforming State-Society Relations in Mexico; The National Solidarity Campaign'; y el panel siguiente en la conferencia de LASA, Los Angeles, setiembre 1992, 'The Recomposition of One-Party Dominance in Mexico, 1988-1992: The 'National Solidarity' Strategy'.

17 Pensando en el populismo católico, hay que recordar que hubo movimientos Católicos populares (y, en cierto grado, populistas) de gran envergadura, pero no tienen nada que ver con la teología de liberación ni con las comunidades de base de hoy: me refiero, por supuesto, a los Cristeros y a los Sinarquistas.

18 Un punto clave, por supuesto. El éxito de Cárdenas y, aún más de Perón, dependía de recursos económicos sustanciales. No quiero reducir el populismo a un mero clientelismo material, pero creo que una cierta disponibilidad de recursos es esencial; constituye una condición necesaria pero no suficiente, de un populismo exitoso; y de ahí surge la cuestión de los recursos actuales disponibles que, en mi juicio, mientras que son menores que en tiempos anteriores de boom, no son ahora tan exiguos para que imposibiliten una estrategia populista - como el ejemplo de Pronasol sugiere.

Bibliografía

Albuquerque Llorens, Francisco. 1992. 'La crítica situación de América Latina al inicio de los noventa y la necesidad de una estrategia de desarrollo alternativa al neoliberalismo'. América Latina Hoy, #4, julio 1992.

Basurto, Jorge. 1982. 'The Late Populism of Luis Echeverría', in Michael L. Conniff, ed., Latin American Populism in Comparative Perspective. Albuquerque: University of New Mexico Press, pp. 93-112.

Basurto, Jorge. 1992. 'Un aspecto del populismo mexicano: el corporativismo'. Paper given at the LASA conference, Los Angeles, Sept. 1992.

Bazdresch, Carlos, and Levy, Santiago. 1991. 'Populism and Economic Policy in Mexico, 1970-1982', in Rudiger Dornbusch and Sebastian Edwards, eds., The Macroeconomics of Populism in Latin America. Chicago: The University of Chicago Press, pp.223-259.

Canovan, Margaret. 1981. Populism. London: Junction Books.

Cárdenas, Enrique. 1991. 'Comment', in Rudiger Dornbusch and Sebastian Edwards, eds., The Macroeconomics of Populism in Latin America. Chicago: The University of Chicago Press, pp. 259-262.

Cardoso, Eliana, and Helwege, Ann. 1991. 'Populism, Profligacy and Redistribution', in Rudiger Dornbusch and Sebastian Edwards, eds., The Macroeconomics of Populism in Latin America. Chicago: The University of Chicago Press, pp. 45-74.

Cobb, Richard. 1969. A Second Identity. Essays on France and French History. Oxford: Oxford University Press.

Collier, David, and Collier, Ruth Berins. 1991. Shaping the Political Arena. Princeton: Princeton University Press.

Conniff, Michael L. 1981. Urban Politics in Brazil. The Rise of Populism, 1925-1945. Pittsburgh: The University of Pittsburgh Press.

Conniff, Michael L. 1982. Latin American Populism in Comparative Perspective. Albuquerque: University of New Mexico Press.

Cordera, Rolando. 1991. 'Solidaridad y su problemática', en Solidaridad a debate. Mexico: El Nacional, pp. 139-148.

Córdova, Arnaldo. 1973. La ideología de la revolución mexicana. Mexico: Ediciones Era.

Cornelius, Wayne, Gentleman, Judith, and Smith, Peter H. 1989. Mexico's Alternative Political Futures. San Diego: Center for US-Mexican Studies, UCSD.

Di Tella, Torcuato. 1969. 'Populism and Reform in Latin America', in Claudio Veliz, ed., Obstacles to Change in Latin America. Oxford: Oxford University Press, p. 47-74.

Dornbusch, Rudiger, and Edwards, Sebastian, eds. 1991. The Macroeconomics of Populism in Latin America. Chicago: The University of Chicago Press.

Drake, Paul. 1978. Socialism and Populism in Chile, 1932-52. Urbana: University of Illinois Press.

Drake, Paul. 1982. 'Conclusion: Requiem for Populism?', in Michael L. Conniff, ed., Latin American Populism in Comparative Perspective, Albuquerque: University of New Mexico Press, pp. 217-246.

Drake, Paul. 1991. 'Comment', in Rudiger Dornbusch and Sebastian Edwards, eds., The Macroeconomics of Populism in Latin America. Chicago: The University of Chicago Press, pp. 35-40.

Dresser, Denise. 1991. Neopopulist Solutions to Neoliberal Problems. Mexico's National Solidarity Program. San Diego: Center for US-Mexican Studies, UCSD.

French, John D. 1992. The Brazilian Workers' ABC. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Frieden, Jeffrey A. 1991. Debt, Development and Democracy. Princeton: Princeton University Press.

Conniff, Michael L. 1982. Latin American Populism in Comparative Perspective. Albuquerque: University of New Mexico Press.

Cordera, Rolando. 1991. 'Solidaridad y su problemática', en Solidaridad a debate. Mexico: El Nacional, pp. 139-148.

Córdova, Arnaldo. 1973. La ideología de la revolución mexicana. Mexico: Ediciones Era.

Cornelius, Wayne, Gentleman, Judith, and Smith, Peter H. 1989. Mexico's Alternative Political Futures. San Diego: Center for US-Mexican Studies, UCSD.

Di Tella, Torcuato. 1969. 'Populism and Reform in Latin America', in Claudio Veliz, ed., Obstacles to Change in Latin America. Oxford: Oxford University Press, p. 47-74.

Dornbusch, Rudiger, and Edwards, Sebastian, eds. 1991. The Macroeconomics of Populism in Latin America. Chicago: The University of Chicago Press.

Drake, Paul. 1978. Socialism and Populism in Chile, 1932-52. Urbana: University of Illinois Press.

Drake, Paul. 1982. 'Conclusion: Requiem for Populism?', in Michael L. Conniff, ed., Latin American Populism in Comparative Perspective. Albuquerque: University of New Mexico Press, pp. 217-246.

Drake, Paul. 1991. 'Comment', in Rudiger Dornbusch and Sebastian Edwards, eds., The Macroeconomics of Populism in Latin America. Chicago: The University of Chicago Press, pp. 35-40.

Dresser, Denise. 1991. Neopopulist Solutions to Neoliberal Problems. Mexico's National Solidarity Program. San Diego: Center for US-Mexican Studies, UCSD.

French, John D. 1992. The Brazilian Workers' ABC. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Frieden, Jeffrey A. 1991. Debt, Development and Democracy. Princeton: Princeton University Press.

Fukuyama, Francis. 1989. 'Entering Post-History', in New Perspectives Quarterly, vol. 6 #3, Fall 1989, pp. 49-53.

Germani, Gino. 1978. Authoritarianism, Fascism and National Populism. New Brunswick: Rutgers University Press.

Gilly, Adolfo. 1989. Cartas a Cuauhtémoc Cárdenas. Mexico: Ediciones Era.

Grugel, Jean. 1992. 'Populism and the Political System in Chile - Ibañismo (1952-1958)', in Bulletin of Latin American Research, 11/2, May 1992, pp. 169-186.

Hennessy, Alistair. 1970. 'Latin America', in Ghita Ionescu and Ernest Gellner, eds., Populism. London: Weidenfeld and Nicholson, pp. 28-61.

Hexter, J. H. 1971. Doing History. London: George Allen and Unwin.

Ianni, Octavio. 1975. La formación del estado populista en América Latina. Mexico: Ediciones Era.

James, Daniel. 1988. Resistance and Integration: Peronism and the Argentine Working Class, 1946-76. Cambridge: Cambridge University Press.

Kaufman, Robert R., and Stallings, Barbara. 1991. 'The Political Economy of Latin American Populism', in Rudiger Dornbusch and Sebastian Edwards, eds., The Macroeconomics of Populism in Latin America. Chicago: The University of Chicago Press, pp. 15-34.

Knight, Alan. 1990. 'Cardenismo: Juggernaut or Jalopy?'. Texas Papers on Mexico # 90-09. Mexican Center, ILAS, University of Texas at Austin.

Knight, Alan. 1992a. 'Solidarity: Historical Continuities and Contemporary Implications', paper given at the LASA panel 'The Recomposition of One-Party Dominance in Mexico, 1988-1992: The 'National Solidarity' Strategy', Los Angeles, Sept. 1992.

Knight, Alan. 1992b. 'The Peculiarities of Mexican History: Mexico Compared to Latin America, 1821-1992', Journal of Latin American Studies, vol. 24, Quincentenary Supplement, 1992.

Knight, Alan. 1993. 'The Politics of the Expropriation', in Jonathan Brown and Alan Knight, eds., The Mexican Petroleum Industry in the Twentieth-Century. Austin: University of Texas Press (forthcoming).

Krauze, Enrique. 1987. Lázaro Cárdenas, General misionero. Mexico: FCE.

Laclau, Ernesto. 1977. Politics and Ideology in Marxist Theory. London: NLB.

Lago, Ricardo. 1991. 'The Illusion of Pursuing Redistribution through Macropolicy: Peru's Heterodox Experience, 1985-1990', in Rudiger Dornbusch and Sebastian Edwards, eds., The Macroeconomics of Populism in Latin America. Chicago: The University of Chicago Press, pp. 263-323.

Lynch, John. 1992. Caudillos in Latin America. Oxford: Oxford University Press.

Macrae, Donald. 1970. 'Populism as an Ideology', in Ghita Ionescu and Ernest Gellner, eds., Populism. London: Weidenfeld and Nicholson, pp. 153-165.

Mitchell, Christopher. 1977. The Legacy of Populism in Bolivia. New York: Praeger.

Midré, Georges. 1992. 'Bread or Solidarity? Argentine Social Policies, 1983-1990', Journal of Latin American Studies, 24/2, May 1992, pp. 343-374.

Murmis, Miguel, and Portantiero, Juan Carlos. 1971. Estudios sobre los orígenes del peronismo. Buenos Aires: Siglo XXI.

O'Donnell, Guillermo. 1992. 'Hacia la democracia delegativa? Una entrevista a Guillermo O'Donnell', por Jorge Heine, in LASA Forum, vol.XXIII/2, Summer 1992, pp. 7-9.

Rabello de Castro, Paulo, and Ronci, Mario. 1991. 'Sixty Years of Populism in Brazil', in Rudiger Dornbusch and Sebastian Edwards, eds., The Macroeconomics of Populism in Latin America. Chicago: The University of Chicago Press, pp. 151-173.

Roxborough, Ian. 1984. 'Unity and Diversity in Latin American History', in Journal of Latin American Studies, 16/1, May 1984, pp. 1-49.

Schoultz, Lars. 1983. The Populist Challenge. Argentine Electoral Behavior in the Postwar Era. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Sigmund, Paul E. 1992. 'From corporatism to neo-liberalism. The transformation of the idea of subsidiarity in Catholic social thought in Latin America', paper given at the LASA conference, Los Angeles, Sept. 1992.

Tamarin, David. 1982. 'Yrigoyen and Perón: The Limits of Argentine Populism', in Michael L. Conniff, ed., Latin American Populism in Comparative Perspective. Albuquerque: University of New Mexico Press, pp. 31-46.

Thorp, Rosemary. 1992. 'The Future of the Latin American Economies', paper given at the LASA Conference, Los Angeles, Sept. 1992.

Torres Ballesteros, Sagrario. 1987. 'El populismo: un concepto escurridizo', in José Alvarez Junco, comp., Populismo, caudillaje y discurso demagógico. Madrid: Siglo XXI, pp. 159-180.

Urrutia, Miguel. 1991. 'On the Absence of Economic Populism in Colombia', in Rudiger Dornbusch and Sebastian Edwards, eds., The Macroeconomics of Populism in Latin America. Chicago: The University of Chicago Press, pp. 369-387.

Villa, Manuel. 1991. 'El Pronasol en la vida democrática de la nación', in Solidaridad a debate. Mexico: El Nacional.

Wiles, Peter. 1970. 'A Syndrome, Not a Doctrine', in Ghita Ionescu and Ernest Gellner, eds., Populism. London: Weidenfeld and Nicholson, pp. 166-179.

Wirth, John D. 1982. 'Foreward' in Michael L. Conniff, ed., Latin American Populism in Comparative Perspective. Albuquerque: University of New Mexico Press, pp. ix-xiii.

Worsley, Peter. 1970. 'The Concept of Populism', in Ghita Ionescu and Ernest Gellner, eds., Populism. London: Weidenfeld and Nicholson, pp. 212-250.

